

TÍTULO

La pertinencia del enfoque de género, como una garantía para el ejercicio del derecho al acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar

AUTORA

María Del Pilar Murillo Rodríguez

código estudiantil: 42122163

ASESORA

Gloria Andrea Mahecha Sánchez

Docente

MONOGRAFÍA DE INVESTIGACIÓN



UNIVERSIDAD LIBRE

FACULTAD DE DERECHO

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOJURÍDICAS

BOGOTÁ D.C.

2019

DEDICATORIA

A todas las mujeres víctimas de la violencia basada en género, en especial a las mujeres que sufren la violencia intrafamiliar. A ellas mi sororidad.

AGRADECIMIENTOS

A mi madre, Gloria Isabel Rodríguez, que desde mi niñez me alentó a defender las causas más nobles. A ella gracias por su ejemplo y por animarme siempre.

A todas las personas que me aconsejaron y me orientaron para sacar a flote este proyecto.

ACEPTACIÓN:

AUTORIDADES ACADÉMICAS

Fundadores de la Universidad Libre: Benjamín Herrera & Rafael Uribe Uribe

Presidente Nacional: Dr. Jorge Alarcón Niño

Vicepresidente Nacional: Dr. Jorge Gaviria Liévano

Rector Nacional: Dr. Fernando Dejanón Rodríguez

Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas: Dr. Fernando Salinas

Director del Centro de Investigaciones Socio jurídicas: Dr. John Fitzgerald Martínez Vargas

TABLA DE CONTENIDO

<i>Introducción:</i>	<i>página 9</i>
<i>Capítulo I</i>	
<i>La situación de las mujeres frente a la violencia intrafamiliar en Colombia</i>	<i>página 18</i>
<i>Diversas miradas sobre el concepto de acceso a la justicia</i>	<i>página 37</i>
<i>La regulación en Colombia sobre el derecho de acceder a la justicia, en el caso especial de las mujeres</i>	<i>página 44</i>
<i>Constitución Política y bloque de constitucionalidad</i>	<i>página 44</i>
<i>Normas- Decretos Nacionales</i>	<i>página 49</i>
<i>Jurisprudencia</i>	<i>página 62</i>
<i>Marco Histórico - En relación al acceso a la justicia para las mujeres</i>	<i>página 66</i>
<i>Cuestiones sobre el acceso a la justicia y el género</i>	<i>página 77</i>

*¿Qué es género? ¿Cuál es la diferencia entre género
y sexos? y ¿Qué se entiende por perspectiva de género?* *página 82*

*Posibles soluciones al problema de no acceder a la
justicia* *página 85*

Capítulo II

*Implementación del método: entrevistas a las expertas
Pilar Rueda, Claudia Mendieta & Sandra Zorio* *página 91*

*¿Sobre la pertinencia que las comisarías de familia
apliquen el enfoque de género en las medidas de
protección establecidas en la ley 1257 de 2008?* *página 107*

*La importancia del enfoque de género de derechos
para el enfoque de género* *página 117*

Capítulo III

*Sobre las necesidades de la Ley 1257 de 2008,
como aspecto innovador & propositivo* *página 143*

*Argumentación lógica de la conveniencia de aplicar el
enfoque de género en las comisarías de familia &
corroboración cualitativa.*

página 155

Conclusiones

página 161

Referencias

página 164

INTRODUCCIÓN

La violencia intrafamiliar en Colombia es un fenómeno social que ha alcanzado niveles impactantes, siendo el grupo poblacional de las mujeres, el más afectado. Así lo reveló el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en el reciente informe “Forensis Datos Para la Vida” (2016), en el cual se señala que la violencia intrafamiliar que se perpetuó contra las mujeres de la tercera edad fue del 50,70% del 100% de todos los casos registrados por el Instituto¹; igualmente señala el Instituto de Medicina Legal que la violencia que se ejerce contra las mujeres por parte de otros familiares diferentes a la pareja, alcanzó en el 2016 un registro de 14,738 casos, de los cuales el 67,73% de los casos fueron contra la mujer; siendo el factor desencadenante de la violencia el machismo con el 75,27% del 100% de los casos.

Ahora bien, respecto de esta delicada situación que se ha vivido a lo largo de la historia, Colombia ha realizado diversos esfuerzos para enfrentar el fenómeno de la violencia intrafamiliar; uno de ellos, fue la promulgación del Decreto 1477 del año 2000 que creó las Comisarias de Familia con el fin, entre otros, de garantizar el acceso a la justicia, y brindar orientación e información jurídica y de derechos humanos con énfasis en violencia intrafamiliar. Estos centros de multi servicios prestados por el Estado, son la aproximación más expedita que tienen las comunidades para acudir a las autoridades² en busca de la protección de sus derechos fundamentales cuando se presentan casos de violencias en el seno de la familia, principalmente. Así mismo, Colombia en cumplimiento con sus obligaciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos

¹ El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses reportó para el 2016, 1,653 casos de los cuales 838 fueron cometidos contra las mujeres de la tercera edad, es decir el 50,70% del 100% de los casos.

² En estas Casas de la Justicia, se encuentran delegados (a) del Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal entre otros.

de las mujeres, promulgó la Ley 1257 de 2008, “por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres” (Congreso de Colombia 4 de diciembre de 2008. [Ley 1257 de 2008]. DO: 47193). Esta norma es uno de los avances normativos más significativos en perspectiva de garantizar una vida libre de violencias para las mujeres; modificó a través de su artículo 17 las medidas de protección que ya estaban previstas en la Ley 294 de 1996, creando así, 17 medidas de protección y una medida innominada como herramientas concretas para luchar contra la violencia intrafamiliar específicamente aquella que se ejerce hacia las mujeres.

Estas medidas de protección buscan poner fin a las violencias o agresiones (bien sea, física, emocional, psicológica u económica) que están padeciendo las mujeres en sus contextos familiares; así mismo, estas medidas se caracterizan porque pueden ser de fácil aplicación por las autoridades y porque todas ellas se corresponden entre sí, es decir, tienen un componente de integralidad, que abrigan a la mujer en los diferentes espacios de su vida pública y privada para proteger su vida e integralidad tanto física como emocional. Estas medidas pretenden igualmente “garantizar independencia económica, viabilizar el restablecimiento de los derechos y la prevención de futuras situaciones de violencia (medidas en el ámbito del trabajo); asegurar la cualificación formativa o su permanencia en el sistema educativo (medidas en el ámbito de la educación); garantizar la atención integral en salud y el correlativo acceso a alojamiento, alimentación y transporte o, en su defecto, a un subsidio monetario para el periodo de transición hacia su restablecimiento (medidas en el componente de salud); y para el acceso a un recurso judicial efectivo para la protección de sus derechos y la sanción de los hechos (justicia.)” (Cooperación Sisma Mujer, 2016, pág. 61)

Sin embargo, las mujeres que son agredidas y que acuden a las comisarías de familia (autoridad, entre otras, responsable de atender la violencia intrafamiliar en Colombia) para ser atendidas y protegidas en sus derechos, no logran acceder a la justicia de manera tal que puedan recibir los beneficios integrales que ofrece las mencionadas medidas de protección en materia de justicia de la Ley 1257. Veamos

Al respecto la organización Sisma Mujer³ que acompaña a mujeres víctimas del conflicto armado y representa a mujeres víctimas de violencia sexual y doméstica, en regiones como la costa atlántica, la región pacífica y la andina⁴ publicó en el mes de noviembre del 2016 en la ciudad de Bogotá el informe “Ley 1257 de 2008, ocho años de obstáculos en la protección integral para las mujeres víctimas de violencias” en el cual se identificó que en las comisarías de familia existen múltiples obstáculos en el acceso a la de justicia para las mujeres. Entre los obstáculos más graves se resaltan: las deficiencias para ordenar las medidas de protección de manera integral; así como la omisión para hacerlas cumplir y para hacerles seguimiento; igualmente se encontró la existencia de un enfoque familista⁵; y la no interiorización de la ley 1257 de 2008 (Cooperación Sisma Mujer, 2016, pág. 64)

³ La organización Sisma Mujer es “una organización colombiana de carácter feminista que desde 1998 ha aportado a la consolidación del movimiento de mujeres, ha trabajado con mujeres víctimas de violencias y discriminación en razón de ser mujeres, en ámbitos privados, públicos y del conflicto armado, para la ampliación de su ciudadanía, la plena vigencia de sus derechos humanos y la promoción de su papel como actoras transformadoras de su realidad” (Sisma Mujer, 2018). Igualmente la organización trabaja “con un enfoque jurídico y de derechos humanos, integrales e interdisciplinarios, que fortalece procesos sociales para el empoderamiento individual y colectivo de las mujeres.” (Sisma Mujer, 2018)

⁴ Por mencionar algunas ciudades, se destacan: Cartagena, Choco, Carmen de Bolívar, Corozal, Pasto, Medellín, Bogotá y Valle del Cauca, entre otras.

⁵ El enfoque Familista es aquel que “busca poner los intereses de la familia por encima de los de sus integrantes, asumiendo que con ello se logra garantizar los derechos de los miembros del núcleo familiar. Aunque en principio esta parece ser una buena orientación, el problema que genera es que termina beneficiando únicamente a quien tiene el poder de decisión en la familia, y este generalmente es un hombre” (Guzman Rodríguez & Chaparro Gonzáles, 2013)

Igualmente la “Mesa por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, Ley 1257 de 2008” que es un espacio colectivo de investigación y seguimiento permanente en relación con el estado de cumplimiento de esta ley, y que reúne a más de 70 organizaciones de mujeres a lo largo y ancho de toda Colombia, ha señalado en su II Informe de Seguimiento a la Implementación de la Ley 1257 que:

Las organizaciones de la Mesa cuentan con experiencia en el trámite de las medidas integrales de protección en los ámbitos de justicia, salud, educación y trabajo de la Ley 1257 de 2008, a favor de las mujeres víctimas de violencias. Sobre la base de dicha experiencia, a continuación presentamos una serie de obstáculos existentes para garantizar la efectividad del modelo de protección integral, relacionados con: (i) la inobservancia de las autoridades del modelo de protección integral previsto en la Ley 1257; (ii) la falta de conocimiento de las autoridades competentes sobre su facultad para ordenar las medidas, y de las entidades responsables para cumplirlas; (iii) la persistencia de un enfoque familista en el trámite y la aplicación de las medidas ...

En términos generales la mesa encontró una serie de dificultades en relación con la información entregada por las entidades territoriales⁶. Se observa que el trámite de la conciliación existe soporte sobre la protección del derecho de las mujeres a no ser confrontadas con el agresor. Por último, es necesario señalar que la generalidad de las comisarías del país siguen adelantando el trámite y la adopción de las medidas de protección con base en las normas relativas al derecho de familia y no con fundamento en la ley 1257 de 2008 y su reglamentación. (Mesa por la Ley 1257 de 2008, 2013, pág. 29)

⁶ Hace referencia a los derechos de petición que radicó la Mesa Nacional de seguimiento por la Ley 1257 respecto del estado de implementación de la mencionada Ley.

Otro aspecto que permite valorar la vulneración del derecho al acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en las comisarías de familia, son las observaciones que realizó las Naciones Unidas a través del Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, al Estado Colombiano, en función del cumplimiento de la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer – CEDAW- (por sus siglas en inglés). En este documento el Comité señaló:

La preocupación por la alta prevalencia de la violencia contra la mujer, en particular la violencia doméstica y sexual, a pesar del amplio marco jurídico que aborda la violencia contra la mujer en el Estado parte. También le preocupan: Las incoherencias y la falta de articulación en el marco regulador de la Ley núm. 1257 (2008), así como la falta de una coordinación eficaz entre los diferentes ministerios **e instituciones gubernamentales que se encargan de su aplicación, lo que se traduce en un acceso insuficiente de las mujeres a las medidas de protección y apoyo previstas en ese marco.** (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2013, pág. 4) [Negritas fuera de texto]

Así las cosas, y con este panorama, el cual se abordará más pausadamente en los correspondientes capítulos, el presente trabajo de investigación sugiere que la perspectiva de género, [entendida esta como una categoría de análisis⁷ y de praxis⁸ que devela desde las miradas de los géneros las relaciones de poder que se construyen en perjuicio y detrimento de las mujeres] podría

⁷ Es categoría de análisis porque permite abordar y comprender los orígenes, causas y consecuencias de las violencias contra las mujeres

⁸ Y es praxis porque propende transformar las realidades que se construyen en detrimento de las libertades y derechos de las mujeres.

contribuir a la superación de los mencionados obstáculos en las comisarías de familia. En este sentido vale preguntarse, ¿por qué es pertinente, que las comisarías de familia apliquen el enfoque de género en las medidas de protección establecidas en la ley como efectivo acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar?

Para responder esta pregunta, se adelantó un trabajo de campo, el cual se desarrolló de acuerdo con los parámetros de una investigación cualitativa. Se desarrollaron tres entrevistas a mujeres expertas en el tema de género en el país, de manera que a través de sus amplias experiencias se pudiese valorar si resultaría pertinente o no la aplicación del enfoque de género en las Comisarías de Familia como una posible contribución al acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar

En este sentido la unidad de análisis para desarrollar las entrevistas fue el enfoque de género y las categorías fueron (i) el reconocimiento de una subordinación y dominación hacia la mujer, (ii) las relaciones de poder; (iii) la construcción social del género y (iv) los efectos prácticos de esa construcción social.

Ahora bien, la presente monografía en su objetivo general pretende demostrar que la aplicación del enfoque de género en las comisarías de familia es una garantía en el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en consecuencia en el primer capítulo se encuentra la contextualización y la demostración de la existencia de un problema jurídico real. El objetivo de este primer capítulo es evidenciar la situación de violencia que sufren las mujeres en espacios intrafamiliares así como evidenciar los obstáculos o fallas institucionales en las que ha incurrido las comisarías de familia.

De manera que, en el primer capítulo se condensa toda las cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forense que revelan la grave situación de violencia que viven las mujeres en su contexto familiar pese a las obligaciones del Estado colombiano en términos normativos nacionales e internacionales para prevenir, investigar y sancionar las violencias contra las mujeres; igualmente en el primer capítulo, se hace un recuento histórico sobre las primeras circunstancias en el que las mujeres lograron acceder a la justicia, esto se trae a colación, con el fin de ilustrar al lector respecto de las luchas que han adelantado las mujeres en reivindicación de sus derechos, y para que el lector pueda tener un marco histórico que le permita dimensionar cómo ha evolucionado el acceso a la justicia para las mujeres.

Por último, se considera la experiencia de Argentina, por ser una de las más reconocidas en América Latina, para aplicar el enfoque de género en la rama judicial. Para describir esta experiencia se abordó el libro de Paola Bergallo y Aluminé Moreno, denominado “Hacia Políticas Judiciales de Género” en el que se describe una serie de medidas entrelazadas entre sí para garantizan que el enfoque de género se aplique no solo para los justiciables (como llama ellas a las/os ciudadanos) sino también para los operadores (manera en como ellas se refieren a los funcionarios). Estas medidas las autoras las dividen en dos: (i) para audiencia interna, que no es más que las medidas que se deben tener en cuenta al interior de la institución, en este caso en las comisarías de familia; y (ii) para la audiencia externa, que hace referencia a las medidas que se tendrán que tener en cuenta para las ciudadanas que deseen acceder a las medidas de protección. Se trae a colación esta experiencia, en este aparte, como referente teórico que permita retomarlo más adelante como referente para develar las posibles necesidades de la Ley 1257 de 2008.

Posteriormente el segundo capítulo plantea como objetivo analizar las experiencias locales e internacionales en la aplicación del enfoque de género, para determinar si es o no pertinente su aplicación en las comisarías de familia.

De manera que en este capítulo se encuentra la conceptualización de la respuesta a la pregunta de investigación y se exponen los resultados de las entrevistas a las tres expertas, que fueron Pilar Rueda responsable de la implementación del enfoque de género en la Jurisdicción espacial para la paz -JEP - ; Claudia Mendieta que trabaja para la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá y es la responsable de una de las casas de la igualdad, escenario que se creó para fomentar el enfoque de género en las políticas públicas del distrito y se entrevistó a Sandra Zorio quien trabajó por varios años en la Organización de Naciones Unidas –ONU- Mujeres y es docente adscrita en la Universidad Nacional, con ella se pudo ahondar en la mirada internacional. Luego se analiza el enfoque de género como concepto práctico para evidenciar su pertinencia en las comisarías de familia y luego concretamente en las medidas de protección de la Ley 1257 de 2008, en este sentido se destaca que el enfoque de género contribuiría a desarrollar el principio de debida diligencia.

Y para concluir, el objetivo del tercer capítulo es establecer las razones socio jurídicas por las cuales se considera pertinente aplicar el enfoque de género en las comisarías de familia, como una solución a la dificultad que tienen las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar al pretender ejercer su derecho al acceso a la justicia.

Así las cosas, en este capítulo se emboza un contraste entre la ley 1257 de 2008 y las diferentes razones por las cuales que considera que es pertinente la aplicación del enfoque de género; esto con el fin de exponer cuales podrían ser algunas de las necesidades que tendría la norma mencionada en función de contemplar la perspectiva de género. Inmediatamente después se podrá

leer los argumentos por los cuales se indica que existe una conveniencia de aplicar el enfoque de género en las comisarías de familia de manera tal que pueda contribuir a la superación de los diferentes obstáculos o fallas institucionales, de tal suerte que favorezcan a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, al ejercicio pleno de su derecho al acceso a la justicia.

El presente trabajo de investigación, es ante todo, un esfuerzo por encontrar posibles soluciones que permitan superar los obstáculos que tienen que vivir a diario las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar; es un esfuerzo desde el campo socio jurídico para que el derecho fundamental al acceso a la justicia de las mujeres sea una realidad y no solo una premisa que se lee en la constitución o en los tratados internacionales que suscribe el Estado colombiano. La presente monografía intenta exponer las dimensiones profundas del sistema patriarcal en nuestros días, y como nos afecta en la cotidianidad. La invitación es a empoderarnos para que las construcciones culturales que se han perpetuado en la historia en detrimento de las mujeres se modifiquen, y lo contenido en esta monografía es desde la argumentación jurídica una posibilidad para transformar esas valoraciones culturales que afectan el diario vivir de las mujeres en Colombia.

I CAPITULO

LA SITUACIÓN DE LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN COLOMBIA.

El informe Ley 1257 de 2008, ocho años de obstáculos en la protección integral para las mujeres víctimas de violencias (Cooperación Sisma Mujer, 2016) es un documento que actualiza el estado de implementación de la Ley 1257, en Colombia. Este documento está dividido en 2 secciones. La primera sección tiene que ver con una descripción de la situación de violencias contra la mujer a partir de la consulta de fuentes oficiales, en este caso, el documento de la Corporación Sisma Mujer se basa en el Informe de Medicina Legal y Ciencias Forenses⁹ publicado en el 2016¹⁰, y la caracterización de los casos atendidos por la propia organización durante los años de 2014 y de 2015.

Sisma Mujer atendió, en 2014 y 2015, un total de 85 casos (34 en 2014 y 51 en 2015), de los cuales 11 se refirieron a hechos de violencia cometidos en el marco del conflicto armado y 74 casos a contextos domésticos o cotidianos en el ámbito familiar, comunitario y escolar, principalmente (Cooperación Sisma Mujer, 2016, pág. 14)

Igualmente en esta primera parte se encuentra un balance de la implementación de las medidas de protección en aspectos como salud, trabajo, educación y justicia. Es menester indicar que los hallazgos de la organización en relación con estas medidas, están fundamentados “en las respuestas

⁹ De acuerdo con el artículo 33 de la ley 938 de 2004, el Instituto de Medicina Legal es un establecimiento público del orden nacional, con autonomía administrativa y patrimonio propio que pertenece a la Rama Judicial y se encuentra adscrito a la Fiscalía General de la Nación. (Ley 938, 2004)

¹⁰ Fue publicado en el año 2016, en la ciudad de Bogotá y contiene las cifras de las diversas violencias que sufrieron las mujeres en el año 2015.

obtenidas a través de peticiones de información formuladas por la Corporación Sisma Mujer ante las diferentes entidades obligadas por la Ley 1257” (Coorporación Sisma Mujer, 2016, pág. 6), y en los informes que ha realizado la Red Nacional de Mujeres¹¹ con su “Mesa por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, Ley 1257 de 2008”¹², específicamente el Informe del año 2013.

Indica el Informe de Sisma Mujer que también contó con la consulta de fuentes secundarias para obtener estadísticas, datos relevantes y cifras, relevante para el Informe, cómo las páginas web de carácter oficial del Ministerio de Justicia, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, entre otros. Resalta igualmente las evidencias que ha recolectado en relación con los casos que representa, pero también de las asesorías y atención que brindan a mujeres víctimas de violencias durante el 2015.

En la segunda parte del Informe de la Corporación Sisma Mujer [en adelante el Informe], se explica a qué se debe la persistencia de los diferentes obstáculos en los distintos ámbitos de las medidas: justicia, salud, educación y trabajo. Finalmente el documento concluye con una serie de conclusiones y recomendaciones. Ahora bien, de acuerdo con el objeto de estudio de este trabajo de investigación, a continuación se exponen algunas valoraciones y resultados del Informe en relación con las medidas de justicia.

¹¹ “La Red Nacional de Mujeres es una apuesta feminista por la realización integral de los derechos Humanos de la mujeres desde un enfoque de reconocimiento a la diversidad para la transformación política y cultural de la sociedad. La Red Nacional de Mujeres nace en 1992 en Colombia, después de una activa participación en el proceso de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. En este proceso, un grupo diverso de mujeres, planteó una estrategia de incidencia para la inclusión de artículos que garantizaran una realización efectiva de los Derechos de las mujeres. Después de este proceso, diferentes grupos y feministas independientes consolidaron esta Red” (Red Nacional de Mujeres, 2018)

¹² “La Mesa Nacional de Seguimiento a la Ley 1257 de 2008 es un colectivo de mujeres independientes y organizaciones sociales de mujeres que tiene como principal objetivo promover el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias. Desde este espacio se ejercen acciones de exigibilidad política y seguimiento a las actuaciones gubernamentales, judiciales, legislativas y de control, relacionadas con la aplicación de la normatividad y su reglamentación” (Red Nacional de Mujeres, 2018)

En el Informe se lee la identificación de múltiples obstáculos en el acceso a la administración de justicia en las comisarías de familia, entre las más graves se resaltan las deficiencias para ordenar las medidas integrales de protección, así como la omisión para hacerlas cumplir y para hacerles seguimiento. Lo anterior fue también un diagnóstico que brindó la Red Nacional de Mujeres y su Mesa de seguimiento a la implementación de la Ley 1257 en el año 2013; en esa oportunidad la Mesa recogió las experiencias de las más de 70 organizaciones que representan a las mujeres víctimas de violencias en las regiones y señaló que las deficiencias para ordenar las medidas tienen que ver con que:

La autoridad competente no conoce con exactitud las facultades que tiene para ordenar las diferentes medidas previstas en la Ley 1257 de 2008 y su reglamentación. Esto se debe a la falta de conocimiento sobre la referida ley, pero, especialmente, a la falta de comprensión sobre su verdadero alcance. Las autoridades aún no asimilan que se trata de un marco jurídico especializado e integral de no violencias contra la mujer, relacionado con la protección del derecho humano de las mujeres a una vida libre de violencias, sino que mantienen un enfoque familista en el trámite de las medidas. (Mesa por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, Ley 1257 de 2008., 2013, pág. 30)

En lo concerniente a la organización Sisma Mujer, esta destaca que de acuerdo a la experiencia que ha tenido brindando asesorías gratuitas y a los casos en los que representa a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar a lo largo de los últimos 8 años (2008- 2016), ha logrado identificar que las mencionadas deficiencias para ordenar las medidas de protección por parte de las autoridades encargadas, en este caso las comisarías de familia, persisten.

Respecto de las deficiencias para hacerle seguimiento a las medidas de protección ordenadas, explica el Informe que se debe a la ausencia de un registro nacional unificado que permita no solo contabilizar el número de medidas de protección ordenadas¹³; sino el registro de a quién y qué medida se le otorgó, para verificar su estado de cumplimiento y si le fue o no, útil a la mujer agredida. Esta ausencia de seguimiento a las medidas fue reconocida por el Ministerio de Justicia desde el año 2014, cuando la Corporación Sisma Mujer le solicitara información al respecto.¹⁴ Sin embargo la Fiscalía General reportó que:

Se encuentra en desarrollo de un convenio interadministrativo con la Secretaría Distrital de Integración Social de Bogotá para intercambiar información entre el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) y el Sistema de Información y Registro de Beneficiarios (SIRBE) de las Comisarías de Familia de la Secretaría Distrital de Integración Social, con el fin de dar a conocer en tiempo real la noticia criminal, reincidencias, el fiscal asignado para el caso, intercambio de material probatorio, entre otros.¹⁵ El convenio pretende facilitar el cumplimiento de las funciones de policía judicial de las comisarías conforme a la Resolución 00918 de 2012. Sin perjuicio de lo significativo que podría ser este convenio, el mismo aún se encuentra en elaboración y, en todo caso, se trata de solo una entidad territorial. (Corporación Sisma Mujer, 2016, pág. 65)

¹³ Solo para el año 2013 se ordenaron “6.113 medidas de protección ante Comisarías de Familia en todo el país y 3.844 ante la Fiscalía. Sin embargo, se carece de información adecuada sobre el estado e implementación de las mismas” (Género, Corporación Humanas Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de, 2016)

¹⁴ Ver Informe “Ley 1257 de 2008, ocho años de obstáculos en la protección integral para las mujeres víctimas de violencias”, página 63.

¹⁵ “Respuesta del 5 de septiembre de 2016, FGN (oficio DNSSC 20167720220991), base anexa víctimas-actuaciones 8 años, a la petición elevada por la Corporación Sisma Mujer”

Otra de las dificultades resaltadas por el Informe, tiene que ver con la ausencia de comprensión del modelo integral de la norma, esto es, en las comisarías de familia no se interioriza que las medidas de protección que contempla la Ley 1257 son para aplicar de manera armónica y complementaria y no de manera fragmentada o aislada. Con lo cual se quiere decir que de nada sirve ordenar una medida de protección de carácter policivo¹⁶ sino se contempla ordenar otras medidas en ámbitos educativos, laborales y de salud que protejan integralmente la vida de la víctima. Lo anterior, quizás pueda explicarse, por el contenido de la “formulación de los lineamientos técnicos en violencias basadas en género para las comisarías de familia” elaborado por el Ministerio de Justicia¹⁷. Estos “lineamientos son un esfuerzo del Ministerio de Justicia por dotar de herramientas a estas entidades para el trámite de los casos de violencias contra las mujeres, conforme al derecho internacional de los derechos humanos de las mujeres” (Mesa por la Ley 1257 de 2008, 2013, pág. 32).

Sin embargo en estos lineamientos, que son uno de los documentos por los cuales se guían las comisarías de familia para el adecuado procedimiento a la hora de ordenar las medidas de protección, se omitió indicar la descripción del modelo integral de la Ley 1257, es decir, no comenta porqué deben aplicarse las medidas de forma complementaria, tampoco explica las razones por las cuales debe ser así, ni mucho menos se ordena cumplir con este principio establecido en la misma norma. Así fue descrito por la Mesa Nacional de seguimiento de la Ley 1257:

¹⁶ Ver Ley 1257 de 2008 artículos 16 y 17.

¹⁷ Resolución 0163 de 2013.

Consideramos que se perdió una oportunidad importante para dar cuenta del alcance de la Ley 1257 de 2008 y los decretos reglamentarios, pues era necesario explicar el modelo de protección integral previsto en ese marco jurídico, que comprende la adopción de medidas integrales en los ámbitos de salud, educación, trabajo y justicia; no solamente en este último, como quedó descrito en el texto de los lineamientos y que además fue reducido al ámbito policivo (Mesa por la Ley 1257 de 2008, 2013, pág. 33)

Por otro lado, el Informe resalta que los siguientes obstáculos, los cuales fueron identificados a partir de la investigación realizada por la Corporación Sisma Mujer ante las máximas autoridades responsables del cumplimiento de la Ley 1257; igualmente el Informe se fundamentó en los informes que ha realizado la Red Nacional de Mujeres¹⁸ con la “Mesa por el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencias, Ley 1257 de 2008”¹⁹, específicamente el Informe del año 2013; así mismo, el Informe cuenta con los hallazgos que la Corporación evidenció en el periodo 2014-2016 respecto de las asesorías que adelantó a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar; por último, el Informe cuenta con el resultado de una larga y considerada experiencia de la Corporación Sisma Mujer que le ha dejado la representación de mujeres igualmente víctimas de violencia intrafamiliar y sexual en diversas zonas del país²⁰

¹⁸ La Red Nacional de Mujeres es la agrupación de diversas mujeres y organizaciones de derechos humanos, fundada en 1992, que trabaja en una estrategia e incidencia para garantizar la efectiva realización de los derechos de las mujeres en Colombia

¹⁹ La Mesa Nacional de Seguimiento a la Ley 1257 de 2008 es un esfuerzo de mujeres independientes y organizaciones sociales de mujeres que dedican esfuerzos desde las acciones de exigibilidad política y seguimiento a las actuaciones gubernamentales, judiciales, legislativas y de control, relacionadas con la aplicación y reglamentación de la Ley 1257 de 2008

²⁰ Por mencionar algunas ciudades, se destacan: Cartagena, Choco, Carmen de Bolívar, Corozal, Pasto, Medellín, Bogotá y en el Valle del Cauca

“i) Una definición de violencia intrafamiliar que no se ajusta a la definición de violencia contra la mujer prevista en la ley y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y es incompatible con la legislación penal vigente.” (Cooperación Sisma Mujer, 2016, pág. 63)

Este obstáculo hace referencia a la definición que otorga la Guía Pedagógica para Comisarías de Familia sobre el procedimiento para el abordaje de la violencia intrafamiliar con enfoque de género [en adelante La Guía] expedida por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Al respecto, la definición de La Guía sobre violencia intrafamiliar, recoge varios conceptos adicionales como violencia física, sexual, económica, psicológica y patrimonial; lo cual es un error porque estas violencias son categorías generales que derivan de la definición internacional de violencias contra la mujer, en ese sentido la violencia intrafamiliar, explica la Red Nacional de Mujeres, es una modalidad por medio de la cual se pueden expresar esas modalidades de violencias contra la mujer.

“ii) Vacíos en el procedimiento de atención de las comisarías, por no integrar en los lineamientos para la entrevista y la valoración integral del caso elementos relativos a la documentación completa de la historia de violencias y de la discriminación sufrida por las mujeres a fin de dimensionar adecuadamente el riesgo

iii) Competencia de las comisarías de familia reducida a órdenes de protección en el ámbito policivo, sin incorporar el conjunto más amplio de las medidas que esas autoridades están llamadas a ordenar en materia de salud, trabajo y educación como parte del modelo integral.²¹

²¹ Este obstáculo se identificó a partir de la experiencia de las organizaciones que conforman la Red Nacional de Mujeres y a su vez la Mesa de seguimiento a la Ley 1257 de 2008.

v) Ausencia de claridad sobre la prohibición legal de conciliar la violencia intrafamiliar²² y del procedimiento específico para que las mujeres ejerzan su derecho a no ser confrontadas con el agresor, con una postura institucional validada por el Ministerio de Justicia para seguir sosteniendo procedimientos de solución de conflictos a fin de restaurar la armonía o unidad familiar en perjuicio de la protección de la mujer víctima.” (Cooperación Sisma Mujer, 2016, pág. 63)

No se aclara suficientemente la prohibición legal de conciliar la violencia intrafamiliar y no se aprovechó la oportunidad para explicar con detalle el alcance del Decreto 4799 que establece un procedimiento específico para garantizar el derecho de las mujeres a no ser confrontadas con el agresor²³. Si bien en el texto se destaca que no puede ser conciliada la violencia de género en la familia, y que las mujeres tienen derecho a no ser confrontadas con los agresores, no se explica suficientemente el procedimiento y se envía un mensaje ambiguo porque al mismo tiempo se validan procedimientos de solución de conflictos en pro de la unidad y armonía familiar, lo cual refuerza el enfoque familista en la formulación y aplicación del modelo de atención (Mesa por la Ley 1257 de 2008, 2013, pág. 34)

Vi) Igualmente, una de las posibles razones por las cuales las mujeres no acceden de manera integral y eficaz a las medidas de protección contempladas en la Ley 1257, es porque en la “Guía

²² En relación con el numeral (v) y a su aparte “ausencia de claridad”, hace referencia a que en el texto de lineamientos, es decir, La Guía

²³ Decreto 4799 de 2011, artículo 4. Derecho de las mujeres a no ser confrontadas con el agresor. Las autoridades competentes están obligadas a informar a las mujeres víctimas el derecho que tienen a no ser confrontadas con el agresor. Este derecho, consagrado en literal k) del artículo 8° de la Ley 1257 de 2008, incluye el derecho a manifestar ante la Fiscalía General de la Nación directamente, por escrito o a través de representante judicial, su intención de no conciliar. De igual manera, incluye el derecho a participar o no, en cualquier procedimiento o diligencia administrativa, civil o penal, ante cualquiera de las autoridades competentes, en las cuales esté presente el agresor. Con la manifestación de la mujer víctima de no conciliar quedará agotada la etapa de conciliación y se dará continuidad al proceso. En el trámite de las medidas de protección, este derecho se garantizará en relación con la etapa de conciliación ante cualquiera de las autoridades competentes (Mesa por la Ley 1257 de 2008, 2013, pág. 34)

Pedagógica para Comisarías de Familia sobre el procedimiento para el abordaje de la violencia intrafamiliar con enfoque de género”, el nivel de exigencia probatoria para demostrar la violencia intrafamiliar se equipará al que requiere un fiscal. Con esto, se desconoce los fines de las comisarías de familia y las fiscalías delegadas; así por ejemplo, en las comisarías de familia se busca la adopción de medidas para garantizar la vida e integridad

De las personas en situaciones de riesgo, y en la segunda se busca establecer la responsabilidad penal de los agresores; por tanto, los requisitos probatorios no pueden ser iguales de exigentes. Se plantea, por ejemplo, que las valoraciones físicas debe hacerlas el INML (Ministerio de Justicia y Derecho, 2012, p. 68) -sic- cuando en realidad basta –y así lo dice el Decreto 2734 de 2012– el concepto del médico de la entidad promotora de salud e incluso esta misma prueba es válida en el procedimiento penal, dada la vigencia del sistema acusatorio. Así que no se comprende la justificación para haber presentado un capítulo sobre las pruebas en el trámite de las medidas de protección, con unos niveles de exigencia probatoria aún mayores que los exigidos en los procesos penales. Esto equivaldría a que los programas de protección de la Fiscalía o de la Unidad Nacional de Protección exigieran semejantes niveles probatorios para otorgar medidas encaminadas a la guarda de la vida e integridad de las personas. Se olvida que se trata de un procedimiento adelantado en situaciones de riesgo, donde la respuesta estatal debe ser inmediata y efectiva para garantizar la vida e integridad de las mujeres.” (Mesa por la Ley 1257 de 2008, 2013, págs. 34, 35)

Otros documentos que permiten valorar una eventual vulneración del derecho al acceso a la justicia en las comisarías de familia, son los publicados por el Comité Para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.

Este Comité fue creado por la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer -CEDAW- [en adelante la Convención] en su aparte V, artículo 17. La Convención mencionada, fue adoptado por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas bajo la Resolución 34/180 el 18 de diciembre de 1979 y entrada en vigor para el Estado Colombiano desde el año de 1982²⁴.

El objetivo del Comité Para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer [en adelante el Comité] es “examinar los progresos realizados por los países partes en la aplicación” (ONU, 1979) de la Convención; así mismo, el Comité está compuesto por “veintitrés expertos de gran prestigio moral y competencia en la esfera abarcada por la Convención” (ONU, 1979) los cuales a su vez son elegidos por un periodo de 4 años por los Estados partes. Por otro lado, la metodología utilizada por el Comité es recibir en sesión oral un informe cada 4 años, al cual se le hace seguimiento y constantes actualizaciones y en el cual el Estado indica todas las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de cualquier otra índole adoptadas por el Estado parte en relación con sus esfuerzos por implementar los mandatos de la CEDAW; al respecto el Estado parte se compromete ante el Secretario General de las Naciones Unidas a someter toda la información necesaria para que el Comité pueda examinarla en sesiones protocolarias. Posteriormente y en el transcurso del periodo de sesiones correspondiente²⁵, el Comité envía al Estado un documento en el que se condensa, en relación con su informe, solicitudes para profundizar la información, pedir información actualizada, solicitar explicaciones, aclaraciones, e indicar contextos y en general solicitar al Estado cualquier dato o información que para el Comité sea relevante. Finalmente, y luego de las respuestas del Estado, el Comité elabora un documento, en el que se expone los avances que emula el Comité, los

²⁴ La entrada en vigor de la CEDAW en Colombia fue a partir del año 1982, pese a que la expedición de la norma que lo adopta fuese del año de 1981, con la Ley 51. Esto se debió a la espera una vez se cumpliera los trámites establecidos por la Ley 7ª de 30 de noviembre de 1994

²⁵ Por lo General los periodos en los que sesiona el Comité son cada 4 años. Sin embargo se pueden convocar cuando el Comité lo solicite ante el Secretario General de las Naciones Unidas.

retos del país en materia de protección de los derechos humanos de las mujeres, expresa igualmente, las preocupaciones del Comité y “los factores y las dificultades que afecten el grado de cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Convención” (ONU, 1979).

En este orden de ideas, el Comité Para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, hace seguimiento a los informes séptimo y octavo²⁶ (combinados, es decir, ambos en un solo informe) presentados por Colombia²⁷ en la quincuagésima sexta sesión²⁸. De acuerdo con este periodo de sesión y los informes presentados por Colombia, así como el Informe de Respuestas por el Estado, el Comité elaboró las “Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de Colombia”²⁹ en las que se señaló:

“Violencia contra la mujer

El Comité está preocupado por la alta prevalencia de la violencia contra la mujer, en particular la violencia doméstica y sexual, a pesar del amplio marco jurídico que aborda la violencia contra la mujer en el Estado parte. También le preocupan:

a) Las incoherencias y **la falta de articulación en el marco regulador de la Ley núm. 1257 (2008), así como la falta de una coordinación eficaz entre los diferentes ministerios e instituciones gubernamentales que se encargan de su aplicación, lo que se traduce en un acceso insuficiente de las mujeres a las medidas de protección y apoyo previstas en ese marco;**

²⁶ Informes cuya última actualización fue en el 26 de mayo de 2016. En el documento: “Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de Colombia”

²⁷ Según los Informes periódicos séptimo y octavo combinados de Colombia, las fuentes para la elaboración de los informes son las cifras oficiales de los diferentes ministerios del Estado que tienen que ver con la implementación de la CEDAW

²⁸ La cual tuvo lugar en Palais des Nations, Ginebra, el miércoles 2 de octubre de 2013; sesión la cual fue protocolizada a través de la Acta número 1161.

²⁹ Aprobadas por el Comité en su 56º período de sesiones del 30 de septiembre a 18 de octubre de 2013

b) Los retrasos en la aplicación de algunas disposiciones de la Ley núm. 1257 (2008), como las que se refieren a la creación de centros de acogida para las mujeres víctimas de la violencia;

c) La persistente impunidad con respecto a la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los autores de actos de violencia contra la mujer; y la falta de datos exactos desglosados por sexo, edad, etnia y relación entre la víctima y el autor del acto, así como el número de enjuiciamientos, condenas y penas impuestas a los responsables; y

d) **La presión que se ejerce sobre las mujeres víctimas de la violencia para que se reconcilien con sus agresores en las primeras fases del proceso administrativo o judicial, pese a la prohibición de ese procedimiento de reconciliación en la legislación (Ley núm. 1257 y Ley núm.1542).**

16. El Comité recomienda al Estado parte que:

a) **Vele por que las mujeres tengan un acceso adecuado a las medidas de protección y apoyo previstas en la Ley núm. 1257 (2008),** y para ello simplifique los procedimientos correspondientes; asegure la coherencia y la articulación entre los diferentes decretos que constituyen el marco reglamentario de la ley, mejorando la coordinación de las instituciones encargadas de su aplicación; y dote a estas instituciones de suficientes recursos humanos, técnicos y financieros para acrecentar su eficacia en el desempeño de su mandato;

b) Dé prioridad a la aplicación plena de la Ley núm. 1257 (2008), entre otras cosas velando por que haya centros de acogida para las mujeres y niñas y víctimas de la violencia en todo el país; ofreciendo una adecuada asistencia, protección y rehabilitación a las mujeres víctimas de

todas las formas de violencia; y cumpliendo su obligación jurídica interna de informar anualmente al Congreso sobre la situación de la violencia contra la mujer;

c) Se asegure de que el mecanismo de seguimiento de la Ley núm. 1257 (2008) vigile y evalúe efectivamente la aplicación de la ley y su marco reglamentario y garantice la participación de las organizaciones de defensa de los derechos de la mujer, incluidas las mujeres indígenas y afrocolombianas;

d) **Asegure el acceso de la mujer a la justicia, en particular adoptando medidas para combatir la impunidad; reforzando la capacidad de las Comisarías de Familia** e impartiendo formación obligatoria a los jueces, los abogados y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley sobre la aplicación coherente del marco jurídico existente y sobre los derechos humanos, en particular sobre la Convención, con inclusión de las distintas formas de violencia contra la mujer y de los estereotipos de género;

e) Establezca un sistema normalizado para la recopilación regular de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados por sexo, edad, etnia, tipo de violencia y circunstancias en que se cometió, con indicación del autor y de la víctima y de si existía una relación entre ellos; y

f) **Adopte medidas eficaces para garantizar a las mujeres víctimas de la violencia el derecho a no enfrentarse con su agresor y a no reconciliarse con él, de conformidad con la legislación sobre la materia**” (Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 2013, pág. 4) [Todas las negrillas y subrayados fuera de texto]

Hasta este momento, se ha intentado mostrar al lector de las diversas fuentes que identifican o realizan diagnósticos respecto de las fallas u obstáculos que se identifican en las comisarías de familia; en las cuales posiblemente se entorpece el efectivo ejercicio del derecho al acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Así mismo se ha recalcado en las fuentes de esas fallas u obstáculos.

A continuación se expone el panorama actual de violencia intrafamiliar contra las mujeres en cifras, de acuerdo con el último informe publicado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses: *Forensis* datos para la vida (2016)

El Sistema Forense obtuvo noticia de 26.473 eventos de violencia en contextos familiares durante el año 2016, sin tener en cuenta la cifra en relación con la violencia ejercida por la pareja o la ex pareja, en este sentido, reporta el Instituto, que el 59,13% de estos casos corresponden a agresiones contra la mujer. Respecto de la violencia intrafamiliar durante el 2016 ocurrieron 77.182 casos, de los cuales 50,707 fueron violencia ejercida por la pareja o por la ex pareja, es decir el 65,70% del total de los casos.

Por otro lado se destaca del Informe que el contexto más violento para las mujeres sigue siendo el familiar. Conoció el IMLCF que entre los años 2006 y el 2015, ocurrieron 289,784 agresiones a mano de integrantes de la unidad familiar diferentes a la pareja; y es que el fenómeno de la violencia ejercida por la pareja o ex pareja es tan grave que en el Informe *Forensis* se analiza esta circunstancia en un acápite especial.

A continuación se muestran algunos datos que reflejan el grado de violencia que sufren las mujeres en el contexto familiar, así como su estado de vulnerabilidad respecto de la violencia física, psicológica y económica. En este sentido se aborda apartes del citado Informe en relación con datos

que reflejan la violencia contra las mujeres de la tercera edad, violencia ejercida entre otros familiares diferentes a la pareja contra la mujer y la violencia ejercida por parte de la pareja o ex pareja; teniendo en cuenta aspecto del registro como el Factor causante de la violencia y los Escenarios donde ocurren los hechos, así como la Edad de las mujeres. Se abordaran de esta manera porque dichos ítems contribuyen a tener una mirada global del impacto de la violencia registrada por Medicina Legal contra la mujer.

En relación con la violencia intrafamiliar que sufren las mujeres de la tercera edad en el año 2016 se registraron 1,653 casos, de los cuales 838 fueron cometidos contra mujeres, lo que quiere decir que del 100% de los casos en los que hay violencia contra el adulto mayor el 50,70% es en contra de las mujeres y el 49,30% contra los hombres. Y es que según el Informe Forensis Medicina Legal (2016), los casos registrados podrían reflejar solo la punta de un gran iceberg, como quiera que las denuncias por violencia contra mujeres ancianas recurren a una dificultad especial y es poder acceder a las autoridades pertinentes para que se les proteja y atienda, ello debido a sus limitaciones físicas o mentales, además de esto, señala el Instituto, que existe una cultura para no denunciar, que bien puede explicarse por vergüenza moral o “por miedo a las represalias del agresor hacia la víctima tras denunciar a sus propios parientes; también se argumenta el sentimiento de culpabilidad por generar un conflicto adicional en la familia, y por temor a ser internados en un asilo” (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses , 2016, pág. 293)

En lo atiniente al factor causante de la violencia contra la mujer de la tercera edad, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, concluyó en su Informe Forensis Datos para la Vida (2016) que es el machismo el factor principal por el cual existen las agresiones con el 69,14% de los casos, mientras que causas como el alcoholismo o drogadicción ocupó el segundo lugar con el

4,07% ; a su turno también existen las causas económicas con el 2,22% y en cuarto y quinto lugar se fijaron las causas en razón de la enfermedad física o mental con el 9,12% y otras con el 1,85% respectivamente.

Por otra parte, el escenario más recurrente para la violencia contra las mujeres de la tercera edad tiene lugar en la vivienda. Así las cosas, en este espacio suceden el 86,83% de los casos de violencia; le sigue la vía pública con el 10,30% de los casos; seguido de otros espacios con el 1,44%; continúa los establecimientos de comercio con el 0,96% y cierran los centros médicos o lugares de cuidado con el 0,48% de los casos. En total fueron 835 casos de violencia contra la mujer de los cuales se tuvo información suficiente para elaborar las estadísticas, sin embargo aclara el Informe que 3 casos no se tabularon por no contar con la información suficiente, lo que confirma la cifra inicial de 838 agresiones contra la mujer de la tercera edad.

Como dato interesante, el Informe devela que el grado de escolaridad es determinante en los escenarios familiares donde existe la violencia, así las cosas a menor grado de escolaridad mayor frecuencia en el maltrato. Se muestra en el Informe que la mayoría de los adultos mayores maltratados fueron quienes habían cursado primaria o preescolar con el 67,92% de las agresiones registradas por el Instituto, mientras que el 17,49% de los adultos mayores agredidos responden solo a la educación secundaria, ambas cifras suman el 85,41% de los casos, una cifra escandalosa en términos de la condición vulnerable de las personas que se encuentran en indefensión en razón a su avanzada edad.

Los anteriores resultados sugieren que cuando la persona tiene más oportunidades de acceder a la educación, menor es la probabilidad de que esta se vuelva un agresor; estudios sugieren que “los que poseen menor escolaridad presentan dependencia financiera al agresor; y esto, junto con el miedo

a perder la fuente de afecto, impide denunciar el acto de violencia” (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2016, pág. 242).

Se analiza ahora, la violencia que se ejerce contra las mujeres por parte de otros familiares diferentes al de la pareja, en este sentido el Informe Forensis datos para la vida (2016) reportó 14,738 casos de violencia de los cuales el 67,73% corresponde a mujeres maltratadas. Se tiene que el factor desencadenante de la violencia en este ítem continua siendo el machismo con el 75,27% de los casos; seguido del 17,96% y el 3,86% en relación con el alcohol y los celos, respectivamente, por último se encuentran las causas por razones económicas con el 1,43% de los casos: de igual manera el ámbito privado se consolida como el escenario donde ocurre con mayor frecuencia la violencia, con un registro de 10,599 casos, esto es el 72,03% del 100%.

“En este tipo de violencia familiar prevalece la violencia contra la mujer. De 14.738 víctimas atendidas en 2016, 64.73% correspondían a mujeres; lo que significa que por cada 10 hombres lesionados en el contexto de la violencia que nos ocupa, fueron agredidas 18 mujeres. La tasa de las mujeres es 77,83% superior que la de los hombres.” (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2016, pág. 259) Es decir que, de la violencia que se ejerce por parientes diferentes a la pareja, la frecuencia con la que se agrede a una mujer es del el 77,83%.

Por otro lado, la violencia de pareja, conyugal o doméstica, es una conducta abusiva que pretende demostrar por parte del agresor un sentimiento de dominación y control respecto de su pareja, así lo describe en el Informe el Instituto Nacional de Medicina Legal:

“La violencia doméstica proviene de estructuras sociales, económicas, políticas y culturales desigualitarias e injustas. No se trata de un fenómeno nuevo, pero su reconocimiento como problema social si es relativamente reciente. Para que la violencia ejercida contra las mujeres en el hogar haya trascendido desde el ámbito privado al ámbito público, ha sido necesario que las mujeres paguen un alto precio, pues han sido numerosas las víctimas que han muerto a causa de este tipo de violencia” (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2016, pág. 308)

En este orden de ideas, el sistema médico legal ha atendido durante el 2007 al 2016 más de 527.284 casos en contextos de violencia de pareja, el cual aumento en un 7% en el 2016, con una tasa de 126,30 por cada 100.000 habitantes. Ahora bien, solo en el 2016 se registraron 50.707 casos, de los cuales el 86% fueron contra la mujer.

Refleja el Informe que el grupo de edad más afectado de las mujeres en relación con la edad es de los 25 a los 29 años, seguido de 20 a 24 años y que la causa o factor desencadenante de la violencia es el machismo seguido de los celos, con el 47,29% y el 35,85% respectivamente. Igualmente señala el informe que sigue siendo la vivienda el escenario más peligroso para las mujeres, con el 72,29% o lo que es lo mismo 31,810 mujeres denunciaron haber sido agredidas por sus compañeros permanentes en la vivienda. La ciudad de Bogotá está dentro de las ciudades más violentas en relación con el maltrato a la mujer por parte de sus compañeros permanentes, solo Bogotá tiene 10,734 casos contra la mujer de los 43,615 de todo el país. En total el Instituto atendió 50,707 casos de violencia de pareja de los cuales el 86% (43,615) fue contra la mujer.

Concluye el Informe con afirmar que “la violencia contra las mujeres se expresa en diversas formas y espacios de convivencia. Si bien se trata de un problema que afecta de manera individual a

quienes la padecen, debe entenderse como un fenómeno estructural con repercusiones sociales múltiples. El hecho de que las mujeres a menudo tengan vínculos afectivos con el hombre que las maltrata y dependan económicamente de él, ejerce gran influencia sobre la dinámica del maltrato y las estrategias para hacerle frente” (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2016, pág. 308)

Que es lo que uniformemente se conoce como la violencia económica.

DIVERSAS MIRADAS SOBRE EL CONCEPTO DE ACCESO A LA JUSTICIA.

Se estima pertinente abordar lo que se entiende por acceso a la justicia, y en ese sentido es menester citar una de las obras más importantes para la ciencia del derecho y el estudio del acceso a la justicia; la obra de Mauro Cappelletti & Bryant Garth *El Acceso a la Justicia* (1983) en la cual se aborda la evolución del concepto de acceso a la justicia. En primer lugar, explican los autores que acceder a la justicia era un derecho natural que se hallaba limitado al derecho que tenían las personas afectadas para litigar o defenderse en litigio, luego por lo cual la actividad del Estado respecto del acceso a la justicia era pasiva, en la medida que los derechos naturales no necesitaban regulación, se estimaban como superiores al mismo Estado y en este sentido el Estado solo se limitaba en la práctica a reconocer que personas podían defender su derecho.

En este contexto, el rol del Estado, continúan explicando los autores, no era “indigencia jurídica”. Acceder a la justicia estaba ligada a la capacidad económica de pago, esto es, la justicia solo era posible o accesible en el sistema liberal a quien podía pagarlo, quienes no podían cancelarlo eran considerados culpables.

Como lo señala Cappelletti & Garth (1983) posteriormente las sociedades modernas fueron superando las ideologías liberales contenidas en las declaraciones de derechos y garantías de las constituciones de los siglos XVIII y XIX surgieron las nuevas tendencias encaminadas a reconocer los derechos sociales por parte de los gobiernos en sus constituciones, derechos tales como la salud, la educación, la seguridad social y el acceso a la justicia, pero que necesitaban entonces de las herramientas jurídicas para concretarse, según los autores, es por esto que el acceso a la justicia es el derecho más importante de los derechos humanos.

Concluyen los autores, en esta obra referente en las universidades de derecho en el mundo, que “el acceso a la justicia no significa únicamente reconocer cada vez en mayor medida los derechos sociales fundamentales, sino que constituye la columna vertebral de todo el derecho de hoy día”. (Cappelletti & Garth, 1983, pág. 23)

Por otro lado, el escritor Javier de la Rosa Calle, en su libro *Acceso a la justicia: elementos para incorporar un enfoque integral de la política pública*, se acoge a la definición que planteó en el año 2005 las Naciones Unidas, en los siguientes términos “es el derecho de la persona sin distinción de sexo, raza, edad, identidad sexual, ideología política o creencias religiosas a obtener una respuesta satisfactoria a sus necesidades jurídicas” (ONU, Manual de Políticas Públicas para el Acceso a la Justicia , 2005), sin embargo el autor deja claro que no debe entenderse por acceso a la justicia, en ese sentido esgrime que el acceso a la justicia no es equiparable con la *tutela judicial* ya que tal consideración reduciría el acceso a la justicia a brindar las garantías judiciales antes y después de un proceso judicial; tampoco se puede equiparar con *la mejora de la cobertura estatal* porque tendría que ver con el equívoco -a juicio del autor- enfoque institucionalista según el cual el problema de las necesidades jurídicas se resuelve con las tribunales, mejores equipamientos y más recursos humanos.

Continúa Javier de la Rosa, explicando que el enfoque apropiado para abordar el acceso a la justicia es el impulsado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en el cual se considera el acceso a la justicia “como un instrumento para las transformaciones de las relaciones de poder que perturban la exclusión, la pobreza y la subordinación de grupos tales como *mujeres*, indígenas, migrantes, niños y niñas, ancianos, discapacitados, población con bajos ingresos etc”. (Calle J. , 2009)

Lo conceptualizado por estos autores, cobra mucha importancia para la presente monografía, porque una posible vulneración al derecho de acceder a la justicia en las comisarías de familia, no podría entenderse como la vulneración minúscula a un derecho cualquiera, todo lo contrario, que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar no pudiesen acceder a este derecho sería el reflejo de una falla como Estado Social de Derecho respecto de sus fines esenciales.

Ahora bien, realizando un ejercicio crítico; en Colombia, el acceso a la justicia pareciese asimilarse justo como el autor Javier de la Rosa Calle advierte no debe interpretarse. Ello porque los obstáculos o fallas institucionales de las comisarías de familia, enunciadas con anterioridad, podrían relacionarse con falta de formación en temas de mujer y género y no con problemas de cobertura. Esto es, el problema de acceder a la justicia en Colombia quizás, se relacione más un tema de cobertura estatal (enfoque institucionalista) y no con un eventual problema de la calidad en esa cobertura.

Otra punto de vista del acceso a la justicia es definida por Birgin & Gherardi como un derecho humano. Al ser un derecho humano tiene rango constitucional y está garantizado por los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. Igualmente, señalan que este derecho se configura como un ejercicio propio de la ciudadanía, esto implica que no garantizar el acceso a la

justicia es una forma de exclusión y discriminación de hombres y mujeres de su ejercicio a la ciudadanía.

De igual forma, señalan Birgin y Gherardi (2008) que el acceso a la justicia implica la transformación de cierta circunstancia o problema en un cuestionamiento jurídico y que para ello, son necesarias cuatro etapas: (i) el aceptar la existencia de un problema; (ii) examinar que tal dificultad puede ser de naturaleza jurídica; (iii) encontrar que o quienes podrían tener culpa del problema y transformar este en una exigencia judicial o administrativa de largo aliento (iv) lograr la efectividad del fallo

Al respecto, las autoras llaman la atención sobre tres aspectos diferenciados pero que son a su vez complementarios. En primer lugar, la posibilidad de acceder al sistema judicial y que este sistema brinde un pronunciamiento justo en un tiempo razonable, lo cual va de la mano con la prestación de un buen servicio de justicia que parte del conocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos y de los medios que gozan para hacerlos efectivos, entendiendo el acceso a la justicia como “un derecho y la consiguiente obligación del Estado de brindarlo y promoverlo” (Birgin & Gherardi, 2008, pág. 170)

Por otro lado, para Casal, Roche, Richter & Chacón en su obra Derechos Humanos, Equidad y Justicia (2005) no existe un concepto único y uniforme respecto del acceso a la justicia, más bien este responde a múltiples escenarios y circunstancias entre las que se destacan la disciplina desde la cual se examine, ya sea jurídica o sociológica. Sin embargo, ubican un común denominador para definirlo como un “derecho que permite acudir a órganos facultados para la protección de derechos o intereses o para la resolución de conflictos” (2005, pág. 23)

Este concepto es también entendido para ellos, en un sentido amplio, describiendo el acceso a la justicia como

Un derecho adscrito al derecho a la tutela judicial o jurisdiccional efectiva, también llamado derecho a un juicio justo o al debido proceso, o derecho a la justicia o a la jurisdicción, consagrado en los Artículos 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y se contrae a la posibilidad efectiva de acudir ante los órganos jurisdiccionales en defensa de derechos o intereses. (Casal, Roche, Richter, & Chacón Hansón, 2005, pág. 23)

También sugieren que un mejor e igualitario acceso a la justicia es importante en la medida que contribuye a elevar la calidad de la justicia, aumentando con ello la equidad social y la moral.

Al respecto, es menester destacar una diferencia que existe entre la obra de Casal, Roche, Richter y Chacón con la obra de Javier de la Rosa. Esta diferencia radica en que los primeros asocian el acceso a la justicia con la tutela judicial o el debido proceso mientras que De la Rosa no, de hecho es categórico en señalar que el acceso a la justicia no se puede asociar con la tutela judicial. Luego por lo cual, sería lógico pensar que una discusión académica que se podría generar entre autores, giraría alrededor de la siguiente pregunta: ¿Al inscribir el derecho de acceder a la justicia, dentro de la categoría de tutela judicial se estaría reduciendo el concepto de este derecho a las garantías propias de un proceso judicial?

Con este interrogante, no se busca ahondar en él ni mucho menos responderlo, sino más bien dejarlo como inquietud para el lector; igualmente exponer a la o el lector las diversas y variadas miradas que pueden existir sobre la definición de un derecho que es universalmente conocido;

señalando que no hay una definición única, uniforme e invariable, y la muestra de ello son las posibles discusiones / debates que se pueden generar.

Continuando con las miradas conceptuales sobre el derecho de acceder a la justicia, para Guzmán & Prieto (2013) el concepto de este derecho es definido en los mismos términos que los anteriores autores, en el sentido de reconocerlo como un derecho. Este derecho ellas lo describen como fundamental, del goce de toda persona sin discriminación alguna. Sin embargo, para las autoras existen ciertos elementos que construyen este significado, estos son: primero, las condiciones de igualdad en las que todas las personas deberían acceder a la justicia; segundo, la existencia de unos mecanismos adecuados y sencillos; tercero, la necesidad de resolver situaciones conflictivas que ameriten la intervención del Estado; y cuarto, proferir una decisión que sea satisfactoria, oportuna y a la cual se le dé seguimiento.

De acuerdo con este enfoque, Guzmán y Prieto (2013) definen el acceso a la justicia como un derecho que tienen las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, resaltando su importancia en la obligación del Estado de garantizar los recursos judiciales efectivos para la satisfacción plena de sus derechos, significando esto un posible avance en términos de igualdad para las mujeres.

Ahora, si bien hay similitudes en la forma en que Birgin & Gherardi (2008), José María Casal (2005) y Guzmán & Prieto (2013) definen el derecho de acceso a la justicia, es de resaltar que en gran medida las diferencias entre estos autores radican en su manera de abordar el concepto de acceso a la justicia.

En el caso de Birgin & Gherardi (2008), este concepto se compone de 3 elementos diferentes pero complementarios entre sí, los cuales son: la posibilidad misma de acceder o llegar al sistema, un

pronunciamiento de la autoridad justo y en un tiempo razonable; los conocimientos de la ciudadanía respecto de sus derechos y medios para hacer efectivo sus derechos; mientras que José María Casal en la obra “Derechos Humanos, Equidad y Acceso a la Justicia” (2005) lo aborda desde un sentido amplio y estricto. En sentido amplio se refiere a la posibilidad de acudir a los órganos facultados para la protección de sus derechos y para resolver sus conflictos, y en sentido estricto como el derecho consagrado en tratados y pactos internacionales. Por su parte, Guzmán & Prieto (2013) abordan el concepto de acceso a la justicia desde el componente de igualdad y no discriminación, destacando la necesaria existencia de unos mecanismos y decisiones idóneas que permitan superar a tiempo los conflictos-

En este orden de ideas, se aprecia que la mayoría de los autores destacan el acceso a la justicia como un derecho humano y una garantía. Así mismo podría decirse que este derecho es la ventana abierta para alcanzar el ejercicio y goce de otros derechos que se ligan o vinculan especialmente con él, tales como “la vida, la integridad personal, la libertad, el debido proceso, la igualdad ante la ley, la propiedad, el trabajo, el derecho a la personalidad jurídica y el libre desarrollo de la personalidad, entre otros,”(Corte Constitucional Colombiana, T-399, 1993) como quiera que, y como bien lo indicaba la Corte Constitucional (1993) la concreción de estos derechos depende en buena medida de la celeridad con la que actúen los funcionarios públicos responsables de garantizarlos.

Así las cosas, con el anterior ejercicio de realizar una mirada sobre los diferentes conceptos respecto del derecho al acceso a la justicia, se puede inicialmente concluir que este derecho debería comprenderse en su expresión más amplia y garantista. Poder acceder a la justicia no se agota a la atención que se puede recibir en un módulo, cabina, o ventanilla; acceder a la justicia tiene que ver con la satisfacción de las expectativas de las y los ciudadanos, en el sentido de tener una respuesta del Estado oportuna y veraz; acceder a la justicia es materializar los derechos humanos de las víctimas.

En lo concerniente, Colombia ha implementado diversas medidas del orden jurídico para intentar garantizar a sus nacionales el derecho de acceder a la justicia. Estas medidas están a continuación divididas por bloque de constitucionalidad colombiano, leyes, decretos nacionales y locales y finalmente una mirada sobre lo jurisprudencial, que en Colombia tiene el carácter de vinculante para los operadores de justicia.

LA REGULACIÓN EN COLOMBIA SOBRE EL DERECHO DE ACCEDER A LA JUSTICIA, EN EL CASO ESPECIAL DE LAS MUJERES:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA & BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD

La Constitución Política en su artículo 229 (Constitución Política, 1991), estableció el derecho de todos y todas las colombianas a acceder a la administración de justicia en condiciones de igualdad. Al respecto el máximo Tribunal Constitucional (2013), indicó que la exigencia de justicia de personas naturales o jurídicas en Colombia comprendía de igual manera unas obligaciones para las autoridades públicas como titulares del poder coercitivo del Estado, en este sentido, las obligaciones son tres, la primera, respetar, segunda proteger y por ultima realizar los derechos humanos. Continua la Corte (2013) advirtiendo que la obligación de respetar el acceso a la administración de justicia como derecho humano implica igualmente por parte de Estado abstenerse de tomar medidas que impidan el goce del derecho, además de inhibirse de tomar medidas discriminatoria, como de *género*, o nacionalidad; respecto de la obligación de proteger, explicó la Corte Constitucional (2013) que esta obligación consistía en tomar todas las medidas necesarias para evitar que terceros obstaculicen el

acceso a la administración de justicia; y finalmente describió la obligación de realizar, con dos elementos: (i) se refiere a facilitar las condiciones para el disfrute efectivo del derecho; (ii) a hacer propiamente todo para hacer efectivo el derecho y ello implica la adopción de medidas que eviten que la discriminación pueda frustrar el derecho de hombres y mujeres a acceder a la administración de justicia.

Igualmente la Constitución Política en su artículo 13, estableció la condición de igualdad con la que gozan todos los residentes colombianos, y lo hizo contemplando estos elementos: (i) es la condición de igualdad frente a la ley; (ii) igualdad frente al trato y la protección de la autoridades; (iii) igualdad en derechos, oportunidades y libertades sin importar su condición sexual, religiosa, opinión política o filosófica, raza, lengua, origen nacional, o familiar; (iv) se obliga al Estado a tomar medidas para que la igualdad sea real.

Y es que la realización de la igualdad supone también que los individuos y el Estado se abstengan de realizar conductas discriminatorias, es decir comportamientos que pongan a una persona en condiciones de desventaja por motivos ilegítimos (Comisión Colombiana de Juristas, 1997, pág. 33) es decir motivos discriminatorios.

Otro artículo que sustentaría el derecho de las mujeres a acceder a la administración de justicia es el artículo 43 de la Carta Magna (Constitución Política, 1991), este artículo pretende corregir las diversas formas de discriminación contra la mujer que persisten en la sociedad colombiana en los ámbitos públicos, privados y laborales (Comisión Colombiana de Juristas, 1997, pág. 182); el artículo consagra los siguientes elementos: (i) igualdad entre hombres y mujeres en derechos y oportunidades; (ii) *abolición todo tipo de discriminación*; (iii) hay una protección manifiesta a favor de las mujeres en condición de embarazo y las mujeres cabezas de familia.

Ahora bien, la Constitución de 1991, en su artículo 29 que es el que consagra el derecho fundamental al debido proceso, dejó también establecida la manera como hombres y mujeres accederían a la administración de justicia, es decir que la Constitución se ocupa no solo de otorgar los derechos que durante muchos años en la historia de las mujeres fueron reivindicaciones históricas, sino que indica los presupuestos básicos de cómo se iba a materializar el derecho a la administración de justicia. En este sentido el artículo 29 consagró, para intereses de esta monografía, el derecho a un proceso público sin dilaciones injustificadas. Esto tiene que ver mucho con el objeto de investigación en la medida que una de las posibles razones por las cuales las mujeres no acceden a la justicia, está relacionado con una eventual dilación injustificada para aplicar integralmente las medidas de protección previstas en la ley 1257, concretamente en su artículo 17.

Por otro lado, “pretender encerrar el tema del derecho de acceso a la justicia dentro de las fronteras del derecho nacional sin considerar al derecho internacional limita las posibilidades de conocimiento del tema” (Universidad Nacional Autónoma de México , 2011) es por ello que ahora, se revisará los apartes normativos que Colombia ha suscrito en materia internacional.

En el contexto internacional se tiene la Declaración Universal de Derechos Humanos que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la ciudad de París, el 10 de diciembre de 1948 en la Resolución 217 A (III), y El Pacto de San José que fue suscrito, tras la Conferencia Especializada Interamericana de Derechos Humanos, el 22 de noviembre del año de 1969 en la ciudad de San José en el país de Costa Rica. La Declaración estipuló en sus artículos 8 el derecho a un recurso judicial efectivo ante los tribunales nacionales y el artículo 10 consagró el derecho de toda persona en condiciones de igualdad a ser oída y recibir justicia por un tribunal. Pero es quizás el

artículo 8.1 del Pacto de San José (1969) el más explícito para definir que es el derecho a la justicia, el artículo menciona los siguientes elementos para entender el derecho: (i) *la posibilidad de que la persona pueda ser oída*; (ii) *que la persona tenga todas las garantías a que haya lugar*; y (iii) a que esa justicia pueda estar en el marco de un *plazo razonable*, así mismo contempla el artículo que estas condiciones recaen en un juez, o cualquier autoridad del Estado y que esta autoridad debe ser (i) *independiente*; (ii) e *imparcialidad*.

Esta igualmente la Convención Americana de Derechos Humanos, que es, si se quiere, el código o mandato con el que todo el sistema interamericano de derechos humanos se guía, en especial la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así pues, en su artículo 25 declaró el derecho que le asiste a toda persona de tener un recurso *rápido y efectivo* ante los jueces o tribunales y que tal derecho es igualmente procedente aún si se tratara de violaciones que cometieren personas en ejercicio de su función pública.

Por otro lado , para el año de 1994 el 9 de junio en Brasil, se promulgó la Convención Belém Do Pará, que contempló el derecho a un recurso sencillo y rápido contra todo acto que atente contra los derechos de las mujeres; pero también promulgó la Belém Do Pará (1994) que los Estados suscritores se comprometerían a establecer los procedimientos legales necesarios, justos y eficaces para que la mujer que haya sido sometida a violencia tenga medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos, y continua así: “establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces.” (CEDAW, 1994, Numeral g, artículo 7) Lo que significa un aporte valioso para comprender la dimensión del derecho al acceso a la justicia para las mujeres.

Y por último a nivel internacional se tiene la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la cual fue aprobada en 1979 por la Asamblea General de la ONU, entrando en vigor en septiembre de 1981. Para el año 2015 Naéla Gabr embajadora y experta del Comité de la CEDAW, definió este instrumento así:

“La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) es el único instrumento vinculante, universalmente reconocido, que no solo lucha contra la discriminación de la mujer, sino que también dedica su atención a los derechos y las libertades que pueden preservar su dignidad y bienestar, y alienta todas las medidas que le puedan ofrecer nuevas oportunidades.” (Garb, 2015, pág. 1)

Esta convención fue creada siguiendo los principios de las Naciones Unidas de dignidad, igualdad de derechos entre mujeres y hombres, el valor de la persona humana y la reafirmación de la vigencia de los derechos humanos, igualmente, la Convención desarrolló el significado de “igualdad” e indica cómo lograrla³⁰. Así por ejemplo, uno de los mandatos más significativos de la CEDAW (1979) en lo atinente a lograr la igualdad, está contenida en su artículo 3 al exhortar a los Estados partes a tomar en todas las esferas, y en particular la esfera política, social, económica, cultural y legislativa, las medidas necesarias para asegurar el goce de los derechos humanos de las mujeres, así como sus libertades fundamentales en igualdad con el hombre.

Con lo visto anteriormente, el bloque de constitucionalidad colombiano contiene una sólida normativa en relación específica con los derechos y libertades de las mujeres, de manera que, las posibles dificultades que tienen las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar para acceder a la justicia, no tendrían que asociarse a ausencias normativas, pues como se ha descrito, el legislativo

³⁰ Se pueden leer desde el artículo 3 hasta el 14.

colombiano se ha ocupado de expedir las herramientas jurídicas para atender y erradicar las diferentes formas de discriminación contra las mujeres.

Así mismo, el concepto de acceder a la justicia, pasa por comprender que este derecho no es, la limitación a la mera posibilidad de tener contacto con entidades o funcionarios públicos, sino que este derecho se transversaliza por un instrumento eficiente y eficaz capaz de satisfacer el derecho a las mujeres, además de acceder con las garantías necesarias y sin ningún tipo de discriminación para que en un tiempo razonable la mujer afectada tenga una respuesta satisfactoria por parte del Estado.

DECRETOS NACIONALES:

A continuación, se encontrará un barrido de los diferentes decretos del orden nacional que reflejan cómo se reglamenta en Colombia el acceso a la justicia, en el caso especial de las mujeres, de acuerdo con la Constitución Política y su Bloque de Constitucionalidad.

El primer decreto que habría que mencionar es aquel que le permite a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia basada en género pueden acudir a las denominadas Casas de Justicia, creadas por el decreto 1477 del año 2000· estas Casas son centros de multi servicios prestados por el Estado en los que participa el Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, Comisarias de Familia, el Instituto Nacional de Medicina Legal entre otros, con el objetivo de facilitar a la comunidad en general su derecho al acceso a la justicia, en este sentido este Decreto es de especial importancia porque es la manera por la cual el Estado materializa el derecho al acceso a la justicia ya que son el centro de acopio inmediato en las cabeceras municipales, zonas marginales o en comunidades donde hay más de 2.500 personas.

Las Casas de Justicia tienen a su vez por mandato del artículo 4, brindar orientación e información jurídica y de derechos humanos con énfasis en violencia intrafamiliar, además de desarrollar programas preventivos bajo estos mismos parámetros.

En estas Casas de Justicia, las mujeres pueden acudir, entre otros, para solicitar alguna de las medidas de protección contempladas en la Ley 1257 de 2008, cuando han sido víctimas de cualquier tipo de violencia. En Colombia la reglamentación alrededor de estas medidas están previstas en 5 decretos del orden nacional. El primero es el Decreto 652 de 2001 que se ocupó de señalar que: (i) la solicitud de cualquier medida de protección debe ser presentada de manera escrita, oral o cualquier otro medio idóneo; (ii) precisó algunos deberes para el funcionario, en el sentido de garantizar la protección de la víctima, así como de orientarla en los servicios que presta el Estado para la atención del maltrato intrafamiliar; (iii) que el termino para interponer la solicitud de protección será de 30 días siguientes al hecho de violencia; (iv) que habrá una audiencia en la que se definirá si la medida de protección se fija o no, y que esta audiencia deberá realizarse dentro de los 10 días siguientes a partir de la fecha de la presentación de la solicitud de la medida de protección; (v) contempla igualmente que para el cumplimiento de las medidas de protección podrá contarse con la colaboración de la Policía Nacional; (vi) fijo 8 criterios³¹ que tendrá que tener en cuenta el operador en las Casas de Justicia y el Juez para decretar las medidas de protección.

Sin embargo, algunos de estos 8 criterios podrían resultar permisivos en situaciones de violencia intrafamiliar y hasta posiblemente lesivos para los derechos de las mujeres. Es el caso del

³¹ “Ver artículo 8 del Decreto 652 de 2001: la evaluación psicológica y física de la víctima, la naturaleza del maltrato sus circunstancias previas, concomitantes y posteriores; determinar si una posible conciliación (acuerdo) puede ser eficaz para remediar la violencia y prevenirla; examinar la reiteración del agresor; incorporar al acuerdo conciliatorio fijación de tiempos para verificar el cumplimiento de lo pactado; propiciar la preservación de la unidad familiar en armonía; vigilar y orientar que exista congruencia con las obligaciones que se contraen en el acuerdo; precisar en el acuerdo la obligación de cumplir lo pactado y las consecuencias de no cumplir con ellas.”

literal “d” que señala como criterio para decretar una medida de protección el “*examinar la reiteración del agresor en la conducta violenta*”. Lo que sugiere que si el agresor ha ocasionado daños en ocasiones pasadas, es más factible que la mujer acceda a una medida de protección que una mujer que este denunciando por primera vez cualquier tipo de agresión. Este criterio, podría estar sugiriéndole al operador o funcionario público que la violencia que se ejerce contra una mujer por primera vez, no resultaría tan grave, como podría serlo si la violencia es frecuente o repetitiva.

Imaginemos por un momento, que una mujer que acaba de ser agredida por primera vez, por cualquier miembro de su núcleo familiar, acuda a cualquier comisaría de familia para buscar ayuda, orientación y acciones para proteger su integridad y que el funcionario en la comisaría de familia se abstenga de emitir una medida de protección porque en su evaluación de criterios que contempla el Decreto 652 de 2001, literal d, pudo observar que el acto de violencia no ha sido repetitivo, y al no cumplir la mujer con las condiciones previstas en este Decreto no podría ser beneficiaria de las acciones contempladas en las medidas de protección. Esta hipotética situación (que podría ser el caso de varias mujeres) es un mensaje que se envía a la sociedad de permisividad, porque en ningún caso, así sea la primera vez, la violencia debe tolerarse, todo lo contrario, deber ser atendida y vigilada por el Estado de manera inmediata; de manera que, las medidas de protección deberían operar sin importar que medie un antecedente de violencia.

Por otro lado, en el numeral f se le indica al funcionario público que debe propiciar la preservación de la unidad familiar en armonía. Es quizás este criterio el que más ha generado críticas de las organizaciones de derechos humanos y de mujeres³² porque podría estar indicando que lo

³² Ver acápite de caracterización de la situación. Ver informe de Sisma Mujer 2016. Ver entrevista a Pilar Rueda, feminista, responsable del eje de Mujer y Género de la Jurisdicción Especial para la Paz.

esencial no es reprimir o sancionar la violencia intrafamiliar sino promover la unidad familiar, pese a que en ella no exista respeto por sus integrantes y existan agresiones.

Este criterio en lo cotidiano ha causado tanto relevo que se le conoce y se le denuncia como *el enfoque familista*. Este enfoque consiste en priorizar la institución de la familia por encima de los derechos individuales de sus integrantes, asumiendo con ello que los derechos de sus miembros ya están garantizados si se pone ante todo la preservación de la familia. Esto en el caso específico de las mujeres se traduce en que cualquier tipo de violencia que se ejerza contra ellas debería ser tolerada o permitida; es como una especie de carga que las mujeres deben soportar por creer o considerar que sus hijos (si es que los tiene) solo estarían mejor en crecimiento con su padre o que la mujer debe soportar ser maltratada porque ella solo podría ser feliz con él o considerar que las agresiones debe aguantarlas en silencio porque por algún tipo de determinación casi que divina ese es su rol y la unidad de la familia es más importante que su propia vida, salud, integridad, paz y felicidad.

Continuando con el análisis del Decreto 652 de 2001, se lee en el artículo 9 la necesidad de probar la agresión, y para ello se tendrá en cuenta, entre otros medios idóneos, la prueba pericial gratuita que realizará Medicina Legal. De igual manera en casos en donde el juez de familia, civil municipal o comisario de familia, dicte orden de arresto contra el agresor esta se hará efectiva a través de un oficio que se enviará al comandante de la Policía municipal o departamental quien a su vez informará cuando haya logrado el arresto; esto en complemento con el artículo 10 que prevé que para el cumplimiento de una medida de protección y de ser necesario el funcionario podrá solicitar apoyo a la Policía Nacional para hacerla efectiva. Finalmente, en lo concerniente a los aspectos de corte formal que dispone este Decreto para la ejecución de medidas de protección para las mujeres víctimas de violencias, se destaca el artículo 12 en el que se señala que el trámite para las sanciones

por incumplimientos de las medidas de protección se realizará de acuerdo con los parámetros establecido por el Decreto 2591 de 1991

En este orden de ideas, el Decreto 652 de 2001 indica el cuándo y cómo se debe dictar una medida de protección, y aunque no reglamentó todo sobre estas medidas es uno de los decretos claves para comprender el origen de algunas de las posibles fallas o dificultades que se expusieron en el acápite de la situación de las mujeres frente a la violencia intrafamiliar en Colombia.

El segundo decreto que reglamenta las medidas de protección para las mujeres en Colombia, deviene en el marco del 37 periodo de sesiones del Comité de la CEDAW en el que se exhortó a Colombia a adoptar todas las medidas que sean necesarias para erradicar la violencia contra las mujeres por cualquier persona, organización o agentes estatales, así mismo instó al Estado para superar las causas de la violencia y dedicar esfuerzos al mejoramiento del acceso a la justicia a mujeres víctimas, planes de protección y crear mecanismos de seguimiento periódico a estos planes. Considerando lo anterior el Gobierno de Colombia promulgó el Decreto 4799 de 2011 que reglamentó las Leyes 294 de 1996, 575 de 2000 y la ley 1257 de 2008, en relación con la competencia de los Jueces Civiles, los Jueces de Control de Garantías y las Comisarias de Familia, en materia de competencia de los mecanismos y recursos que prevé las mencionadas leyes para garantizar el acceso a la justicia y como un instrumento para superar todas las formas de violencias contra las mujeres.

De esta manera, en el artículo 3 señala las reglas que deberán tenerse en cuenta para las órdenes de medidas de protección a mujeres víctimas de violencias. Las cuales son: (i) para garantizar la efectividad de la medida la autoridad competente enviara copia de la medida provisional o

definitiva a las personas que tengan la responsabilidad del inmueble donde habita la víctima, a la Policía Nacional y a los lugares que la víctima determine para que adopten las medidas pertinentes, igualmente se enviara copia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que impida custodias a favor del agresor; (ii) prevé la norma igualmente, la manera de concretar las medidas de protección establecidas en la Ley 1257 de 2008 en los literales *d* y *e* al señalar que en los casos en que las Comisarias o Jueces Civiles Municipales ordenen varias medidas consagradas en estos literales, se ordenará al agresor acreditar los pagos al despacho y que el incumplimiento de tal pago dará lugar a sanciones previstas en la ley. En las medidas consagradas en los literales *f* y *g* del mismo artículo corresponde a la Policía Nacional hacerlas efectivas, en ese sentido señala el Decreto que en todo caso la ejecución de la orden debe ser concertada con la víctima teniendo en cuenta los criterios de protección a la víctima, cumplimiento de la orden y la responsabilidad del Estado en materia de protección de los derechos de las mujeres. Continúa el artículo 3 indicando que en caso de suspensión del porte de armas, deberá darse aviso a la Policía Nacional; por otro lado cuando se trata de alguna medida del literal *L* del mismo artículo, quien la ordenará será el Juez de Familia o en su defecto el Juez Civil Municipal o promiscuo.

También se señala en el Decreto 4799 de 2011 que la Policía Nacional en casos donde deba acudir de manera inmediata a hacer acompañamiento a las medidas de protección tendrá que elaborar un protocolo de riesgo para analizar la mejor manera de hacer efectiva la medida. Igualmente la Policía Nacional deberá adelantar un registro nacional donde indique los casos en los que ha prestado servicio policivo para el cumplimiento de las medidas de protección. Por último, este artículo contempla 3 párrafos en los que se permite a la víctima solicitar en cualquier momento la modificación o la imposición de una nueva medida de protección provisional o definitiva, indica que

la vigencia de la medida será por el tiempo que se mantenga las circunstancias de violencia y que a estas se les deberá dar seguimiento.

Por otro lado, indica el artículo 4 que con la manifestación escrita de la víctima a no ser confrontada con el agresor y el derecho ha no a participar de diligencias civiles, administrativas y penales en las que asista el agresor, se agotará el requisito de procedibilidad y se le dará continuidad al trámite. Sin embargo, en el caso que exista la conciliación, indica el Decreto en mención en su artículo 8, que la autoridad competente podrá ordenar las medidas de protección necesarias para garantizar que lo acordado se cumpla y para evitar que los hechos de violencia se repitan.

Más adelante en el artículo 5 se contemplan 4 parámetros que deberán ser tenidos en cuenta en aquellas medidas de protección en casos de violencia diferentes al relacionado con el ambiente familiar, estos son: “un ambiente digno, integral y reparador; procurar que las personas que se encuentran a cargo de la víctima permanezcan con ella; evitar la proximidad con el agresor y velar por la seguridad de la víctima y de las personas que se encuentren a su cargo.” (Decreto 4799 de 2011)

Es menester precisar que de existir incumplimiento de las medidas de protección por parte del agresor se procederá con las sanciones correspondientes que para el caso en concreto son las multas y el arresto, tal y como lo estipula el artículo 6.

Por su parte el artículo 9 responsabiliza al Ministerio de Justicia para crear los lineamientos de competencias procedimientos y acciones en relación con la atención a mujeres víctimas de violencia

basada en género; el artículo siguiente hace una importante salvedad en términos de interpretación y es que ninguna de las anteriores disposiciones puede interpretarse de manera tal que pretenda restringir el derecho de acceder a la justicia y de tener una vida libre de violencias, finalmente concluye el Decreto derogando toda disposición normativa que sea contraria al presente.

Así las cosas, y de manera complementaria a lo que se ha comentado, es menester retomar las valoraciones de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres agrupadas en la Red Nacional de Mujeres y en la Mesa por la Ley 1257, sobre la experiencia legislativa que tuvieron al momento de concertar con el Gobierno la iniciativa de expedir el Decreto 4499 de 2011, a continuación puede leerse algunos aspectos positivos del Decreto que contribuyen a fortalecer los mecanismos legales para hacer efectivas las medidas de protección y a su vez puede leerse algunos aspectos negativos del decreto, que da cuenta de la paradoja de la norma entre lo que se avanza y lo que se retrocede en materia de acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencias

Aspectos en los que se avanzó	Aspectos negativos
<p>Se reglamentaron todas las medidas de protección contempladas en la ley 1257 de 2008, de tal suerte que las autoridades responsables de materializarlas cuentan con instrucciones precisas sobre su alcance.</p>	<p>“La regulación desarrollada en el decreto 4799 de 2011 no es exclusiva para las mujeres, a pesar de que la ley 1257 establece en su objeto la protección de las mujeres. Esto sucedió porque la reglamentación no fue elaborada para la ley 1257 sino también para normas de familia como las leyes 294 de 1996 y 575 de 2000. Esto revela la poca voluntad institucional para dar un tratamiento diferencial y especializado a la problemática de la violencia contra la mujer, entendida como una vulneración de derechos humanos” (Mesa por la Ley 1257, 2012, pág. 21)</p>
<p>Gracias a este Decreto, basta con la expresión de la decisión de la mujer para no ser confrontada con sus agresor y así dar por agotada la etapa de conciliación</p>	<p>“La norma prevé que la mujer puede solicitar el reembolso de los gastos sufragados por cuenta de los hechos de violencia, y esto permite que cuente con un mecanismo para recuperar medios económicos importantes para mantener su independencia económica pero cuando el decreto enuncia los posibles gastos incluye el tratamiento reeducativo del agresor y claramente esta no puede ser una posibilidad tanto por la dignidad de las víctimas como por las obligaciones estatales en la materia.” (Mesa por la Ley 1257, 2012, pág. 21)</p>

<p>Los ámbitos de aplicación de las medidas de protección son públicos y privados, esto es, que las medidas de protección son aplicables no solamente para casos de violencia intrafamiliar sino para cualquier escenario de violencia contra las mujeres.</p>	<p>Según la Mesa por la Ley 1257 “el decreto limitó la efectividad de las medidas de protección cuando estableció que las mismas no podrán ordenarse hasta que el agresor sea notificado”</p> <p>Las organizaciones asociadas a este Mesa, indican que la “mujer tiene la carga de aportar la dirección de notificación pero en distintos casos esto podría no ser posible y hasta tanto no se logre aportar la información sobre el domicilio de los agresores, la autoridad no podrá ordenar la medida, con lo cual, se hace ineficaz toda la regulación integral sobre las diferentes medidas de protección”</p>
<p>“Las medidas de protección estarán vigentes por el tiempo que dure la situación de riesgo y la decisión de levantarlas podrá ser recurrida por las mujeres” (Mesa por la Ley 1257, 2012)</p>	

Elaboración propia

Finalmente precisar sobre el Decreto 4977 de 2011 que la importancia de esta normativa recae especialmente en el reconocimiento de la responsabilidad del Estado Social de Derecho en la garantía y el deber de protección de los derechos de las mujeres, como quiera que la comisión por acción o por omisión en este sentido podría caracterizar un crimen de Estado; igualmente se destaca el reconocimiento del derecho a una vida libre de violencias y la no obligación de confrontación con el agresor, en la medida en que contribuyen a un acceso a la justicia con enfoque diferencial y atendiendo a las realidades sociales y psicológicas de las víctimas de violencia basada en género.

Ahora bien, en relación con el objeto de investigación, el Decreto 1829 de 2013 tiene como objetivo reglamentar el funcionamiento del Consejo Nacional de Conciliación y Acceso a la Justicia,

lo primero que hay que indicar es que este Consejo está adscrito al Ministerio de Justicia y del Derecho y que su función esencial es asesorar al gobierno en materia del acceso a la justicia y respecto del fortalecimiento de mecanismo de resolución de conflictos, en este sentido este Consejo es relevante en la medida que recomienda, sugiere y asesora al gobierno en materia del cumplimiento de las normas, del diseño, formulación e implementación de proyectos o planes para tener un adecuado acceso a la justicia; así las cosas es correcto afirmar que las políticas públicas que el Estado implemente en relación con el derecho fundamental al acceso a la justicia serán deliberadas, formuladas, diseñadas y coadyuvadas a implementar por este Consejo, de esta manera el rol de este órgano es vital para garantizar a las mujeres víctimas de violencias sus derechos. Respecto de la conformación de este Consejo se nota la ausencia de organizaciones de derechos humanos y feministas que con seguridad podrían impulsar y fortalecer este espacio, sin embargo el artículo 63 tuvo en cuenta para la conformación sólo a los Ministerios de Justicia, Educación, Trabajo, a la Procuraduría y Fiscalía General de la Nación, al Defensor del Pueblo, el Presidente del Consejo Superior de la Judicatura, el Director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, dos representantes de los Centros de Conciliación y un representante de los Centros de Conciliación de las universidades, de las Casas de Justicia y de los notarios.

Con estos decretos nacionales, las medidas de protección fueron reglamentadas en Colombia, sin embargo, algunas de las disposiciones que fueron mencionadas con anterioridad han significado el origen de una posible vulneración al derecho de las víctimas de violencia intrafamiliar a acceder a la justicia. De hecho las críticas de las organizaciones de mujeres más frecuentes al respecto son producto de las estipulaciones del decreto 652 de 2001 porque conlleva probar las agresiones que sufren las mujeres de manera indistinta. Esto es, que la carga probatoria no es la misma cuando la

agresión es física, pues podría decirse que es parcialmente sencillo acudir a un especialista que certifique el origen y la causa de las lesiones, en cambio cuando la agresión es psicológica, emocional o hasta económica los medios probatorios cambian y no suelen ser sencillo demostrarlo, porque requiere hacer seguimiento en el tiempo al paciente para demostrar el daño, y es precisamente esas consideraciones cotidianas que el decreto obvia.

Lo anterior, es de vital comprensión porque las medidas de protección tienen por objetivo ser herramienta de prevención de violencias hacia las mujeres y al tener tal carácter lo que se espera es que operen de manera rápida a fin de garantizar la integridad de la mujer; pero lo que se observa es que al recaer toda carga probatoria indistintamente de las diversas modalidades de violencia a la mujer, el proceso para acceder a la medida de protección conlleva un trámite extenso hasta que la víctima pueda recolectar pruebas. Lo que desatiende la realidad de las violencias de género porque muchas de ellas no dejan rastro, registro ni prueba, como por ejemplo el acoso.

Podría igualmente considerarse que para las mujeres que son víctimas de las violencias de género y que se encuentran en situación de pobreza podrían presentar más dificultades para acceder a servicios médicos que les ayude a certificar ante las autoridades sus secuelas bien sea físicas de cualquier otro orden.

Por otro lado y como ya se ha venido señalando, un elemento que se podría considerar como lesivo para los derechos de las mujeres es aquel que está dispuesto en el decreto 652 de 2001, artículo 8 literal f, que indica a las comisarías de familia como criterio conciliador y como criterio para fijar una medida de protección la unidad familiar. Que este concepto este en la norma como un indicador o especie de guía respecto de la viabilidad o no de una medida de protección podría entenderse como una disposición abiertamente en contra de los derechos de la mujer, porque sobrepone la protección de un espacio familiar violento y peligroso para la víctima y sus hijos, de ser el caso, a la seguridad e

integridad de la mujer. El enfoque familista, como también es conocido, funciona así porque lo importante para quienes lo acogen es la conservación de esa supuesta unidad familiar, sin considerar si alguno de sus integrantes es violentado, sufre algún peligro, o se ve en amenaza.

De manera que contemplar criterios como este mediante decreto nacional, podría afectar el derecho de las mujeres a tener una vida libre de violencias, e incumplir los pactos internacionales que Colombia firmó, así por la CEDAW en su artículo 3:

“Los Estados Partes tomarán en todas las esferas, y en particular en las esferas política, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre.” (ONU, 1979)

Y en la misma Convención el artículo 5:

“Modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres” (ONU, 1979)

Finalmente y para concluir este aparte, estos decretos anunciados que contienen las reglas a las cuales deben ceñirse las comisarías de familia y las demás autoridades encargadas de decretar las medidas de protección sí podrían contener disposiciones que probablemente signifiquen en su aplicación restricciones para el efectivo acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.

JURISPRUDENCIA

Se revisará ahora, algunas sentencias de la Corte Constitucional que han adicionado significativos aportes al derecho fundamental de acceso a la administración de justicia. En primer lugar, la Sentencia C 250 de 2011 define este derecho, también reconocido como derecho a la tutela efectiva, como aquel que reconoce a todas las personas residentes en Colombia de acudir a las instancias de investigación o juzgamiento en condiciones de igualdad, para que se les reconozca, respete o exigir sus derechos e intereses legítimos, todo ello en el marco de unas garantías sustanciales que la ley dispone.

Continúa la Sentencia C 250 de 2011 señalando que este derecho tiene un significado múltiple y complejo, en la medida que acceder a la justicia es un pilar esencial de un Estado Social de Derecho y contribuye a la realización de los fines de este, a su vez el derecho al acceso a la justicia se cataloga como un derecho fundamental de aplicación inmediata que forma parte del núcleo esencial del debido proceso y que conlleva la existencia de un ordenamiento jurídico con diversas acciones y recursos para el efectiva resolución de conflictos; igualmente conlleva activar la jurisdicción por cualquier persona que así lo requiera en atención de sus derechos e intereses; implica de igual modo la satisfacción del derecho a concluir la actividad jurisdiccional a través de una decisión de fondo en un plazo razonable; involucra también que existan los procedimientos adecuados para la definición de pretensiones y excepciones que se encuentran en litigio; y finalmente que todo ello se desarrolle en un lapso razonable, sin dilaciones injustificadas y con la observancia de que en todo momento hay respeto por las garantías procesales del debido proceso.

Ahora bien, cuando se indica que es un derecho complejo la Corte hace alusión a la forma legal, diseño y configuración del derecho en cabeza y responsabilidad del legislador, en este sentido

este “goza de un amplio margen de configuración tan sólo limitado por la razonabilidad y la proporcionalidad de las medidas adoptadas, en cuanto éstas se encuentren acordes con las garantías constitucionales de forma que permitan la realización material de los derechos sustanciales” (Corte Constitucional. 2002, Sentencia C 426.) De tal suerte que la Corte Constitucional (2002) precisara en cuatro aspectos concretos esta limitación, el primero de ellos es la atención de los fines y principios del Estado; el segundo limite es velar por los derechos al debido proceso, defensa y a la administración de justicia; tercero, obrar conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad y quinto que se permita la materialización de los derechos y el principio de primacía de la ley sustancias sobre lo formal o procesal.

Dicho esto, es menester indicar que el Congreso de la República tiene un rol definitivo en términos de concretar las formas legales, diseños y diferentes configuraciones y expresiones del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia como quiera que a través de su responsabilidad legislativa se podrá disponer de mecanismos idóneos para una acertada ruta que facilite a las mujeres víctimas de violencia una debida atención y respuesta institucional; en este sentido la Corte Constitucional en Sentencia C 250 de 2011 contribuye a comprender cuales son las limitaciones que tuvo que haber tenido en cuenta el legislador al momento de expedir las normas concernientes a garantizar el derecho al acceso a la administración de justicia, esto en clave de realizar más adelante un análisis que permita develar si la ley está o no acorde con el mentado constitucional. Finaliza la sentencia de la Corte Constitucional (2011), en señalar que un Estado que no garantice el derecho al acceso a la justicia, es un Estado que favorece la impunidad y que constituye ello en una grave violación al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Por su lado la Sentencia C 598/11 Corte Constitucional (10 de agosto de 2011) Sentencia C 598 de 2012, en la cual se aborda el derecho al acceso a la administración de justicia desde la

perspectiva del requisito de procedibilidad. En esta Sentencia se enuncia que este requisito parte del respeto por la voluntad y libre disposición de las partes por conciliar, sin que medie una suerte de obligación para conciliar o formula de arreglo por parte del Estado, ni mucho menos especular con requisitos que terminen afectado el derecho fundamental de acceder a la administración de justicia, luego por lo cual, para garantizar este derecho no basta con acceder a un tercero que promueva la resolución de una controversia, o con los acuerdos que se surjan sino que debe existir un compromiso con los plazos razonables para tener una solución de fondo que haya respetado el debido proceso y haya superado cualquier barrera social o económica. Lo anterior es clave para el objeto de investigación en la medida que se establece que en ningún caso la conciliación puede ser obligatoria o impuesta por el Estado, lo cual sucedía en los casos de violencia intrafamiliar.

Bajo esta misma premisa, la Corte Constitucional en la sentencia C 334/12 señala que el derecho de acceder a la justicia está cualificado como derecho a una justicia pronta, la cual supone para su concreción la superación de distintas y diversas barreras, como las culturales, las económicas, las geográficas o las administrativas, al igual que supone una decisión justa y oportuna, en este sentido y de acuerdo con los principios de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, (Congreso de la República.(7 de marzo de 1996) Ley Estatutaria de Administración de Justicia. [Ley 270 de 1996]. DO: 42745 la administración de justicia debe ser pronta, cumplida, eficiente y de estricto cumplimiento con los términos procesales. De manera que, y según la Corte Constitucional, una manera de tener certeza de que la justicia se ha administrado correctamente y que es en realidad un fundamento del Estado Social de Derecho, es el acatamiento de las formas y términos de la celeridad en el marco de todo litigio judicial.

Así las cosas, recae la importancia de esta Sentencia para el objeto de investigación en la medida que reconoce la existencia de unas barreras de corte social y económico que impiden el

adecuado acceso a la justicia y en este sentido hace un llamado a superarlas, lo cual es demasiado pertinente porque se reconoce las dinámicas reales de la población colombiana y en específico de las mujeres que no logran acceder a la justicia por las barreras que han identificado las organizaciones de derechos humanos y de mujeres; a su vez es de gran impacto la Sentencia porque pone como forma de cumplimiento de este derecho el principio de celeridad por el cual debe estar transversalizada la función pública.

De acuerdo con la Corte Constitucional en su Sentencia 223/16 el acceso a la justicia se destaca además por ser una expresión medular de carácter democrático y participativo del Estado. Señala la Corte que en el ámbito de este derecho se inscribe el derecho de las víctimas a ser comunicadas y tenidas en cuenta, pero la Corte va más allá al afirmar que transgredir el acceso a la justicia es también obstruir las posibilidades de la víctima a sus derechos a la verdad, justicia y reparación. La importancia de esta Sentencia puede identificarse en la medida en que se entiende que la violación a un derecho fundamental tan trascendental para las víctimas como el acceso a la justicia, puede desencadenar igualmente violaciones a otros derechos fundamentales.

Por último, es importante tener en cuenta la Sentencia C 583/16 ahonda en la importancia del derecho al debido proceso y del al acceso a la justicia desde el bloque de constitucionalidad, y desde la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este sentido recalca que ambos derechos están garantizados en la Convención Americana de Derechos Humanos y que en concordancia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana no es suficiente con la mera enunciación de los recursos judiciales en la norma, sino que en efecto, el Estado tiene la obligación de que ello tenga un efecto útil en la vida cotidiana de las personas; puntualiza también la sentencia que para el derecho constitucional colombiano los principios de celeridad, eficacia e inmediatez judicial son predicables de la función pública y en este sentido predicables a su vez de la

administración de justicia. Así las cosas, esta Sentencia recalca de donde proviene la responsabilidad en la garantía del derecho al acceso a la justicia, lo que debe significar para los funcionarios públicos y en general para todas las personas, lo cual es muy significativo para el objeto de investigación porque, como más adelante se verá, contribuye a la identificación adecuada de las dificultades de las instituciones responsables.

MARCO HISTÓRICO EN RELACIÓN AL ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS MUJERES

Visto el marco legal colombiano que refleja cómo se reglamenta el acceso a la justicia, en el caso especial de las mujeres, se abordará otro aspecto importante para la investigación, y es la evolución histórica del derecho al acceso a la justicia para las mujeres. En este sentido, este marco, denotará algunos hitos históricos globales e hitos históricos para el caso colombiano, que dará cuenta de las primeras veces en las que las mujeres pudieron acceder a la justicia y bajo qué modalidades. Lo anterior con el fin de denotar para el lector que la adquisición de derechos que hoy para las sociedades liberales son fundamentales, no siempre fueron así, y que la adquisición progresiva de derechos para las mujeres se ha logrado en un marco de luchas cívicas y jurídicas.

Se advierte preliminarmente: son escasos. Sin embargo se resalta una de las principales formas para acceder al derecho deviene del divorcio. Las mujeres estuvieron históricamente en condiciones que se entendían normales por el derecho natural; sus padres, esposos e hijos definían sus futuros y su realidad, no tenían derecho a la educación tampoco acceso a la tierra o a la administración de sus bienes heredados o en general de cualquier recurso, se le cohibía de la participación política y pública y a los escenarios de cultura y del saber en general, propios de las primeras polis.

En el plano global, la constitución de Francia, en el año de 1789 que estableció que la ley no consideraba el matrimonio más que como un contrato civil, lo que implicó una suerte de igualdad en términos de los contratantes; sin embargo, un decreto del mismo año abolió la desigualdad de sexos o edad entre herederos, fue un paso en materia de derecho civiles que le fue permitiendo a la mujer adquirir un rol diferente en la sociedad.

Luego fueron los decretos 20 y 25 de septiembre de 1792 en los cuales se ordenó “la simetría republicana” entre esposos y se permitió el divorcio para el que solo bastaba la demanda de uno de los esposos. En aquella norma de 1792 aparecía por tanto por primera vez, el reconocimiento de la individualidad civil de las mujeres (Pérez Garzón, 2011, pág. 40)

Por otro lado, en Colombia también se han dado sucesos históricos que han contribuido al reconocimiento de los derechos de las mujeres. Un hito histórico para el país fue darse una nueva constitución que lo modernizaría y le otorgaría una de las constituciones más proteccionista en materia de derechos humanos y libertades.

La Constitución Colombiana surgió en el contexto del conflicto armado del país y de unos hechos muy concretos que marcaron la historia política de la época (1985-1990) entre ellos la toma y remota del Palacio de Justicia (1985), el Genocidio por razones políticas contra la Unión Patriótica a manos de “grupos paramilitares, secundados por miembros de las fuerzas del orden y por políticos de todos los niveles” (Pécaut, 2015, pp.657) las múltiples masacres en todo el país, más de 242 entre 1985 y 1990 (Verdad Abierta, 2014) los asesinatos selectivos y sistemáticos contra líderes políticos y personalidades del país, por mencionar algunos se encuentran: Rodrigo Lara Bonilla el 30 de abril de 1984, Héctor Abad Gómez asesinado el 25 de agosto de 1987, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa candidatos presidenciales por la Unión Patriótica asesinados el 11 de octubre de 1987 y el 2 de

marzo de 1990 respectivamente, la muerte del líder del grupo guerrillero M19 Carlos Pizarro el 26 de abril de 1990, luego de haber cumplido al gobierno nacional con la dejación de las armas; y sumado a esto una crisis institucional grave que reprodujo las injusticias sociales en todo el país.

Bajo este contexto, la solución devino de “un grupo de estudiantes que acordaron, en medio de sus diferencias, movilizarse por una reforma institucional que facilitara la salida a la crisis. Esta propuesta pronto creció y se extendió a otras ciudades, universidades y colegios con el llamado a la séptima papeleta” (Ripoll, 2014) que consistía en depositar una séptima papeleta en las urnas de las elecciones de marzo de 1990 a favor de una Asamblea Nacional Constituyente. La alternativa tuvo acogida y en 5 meses (culminó el 4 de julio de 1991) se escribió una nueva Constitución para Colombia, de sus 380 artículos se destaca para el objeto de investigación, es decir el acceso a la justicia para las mujeres, el preámbulo de la Constitución y sus artículos 1, 2, 5, 13, 16, 42, 43, 228 y 229, como quiera que contribuyeron de manera significativa al reconocimiento en condición de igualdad de **derechos**, libertades y garantías para el ejercicio de los derechos para la mujer. Veamos:

Con el cambio de un Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho, la Constitución Política de 1991 (En adelante la Constitución), adoptó por la eliminación de discriminaciones jurídicas y de hecho contra las mujeres; pasó igualmente de ser una democracia representativa a participativa, lo que significó que la mujer dejaría atrás un rol relegado de la sociedad para ser ahora sujeto de titular de derechos y deberes; así mismo al consagrar la Constitución que se funda en el respeto de la dignidad humana reconoció a la mujer la titularidad de sus derechos en términos de igualdad de condiciones con el hombre, (Const., 1991, art.1) además de ello la Constitución buscó eliminar toda forma de discriminación por razones de sexo(Const., 1991, art.13), lo que genera que el Estado implemente esfuerzos para superar los vicios machistas de las instituciones y de la sociedad en general; fue más adelante la Constitución al dar la categoría de primacía a los derechos

inalienables de la persona (Const., 1991, art.5), y al amparar a la familia como núcleo básico de la sociedad, (Const., 1991, art.42) lo que generó como una nueva política de Estado la erradicación de las desigualdades y violencias que se reproducen en el ambiente familiar; hay que llamar la atención también respecto de aquellos mandatos que orientaron la igualdad de derechos entre hombres y mujeres (Const., 1991, art.43) y que guarda relación con el mandato de permitir a todas las personas el acceso a la justicia (Const., 1991, arts. 228, 229) porque reconocen la autonomía de la mujer como persona dueña de sus actos y capaz de decidir sobre su futuro, sin necesidad de que por ella intermedien sus hijos, padre, conyugue o compañero, es a esto lo que la Constitución también denominó libre desarrollo de la personalidad (Const., 1991, art.16) así mismo se debe entender que se adoptó como política de Estado garantizar la efectividad de los derechos anteriormente mencionados (Const., 1991, art.2) precisamente para materializar lo que la misma Constitución denominó un orden social justo que asegure a sus integrantes, entre otros, la justicia (Const., 1991, preámbulo). De esta manera, decir que la Constitución Política de Colombia forjó un hito histórico con los anteriores artículos, en materia de reconocimiento del rol y de los derechos de la mujer que en su conjunto contribuyen a la superación de las barreras para acceder de manera adecuada a la justicia.

Por otro lado, la expedición de la Ley 1257 de 2008, marco un antes y después en la historia reciente del país, como quiera que esta Ley transformó de positiva, pero no suficiente, el tratamiento institucional hacia las mujeres víctimas de violencias, es una Ley que vista desde la perspectiva histórica blindó a las mujeres de una completa herramienta para contribuir a la superación de todas las formas de violencias en contra de ellas.

De esta manera, la expedición de esta Ley es un hito transformador para las mujeres víctimas de violencias, toda vez que otorga una herramienta jurídica capaz de brindar una adecuada e integral respuesta institucional para la protección y reivindicación de los derechos de las mujeres. Así por

ejemplo la Ley generó cambios estructurales para facilitar el acceso a la administración de justicia a las mujeres, entre estos se destaca: a) la posibilidad de que cualquier persona pueda denunciar la violencia contra la mujer; b) expresa de manera categórica la posibilidad de que la Fiscalía General de la Nación investigue de oficio un hecho de violencia contra la mujer; c) en cuanto a la etapa de conciliación la Ley estableció la discrecionalidad de la víctima para conciliar o no, esto responde también al reconocimiento que la Ley otorga a las mujeres víctimas de violencias, de ser obligadas a confrontación con su agresor; d) en el marco de las dificultades que las mujeres han tenido para acceder a la administración de justicia se enunció la poca sensibilización y conocimiento que los funcionarios puedan tener alrededor de estos temas, al respecto la Ley reconoce que los derechos de las mujeres son derechos humanos y que existen múltiples formas de violentar a una mujer, esto es, de manera física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, lo que implica que el Estado Colombiano asume la responsabilidad a todo nivel de proteger, garantizar y evitar que este tipo de violencias sigan perpetuándose, además de garantizar que sus funcionarios conozcan la Ley, faciliten su aplicación y actúen en el marco de una atención integral para la protección de ese conjunto de derechos humanos para las mujeres; e) igualmente la norma generó en términos de acceso a la justicia, que la mujer víctima siempre se le pueda garantizar el asesoramiento jurídico gratuito, la orientación y asistencia legal inmediata y especializada, además de contar con la información pertinente acerca de sus derechos; f) igualmente la Ley abarca toda una serie de medidas de protección, atención y prevención para las mujeres víctimas de violencias que aplicadas de manera oportuna garantizan que la mujer pueda ejercer de manera plena su derecho al acceso a la administración de justicia.

Habría que tener en cuenta como un hito histórico, de igual manera, la Sentencia T 434 de 2014 en la cual la Corte Constitucional analiza el alcance de obligatoriedad que tiene la Fiscalía

General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, Las Comisarias de Familia y a las EPS en relación con la violencia intrafamiliar contra los sujetos de especial protección constitucional, como las mujeres y los menores de edad. Esta sentencia es una de las primeras que emite la Corte Constitucional en relación con los derechos de la mujer y específicamente sobre el deber de apoyo efectivo y diligente que deben tener estas autoridades en caso de violencia, se enmarca en un contexto permanente de agresiones contra la mujer y la necesidad de la Corte de llamar la atención sobre estas graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres.

En esta misma sentencia expresa la Corte Constitucional que la Constitución Política recoge los avances históricos en los que se prevé el principio de igualdad entre mujeres y hombres, reconociendo así que las mujeres son un sujeto de especial protección y que sus derechos deben ser garantizados por el Estado, así como las obligaciones de cuidado y atención procurando erradicar cualquier tipo de discriminación pero también debe velar por el desarrollo pleno en sociedad de las mujeres, recuerda igualmente la Corte que es obligación del Estado colombiano tomar las medidas de atención y apoyo a las mujeres que han sido víctimas de violencia.

Más adelante la Corte Constitucional en la Sentencia T434 de 2011, señala respecto de la Fiscalía General de la Nación que como órgano del Estado debe actuar en concordancia con la ley y la Constitución y en ese sentido obrar con la máxima diligencia posible en los casos el delito de violencia intrafamiliar, entre otros, que ponga en peligro a la mujer; para la Corte Constitucional (2011) la Fiscalía debe actuar de conformidad con el “*principio de protección especial a la mujer víctima de la violencia*”, debe cumplir con su deber específico de amparo, en perjuicio de menoscabar el derecho al acceso a la administración de justicia a las mujeres. Igualmente la Corte hace un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que adopte los correctivos que sean

necesarios para brindar las respuestas oportunas, eficientes y diligentes respecto de los hechos de violencia intrafamiliar contras mujeres.

Se pronunció la Corte Constitucional (2011), de igual manera, con las obligaciones que le asisten a las Comisarias de Familia, en este sentido señaló la Corte que estas deben prevenir, restablecer y reparar los derechos de la mujer que ha sido víctima de violencias, destaca que las Comisarias deben sin dilaciones las medidas de protección que sea necesarias para salvaguardar la integralidad de la mujer como sujeto de especial protección.

Por ultimo resaltó el rol que deben asumir las Empresas Promotoras de Salud (EPS) en la recuperación de los derechos de las mujeres víctimas de violencias, en ese sentido recordó la Corte que estas deben suministrar a las mujeres y a sus hijos las garantías de habitación, alimentación y transporte y en caso de no poder ofrecer este servicio, deberá reconocer un subsidio monetario cuyo objetivo es permitirle sufragar con estos gastos.

Esta Sentencia es de mucha relevancia porque es la primera vez que se le otorga la categoría de *principio* dentro de nuestro ordenamiento jurídico a la protección especial a las mujeres, a su vez es la primera sentencia que resalta, teniendo en cuenta las obligaciones nacionales e internacionales del Estado, las obligaciones de las instituciones respecto de la protección de la dignidad humana de la mujer.

Otro hito histórico para las mujeres en relación con el reconocimiento de sus derechos, ha sido la expedición de la Ley Rosa Elvira Cely. Esta disposición normativa es relevante en dos aspectos, el primero tiene que ver el caso simbólico de Rosa Elvira Cely, su caso es tan impactante que en su

memoria se le dio su nombre a esta Ley; y en segundo lugar es relevante en la medida en que Colombia reconoce a través de su normatividad un ciclo de violencias contra la mujer que desafortunadamente desemboca en su pico más alto: el feminicidio.

El feminicidio es el asesinato de una mujer por razón de ser mujer, se expresa como el punto final de un ciclo de violencias y de discriminación previa que sufre una mujer. Según el Protocolo Latinoamericano para la Investigación de las Muertes Violentas de Mujeres por Razones de Género, estos crímenes se generan en contextos en los cuales las mujeres son el foco de actos de desprecio, subordinación, misoginia, control y marginalidad, aspectos propios de la cultura patriarcal. (Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. , 2017) Entender este concepto es especialmente importante porque permite entender el significado histórico que conlleva penalizarlo en Colombia.

La tipificación de esta conducta era un debate permanentemente abierto en Colombia, hasta que ocurrió la barbarie un 24 de mayo de 2012. Rosa fue violada, torturada y empalada, por un hombre llamado Javier Velasco Valenzuela, su compañero de clases, quien tenía como prontuario una condena por homicidio y a quien le cursan dos investigaciones más, una de estas por acceso carnal violento a una menor de edad; este hombre llevo a Rosa hasta cercanías del río Arzobispo en el Parque Nacional de Bogotá, allí la dejó creyéndola muerta, luego de haberla violado, la sometió a tortura, la empalo hasta destruirle su útero y sus intestinos, la golpeó con brutalidad y le propinó varias puñaladas en la espalda las cuales acabaron con su existencia.

La Revista Semana, describió este aterrador caso así: “A Rosa la encontraron en cercanías del río Arzobispo, tendida sobre un charco de sangre, con las extremidades inferiores desnudas y

laceraciones en los brazos y en torno al cuello que sugerían un intento de estrangulamiento. En la cabeza tenía un golpe fuerte. Pero además padecía graves heridas en las zonas íntimas, donde sangraba... Rosa Elvira sufrió un paro cardíaco, perdió la conciencia y al ser intervenida en el quirófano le encontraron la pelvis y el útero rotos como consecuencia de un palo que le habían introducido por el ano. Dentro del cuerpo se hallaron rastros de yerba y astillas. Fueron cinco días de lucha en cuidados intensivos.” (Revista Semana, 6 de febrero de 2012. La muerte de Rosa Elvira Cely, un crimen abominable)

Estos hechos fueron rechazados por las organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres, el movimiento estudiantil y en general por toda la ciudadanía, quienes se movilizaron activamente para repudiar las violencias que a diario sufren las colombianas y para exigir a las autoridades justicia en el caso de Rosa Elvira Cely y en los demás casos que aún siguen impunes. La indignación fue creciendo en la medida que se conocían más detalles de la forma violenta en la que asesinaron a Rosa, su caso conmovió a todo el país y se exigía por parte del movimiento feminista en Colombia la ley de feminicidio, la cual fue aprobada por mayorías absolutas en el Congreso de la República 3 años después, el 6 de junio de 2015.

Con la promulgación de la 1761 de 2015, se quiso visibilizar la violencia de género, como un problema estructural en nuestra sociedad, anima a las mujeres a denunciar cualquier tipo de violencia y es la primera vez en Colombia que se adoptan medidas legales para sancionar el feminicidio como un delito autónomo, en este sentido la Ley tiene varios aspectos trascendentales, en clave de acceso a la justicia, dispone específicamente la diligencia debida en todas las actuaciones en relación con las investigaciones y el juzgamiento del delito.

Igualmente la promulgación de esta Ley generó como disposición normativa la investigación de oficio en los casos en los que hay claridad o sospecha de conducta feminicida, además de ordenar la asesoría y orientación gratuita inmediata, especializada e inmediata a mujeres víctimas de violencia de género a través de la Defensoría del Pueblo, con una perspectiva de género y de los Derechos Humanos de las Mujeres, a su vez se dispuso la creación de un Sistema Nacional de Estadísticas de Violencias Basadas en Género, para la definición de políticas públicas de prevención, protección, atención y reparación a mujeres víctimas de violencias. Estas disposiciones son un avance significativo para las mujeres en el marco de su derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, la Ley no solo ordena eliminar las barreras culturales que impiden investigar estas violencias, sino que ordena aspectos concretos para que la administración de justicia sea más eficaz en estos casos.

En estos términos, lo visto hasta el momento devela que para el caso colombiano, el derecho de acceder a la justicia hace parte del catálogo de derechos considerados fundamentales y que el marco normativo para acceder a la justicia específicamente en las comisarías de familia a mujeres agredidas al interior del núcleo familiar, es robusto.

Pese a ello, la impresión que dejan los informes de las organizaciones de mujeres, mencionados al principio del capítulo, es que ese marco normativo protector de los derechos de las mujeres no se aplica, o por lo menos no se aplica de manera eficaz.

CUESTIONES SOBRE EL ACCESO A LA JUSTICIA Y EL GÉNERO

Ha sido una constante a lo largo de este primer capítulo mencionar que posiblemente exista una vulneración al derecho de las mujeres de acceder a la administración de justicia en las comisarías de familia cuando estas intentan ser cobijadas por una medida de protección, y se ha dicho también a lo largo del capítulo que hay violencia intrafamiliar basada en razón del género; pero ¿qué se entiende por acceso a la justicia? ¿Cuáles son las principales barreras según estudios científicos para acceder a ella desde la óptica de las mujeres? ¿Por qué no se accede? Y finalmente ¿qué es género? ¿Cuál es la diferencia entre género y sexos? Y ¿qué se entiende por perspectiva de género? Estas preguntas son de especial importancia para la investigación porque de acuerdo al planteamiento de una posible vulneración de derechos a las mujeres debe existir claridad sobre estos conceptos si se pretende dar una posible solución.

Abordar la definición de acceso a la justicia pasa por mencionar a la autora feminista Isolda Heredia de Salvatierra (2009) quien en su escrito *¿Es la violencia de género y el acceso a la justicia un asunto de derechos humanos?*, define el acceso a la administración de justicia para las mujeres víctimas de violencia sexual y en general para las mujeres víctimas de violencia de género, como un derecho que está consagrado en diversos instrumentos internacionales, entre los cuales rescata “La Declaración Universal de Derechos Humanos” (1948), la “Convención Americana Sobre Derechos Humanos” (1969), la “Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer” (1979) y la “Convención Interamericana para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia contra la Mujer- Belem Do Pará” (1994).

Por el contrario Nina Ferrer Araujo, (2010) define el acceso a la administración de justicia como un elemento esencial para la ciudadanía femenina, ello lo explica a través de la teoría adelantada por Marshall en la cual se define la ciudadanía como el estatus máximo de toda persona en una comunidad política, igualmente destaca la autora que Marshall fue uno de los primeros en definir el derecho a la justicia como un derecho civil y de carácter especial, como quiera que le permite al ciudadano acceder y defender los demás derechos.

En este sentido Ferrer describe la ciudadanía femenina como tardía desde las antiguas polis por no tener las mujeres la calidad o estatus de ciudadanas, igualmente en la modernidad las mujeres están fuera del contrato social por existir un contrato sexual concomitante que subordina a las mujeres. Así las cosas, asegura Ferrer que la ciudadanía femenina no es plena y que su derecho a acceder a la administración de justicia es una etiqueta que se les otorga como ciudadanas formalmente reconocidas pero materialmente desconocidas, limitadas para la exigencia de sus derechos (Ferrer, 2010).

En lo que sí coinciden ambas autoras es en diagnosticar los múltiples obstáculos que enfrentan las mujeres para poder acceder a la justicia. Para Heredia y Ferrer las principales problemáticas para acceder al derecho radican en el costo del proceso de administración de justicia, la falta de instalaciones para la asistencia jurídica de la mujer, o lo que Nina Ferrer (2010) denomina *las ubicaciones geográficas distantes*, la falta de credibilidad de la mujer en la administración de justicia, que en el caso de Ferrer la denominación es ausencia de confianza es la institucionalidad. Adicionalmente a esto Nina Ferrer (2010), destaca que la victimización secundaria y la falta de garantías judiciales, de seguridad y privacidad a lo largo del proceso son barreras importantes que impide un goce efectivo de la ciudadanía femenina.

Todo lo contrario propone María Alejandra Cruz Loaiza, en su escrito Acceso a la Justicia de las Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado Colombiano (Cruz Loaiza, 2017) quien enfatiza que la principal causa por la cual las mujeres no pueden acceder a la justicia, no se debe la discriminación sino a la desinformación que les impide acercarse a las fiscalías, jueces y tribunales; (Cruz, 2017) sin embargo, si coincide con las dos anteriores autoras en el sentido de indicar que existe una profunda desconfianza hacia las autoridades, pero indica un elemento importante que Ferrer ni Heredia mencionaron, y es la condición socio económica de las víctimas, esto es, para Cruz la condición de pobreza si es un factor determinante por el cual las mujeres víctimas no puedan acceder a la justicia.

En este diagnóstico respecto de las barreras de las mujeres víctimas de algún tipo de violencia, el aporte que realiza el profesor de la Universidad Nacional José German Burgos Silva en su artículo científico *La Administración de Justicia en la Constitución de 1991: elementos para un balance*, es clave para entender por qué existe esa desconfianza si se quiere generalizada por parte de las y los ciudadanos. El profesor asegura que el modelo que adoptó la Constitución de 1991 contiene 4 objetivos esenciales: el primero, es hacer de la justicia un derecho más eficaz; segundo, crear las condiciones necesarias para hacer un poder judicial mucho más independiente; tercero, buscó igualmente que el poder judicial pudiera tener mayores controles respecto de otros poderes públicos; y finalmente cuarto, se intentó dar un sistema de justicia más accesible para la población. (Burgos, 2013).

Ahora bien, enuncia el autor que respecto del actual diseño de la Corte Constitucional ha morigerado el sentido fuertemente presidencialista del régimen político y ha permitido un impacto la

calidad de la democracia constitucional (Burgos, 2013, pág. 23). Por otro lado explica que existe cierta impunidad penal por parte de la Fiscalía General de la Nación la cual para ser superada es necesario reformar el mecanismo de selección del Fiscal General, continua Burgos señalando que la labor de entidades como el Consejo Superior de la Judicatura ha sido más bien pobre en relación con la descongestión de los despachos judiciales, lo cual puede deberse a la morosidad, lentitud, y eventual corrupción a las que se asocia esta institución, concluye el autor con indicar que la independencia judicial sigue estando afectada por restricciones presupuestales (Burgos, 2013, pág. 31). Es quizás estos argumentos y explicaciones del profesor Burgos, lo que facilita entender por qué siguen existiendo las barreras o dificultades de acceso para las mujeres de las que hablaban las autoras, Ferrer, Heredia & Cruz.

Lina María Camacho Pinzón (Pinzón, 2013) quien es otra autora que ha logrado caracterizar el acceso a la justicia desde sus problemáticas institucionales, resaltando que las principales barreras son la descoordinación institucional y deficiencias en la formación de los funcionarios encargados de la administración de justicia, pero también coincide con Ferrer y Heredia cuando asegura que la lejanía física y simbólica de las autoridades admiradoras de justicia impide la eficacia del derecho. Por otro lado, Diana Guzmán Rodríguez en su estudio investigativo que lleva por nombre *Justicia transicional y de género: un acercamiento desde las mujeres* (Guzmán Rodríguez, 2011), indica que “la violencia en contra de la mujer inhibe a las víctimas a denunciar y participar en los procesos, pero también debilita las posibilidades de desarrollar mejores alternativas para garantizar el derecho a la administración de Justicia” (Guzmán, 2011).

Estas dos mujeres tienen un punto diferenciador y es la manera como se aborda el tema; Guzmán lo hace con una perspectiva de género, mientras que Lina Camacho lo hace desde una

perspectiva de gestión e institucional, lo que implica positivamente que sus miradas críticas brinden una lectura sistemática y global del problema de acceder en Colombia a la justicia para las mujeres.

A la hora de abordar por qué las mujeres no acceden a determinadas herramientas jurídicas para la satisfacción de sus derechos, no basta con analizar las dificultades internas de las instituciones, como la falta de conocimiento de los y las funcionarias de protocolos de atención o de la misma norma, sino que hay aspectos externos de las instituciones y de la sociedad misma que dificultan que las mujeres puedan acceder a esas herramientas jurídicas; para el caso concreto acceder a la administración de justicia en las comisarías de familia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar sería ser cobijadas por medidas de protección contempladas en la Ley 1257 de 2008. En este sentido y tal como se ha venido revelando por las autoras, realidades como la lejanía en ubicación de las comisarías de familia, el sentimiento de culpa que puede despertar una mujer si desea denunciar a su agresor, que sería una patrón que dificulta acceder a la justicia por construcción social más que por culpa de las mismas instituciones, o la creencia de que con su caso no sucederá nada, por la poca confianza y credibilidad que pueden tener las instituciones de justicia en Colombia podrían ser algunas consideraciones para comprender la complejidad que tienen las mujeres para acceder a la justicia.

Al respecto, las autoras que se han estudiado, condensan una cadena de 4 propuestas para superar estas barreras al acceso a la justicia. Estas son:

- (i) primera, “fortalecer los mecanismos de formación de los jueces, fiscales, policías y demás funcionarios para evitar que incurran en actos violatorios de los Derechos Humanos” (Salvatierra, 2012, pág. 87)

- (ii) “que se apliquen los postulados de la Corte Penal Internacional en el sentido de simplificar los requisitos procesales en cuanto a las evidencias de violencia sexual en el conflicto armado y que la carga de la prueba, con base en modificaciones del Código Penal, ya no recaiga en la mujer agredida sino en la fiscalía como ente acusador” (Cruz, 2017, pág. 25)
- (iii) “una política pública de acceso a la justicia consiste en crear una disposición, en funcionarios y usuarios, que suponga compromiso real y acciones efectivas dirigidas a lograr los objetivos de cobertura que se plantea” (Camacho, 2013, pág. 62)

¿QUÉ ES GÉNERO? ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE GÉNERO Y SEXOS? Y ¿QUÉ SE ENTIENDE POR PERSPECTIVA DE GÉNERO?

Abordando ahora el marco teórico, se tiene que el concepto de género y su distinción respecto del concepto de “sexo” se debe a las investigaciones que adelantó el siquiatra Robert Stoller, quien razonó que la identidad sexual, no necesariamente es el resultado del sexo con el que biológicamente se nace. El término “género” por parte de la teoría feminista deviene precisamente del libro escrito por Stoller: “*Sex and Gender*” en el cual este siquiatra determinó que “el género se refiere a las grandes áreas de la conducta humana sentimientos, pensamientos y fantasías que se relacionan con los sexos pero que no tienen una base biológica” (Stoller, 1968, pág. 7)

Stoller encontró que existían casos en los que muchos bebés genéticamente femeninas pero con genitales masculinizados y así los padres decidían si los relacionaban como niños o niñas, en este sentido, este fenómeno llevó a pensar a “científicos/as que lo determinante en la identidad sexual no es el sexo biológico, sino el hecho de ser socializado desde el nacimiento o antes como perteneciente a uno u otro sexo” (Facio & Fries, 1999, pág. 15)

El concepto de *género* lo definieron también las feministas: Barrie Thorne, Cheris Kramarae & Nancy Henley, para ellas el género toma forma y se da a partir de las relaciones sociales concretas e históricamente cambiantes, el género no es un asunto natural ni unitario. (Thorne, Kramarae, & Henley, 1983). Pero también la reconocida Gerda Lerner, conceptualizó el género como “la definición cultural del comportamiento asignado para cada uno de los sexos en una sociedad determinada. El género es el conjunto de roles culturales. Es un disfraz, una máscara, con la que hombres y mujeres bailan su desigual danza” (Lerner, 1986).

Ahora bien, es importante hacer la distinción entre *género* y *sexo*. Sexo es entendido como lo determinado biológicamente mientras que el género es la construcción social y cultural que bien puede identificar a hombres y mujeres. Igualmente es incorrecto asumir que el concepto de género debe relacionarse con un sector, grupo vulnerable o con un grupo de personas, porque como ya se ha explicado, el género hace alusión a la construcción social de lo femenino y de lo masculino (Facio & Fries, 1999, págs. 21 - 23)

Finalmente mencionar que desde que Ann Oakley, quien introdujo el concepto de *género* por primera vez en las ciencias sociales, las feministas lo acogieron como herramienta para explicar que la subordinación de la mujer es una cuestión construida socialmente y no una subordinación que éste justificada biológicamente.

Teniendo claridad, sobre el concepto de género y las diferencias con el concepto de sexo, podemos adentrarnos en el concepto enfoque o *perspectiva de género*, en el texto Derecho y Género la costarricense Alda Facio y la suiza Lorena Fries se definen la perspectiva de género como aquella que visibiliza los distintos efectos de la construcción social de los géneros (Facio & Fries, 1999, pág. 20)

La perspectiva de género pone el descubierto que las explicaciones de la realidad, se construyen desde lo masculino y el hombre para el detrimento de las mujeres y de los valores asociados a lo femenino.

El conocimiento de la humanidad y todo en cuanto concierne se ha construido y valorado desde una sola mirada y una sola experiencia: la masculina. Las interpretaciones de la realidad más intelectuales de la humanidad se han escrito sin tener en cuenta las relaciones de poder entre los géneros, en este sentido la explicación de cualquier fenómeno es parcial o incompleto, explican las autoras.

Pero la perspectiva de género, según Alda Facio y Lorena Fries (1999), no pretende entonces, la construcción de una mirada única femenina, es decir, la perspectiva de género no es la contra parte de una mirada androcéntrica³³, sino la construcción de una mirada y una forma de entender la realidad que ponga en el centro de sus análisis las relaciones de poder, de esta manera la perspectiva de género parte de la existencia de una subordinación y dominación hacia las mujeres.

Por otro lado, la mexicana Teresa Incháustegui, quien ha dedicado buena parte su vida al desarrollo del estudio de la institucionalización del enfoque de género en las políticas públicas, toma el concepto de *perspectiva de género* desde el enfoque de la política pública, que ha sido definido como “tomar en cuenta las diferencias entre los sexos en la generación del desarrollo y analizar en cada sociedad, las causas y los mecanismos institucionales y culturales que estructuran la desigualdad entre los sexos, así como elaborar políticas con estrategias para corregir los desequilibrios existentes” (OCDE, 1998).

³³ “Una cultura androcéntrica es aquella en la que el hombre, sus intereses son el centro del universo” (Facio & Fries, 1999, pág. 19)

Finalmente, un concepto más sistemático brinda la Argentina Susana Gamba, en su texto *¿Qué es la perspectiva de género y los estudios de género?* Explica que:

La perspectiva de género opta por una concepción epistemológica que se aproxima a la realidad desde las miradas de los géneros y sus relaciones de poder. Sostiene que la cuestión de los géneros no es un tema a agregar como si se tratara de un capítulo más en la historia de la cultura, sino que las relaciones de desigualdad entre los géneros tienen sus efectos de producción y reproducción de la discriminación, adquiriendo expresiones concretas en todos los ámbitos de la cultura: el trabajo, la familia, la política, las organizaciones, el arte, las empresas, la salud, la ciencia, la sexualidad, la historia. La mirada de género no está supeditada a que la adopten las mujeres ni está dirigida exclusivamente a ellas. Tratándose de una cuestión de concepción del mundo y de la vida, lo único definitorio es la comprensión de la problemática que abarca y su compromiso vital (Gamba, 2008, pág. 4).

Igualmente explica la autora que la perspectiva de género implica:

- (i) “reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorables a los varones como grupo social y discriminatorias para las mujeres;
 - (ii) que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son constitutivas de las personas;
 - (iii) (iii) que las mismas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras relaciones sociales, como las de clase, etnia, edad, preferencia sexual y religión”
- (Gamba, 2008, pág. 3).

POSIBLES SOLUCIONES AL PROBLEMA DE NO ACCEDER A LA JUSTICIA

Ahora bien, la intensión primordial es poder articular los conceptos anteriores con una posible solución al problema de investigación, es decir el acceso a la administración de justicia para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en esta lógica la relación estrecha que existe entre la perspectiva de género y el derecho de acceder a la justicia es de suma importancia, porque esta perspectiva permite a la rama judicial, y en concreto a los y las funcionarias de las comisarías de familia entender las dinámicas de dominación a las que se ven sujetas las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, el enfoque las y los sensibiliza de una realidad histórica que es silenciosa y casi invisible para el global de los operadores judiciales y que tiene que ver con el rol ausente de la mujer en la construcción de Estado y nación. Cuando las personas que están a cargo y tiene el contacto con mujeres que han sufrido algún tipo de violencia es su contextos familiares y tienen el deber de evaluar si aplican o no las medidas de protección que la Ley creó para ellas, lo harán con más determinación porque son conscientes que la violencia de género no es un asunto privado, sino de interés para toda la sociedad, en la medida que la violencia que sufren en sus hogares responde a una estructura machista bien definida y elaborada socialmente; entenderán además, los operadores judiciales que proteger a esas mujeres, es protegerse a sí mismos, porque así se los explica la perspectiva de género, y porque ser conscientes de esa realidad los invitará a ser solidarios/as.

Igualmente, la perspectiva de género contribuirá a superar la discriminación no solo para las mujeres víctimas que llegan a la comisaria en espera de ayuda, sino a las propias mujeres de la dependencia, porque una vez se aplica la perspectiva de género a las y los funcionarios, conscientes de sus posibilidades insistirán en políticas de paridad.

Así mismo la *perspectiva de género*, contribuirá a la superación de los obstáculos internos y externos que hoy por hoy tienen las comisarías de familia porque les dará las herramientas que necesitan para aplicar una serie de medidas que les permitirá superar las dificultades, esto es, la perspectiva de género como solución, para que se pueda aplicar, necesariamente exige de una serie de medidas en conjunto. Son esas medidas en sí mismas las que permitirán tener una aplicabilidad del enfoque de género en las comisarías de familia de manera integral.

Ahora bien las autoras que nos permiten explicar lo anterior de mejor manera son Paola Bergallo y Aluminé Moreno, ellas en su texto “*Hacia Políticas Judiciales de Género*” abordan la experiencia de la Argentina en la implementación del enfoque de género en la rama o en el poder judicial. El estudio devela la creación de 23 instituciones en la ciudad de Buenos Aires las cuales se crearon con diversos objetivos, prioridades y con diversos enfoques de trabajo y grupo poblacional, pero todas con el objetivo en común de echar a andar las políticas públicas necesarias para materializar el enfoque de género en el poder judicial. La evolución temporal del proceso de fundación de estas veintitrés instituciones, se inició de forma concomitante con la llegada de las primeras mujeres a la justicia federal a nivel de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, [en adelante CSJN] en 2004. A partir de allí, se puso en marcha la Oficina de Violencia Doméstica (OVD), cuya decisión de creación había sido tomada por los ministros en 2004. Esta oficina es liderada desde entonces por un equipo a cargo de la Dra. Elena Highton de Nolasco, primera mujer en integrarse a la Corte designada por un gobierno democrático en la historia del país, y comenzó a brindar servicios en 2008. En la misma línea y resaltando la importancia de los liderazgos de mujeres, cabe mencionar la fundación en 2009 de la Oficina de la Mujer (OM), creada por la Dra. Carmen Argibay, la primera feminista en la historia del país en integrar la CSJN. (Bergallo, Paola; Moreno, Aluminé;, 2017, págs. 105,106).

Bergallo y Moreno, en esta obra, describen que es gracias a oficinas como las mencionadas (que dependen de la CSJN³⁴) que el enfoque de género se pudo aplicar en su país. Y se aplica a través de una serie de medidas entrelazadas entre sí que a la final garantizan que el enfoque de género se aplique no solo para los justiciables (como llama ellas a las/os ciudadanos) sino también para los operadores (manera en como ellas se refieren a los funcionarios).

Estas medidas Bergallo & Moreno (2017) las dividen en dos: (i) para audiencia interna, que no es más que las medidas que se deben tener en cuenta al interior de la institución, en este caso en las comisarías de familia; y (ii) para la audiencia externa, que hace referencia a las medidas que se tendrán que tener en cuenta para las ciudadanas que deseen acceder a las medidas de protección. De esta manera, se podrá garantizar una perspectiva de género en las instituciones y en concreto en las comisarías de familia. Veamos:

Sobre las medidas para la *Audiencia Interna*:

Es menester precisar, y antes de enunciar las medidas, que las autoras señalan que [las comisarías de familia] deberían tener en consideración el reconocimiento del trato diferencial que el sistema de administración de justicia otorga a mujeres y a hombres, y la importancia del reconocimiento de las necesidades y demandas jurídicas específicas de las mujeres en todas las acciones que se ejecutan. De tal modo que los resultados garanticen “el respeto a sus derechos, las oportunidades reales para su pleno desarrollo humano y la voluntad institucional de lograr un verdadero acceso a la justicia” (Bergallo, Paola; Moreno, Aluminé, 2017, pág. 51)

Se distinguen 4 tipos de actividades (medidas) principales: las de investigación; capacitación y formación en género y Derecho; confección de protocolos; participación en litigios estratégicos: (i)

³⁴ “Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina”

mecanismos de selección y evaluación de los/as funcionarios/as; (ii) fomentar a través de acciones afirmativas la participación de mujeres en lugares de toma de decisiones; (iii) educación y formación de recursos humanos; (iv) modificaciones a la infraestructura para las funcionarias, las autoras ponen como ejemplo, los salones que se crearon para las funcionarias que lactaban; (v) atención y dispersión geográfica de los servicios; (vi) establecer (si no los hay) y hacer los cambios respectivos para los sistemas estadísticos e informativos; (vii) oferta y distribución de información con perspectiva de género; (viii) desarrollo de guías para justiciables y materiales especializados para operadores con herramientas del enfoque de género; (ix) disponer de personal especializado en temas de género; (x) elaboración de manuales de capacitación para la aplicación de los tratados internacionales a los derechos de la mujer. (Bergallo, Paola; Moreno, Aluminé;, 2017, pág. 57)

Sobre las medidas para la *Audiencia Externa*: “(i) creación de un protocolo de atención; (ii) asistencia técnica en casos individuales y estratégicos; (iii) promoción de servicios de acceso a la justicia sensible al género; (iv) infraestructura amigables para niños y niñas y personas en condición de discapacidad; (v) modificación de horarios de atención para hacerlos compatibles con las responsabilidades del cuidado y laborales; (vi) compendio normativo, jurisprudencial y doctrinal sobre la violencia de género; (vii) guía interactiva de estándares internacionales sobre derechos de las mujeres; (viii) guía de actuación en casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres; (ix) talleres dirigidos a las mujeres sobre perspectiva de género; (x) talleres y diplomados dirigidos a mujeres sobre género, derecho y justicia.” (Bergallo, Paola; Moreno, Aluminé;, 2017, pág. 59)

Por ultimo Bergallo y Moreno (2017) destacan como características generales de dicha oficina o dependencia que esta debe (i) tener acceso directo a responsables con capacidad de decisión; (ii) presupuesto por partida presupuestal propia con posibilidad de autogestión con cooperación internacional; (iii) debe tener un tamaño de personal que permita estar a la altura de las actividades;

(iv) debe tener articulación con instituciones del Estado y del sistema de justicia, con la población civil, las organizaciones de derechos humanos y de mujeres, y con la academia; (v) la coordinación de la oficina debe estar encabezada por mujeres; (vi) debe existir equipos interdisciplinarios que den respuesta a las múltiples necesidades en todos los campos de la ciencia que puedan necesitar las mujeres en una situación de violencia de género (violencia intrafamiliar).

II CAPITULO

Para responder la pregunta de investigación, se adelantó un trabajo de campo el cual se desarrolló de acuerdo con los parámetros de una investigación cualitativa. Este tipo de investigación construye el conocimiento a través de la observación del comportamiento humano, teniendo como referencia los discursos, entrevistas, escritos y en general todo medio por el cual se pueda analizar la forma dinámica en la que hombres y mujeres interactúan de acuerdo con su entorno, cultura, experiencias, ideologías, conocimientos y contextos. La investigación aplicó igualmente el enfoque etnometodológico³⁵ ya que, tanto la investigación cualitativa como el método etnometodológico, permitieron a través de entrevistas a mujeres expertas en temas de equidad y género, comprender el fenómeno de la violencia intrafamiliar y las formas en las que se impide el acceso a la justicia, además de dimensionar el fenómeno social de la discriminación hacia la mujeres, que es una de las categorías claves del enfoque de género como concepto; igualmente se utilizaron estas herramientas porque al ser esta una investigación socio jurídica, en la medida que se está observando la aplicación del derecho en la vida practica de las personas, los conocimientos y experiencias que por años estas mujeres expertas han tenido facilitó la comprensión del contexto y la dinámica diaria que viven las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que pretenden acceder a la justicia; sus valoraciones fueron claves para dimensionar esas ventajas y limitaciones que podría tener el enfoque de género en las comisarías de familia.

Las entrevistadas fueron tres mujeres que respondían a los criterios de selección de la investigación que fueron los siguientes: (i) Que fuesen necesariamente mujeres como quiera que las reivindicaciones y lucha por los derechos de las mujeres las han protagonizado históricamente las mujeres; (ii) mujeres que tengan conocimientos profesionales (como especializaciones, maestrías o

³⁵ El cual se encarga de estudiar los fenómenos sociales incorporados en nuestras acciones diarias.

doctorados) sobre temas de equidad y género; (iii) que cada una de ellas haya trabajado en espacios: institucionales, internacionales y judiciales en la medida que se pretendía obtener tres miradas diferentes según el ámbito de aplicación y trabajo de ellas. En este sentido la Dra. Pilar Rueda, quien hoy es la responsable de implementar el enfoque de género en la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP- fue con quien se logró tener una visión de aplicabilidad del enfoque desde la mirada judicial; con Sandra Zorio quien trabajó por varios años en la Organización de Naciones Unidas –ONU- Mujeres y es docente adscrita en la Universidad Nacional, se pudo ahondar en la mirada internacional; y con Claudia Mendieta se abordó la pregunta de investigación desde la perspectiva de la institucional, como quiera que ella trabaja para la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá y es la responsable de una de las casas de la igualdad, escenario que se creó para fomentar el enfoque de género en las políticas públicas del distrito.

Ahora bien, para realizar las entrevistas se tomó como unidad de análisis el *enfoque de género*, que es a su vez la ruptura de la investigación, y de acuerdo con las características que se extrajeron en la definición del concepto de *enfoque de género*, se tomaron los analizadores que fueron los siguientes: (i) la existencia de una subordinación y dominación a la mujer; (ii) las relaciones de poder; (iii) el género como una construcción social y (iv) los efectos de la construcción social del género. Así que a continuación se expone lo valorado por cada una de estas mujeres.

IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO: RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A LAS EXPERTAS PILAR RUEDA, SANDRA ZORIO Y CLAUDIA MENDIETA

Es menester aclarar al lector que las entrevistas que se realizaron a las 3 mujeres expertas en temas de equidad y género, Pilar Rueda, Sandra Zorio y Claudia Mendieta fueron transcritas y se

anexaran al presente trabajo, de manera que pueda ser consultadas para quien guste ahondar en las apreciaciones de ellas.

Ahora bien, en el caso de Pilar Rueda, Defensora de los derechos de las mujeres, fue “consultora de OIM, anteriormente Defensora Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer de la Defensoría del Pueblo. Tiene experiencia nacional e internacional en investigación y diseño de políticas públicas con perspectiva de género y en realización de campañas, cabildeo y trabajo con organizaciones de mujeres. En los últimos cinco años ha liderado, con mujeres víctimas de la violencia sexual el acceso a la justicia como un derecho para niñas, jóvenes y mujeres.” (La silla vacía (2019) Pilar Rueda. Recuperado de <https://lasillavacia.com/users/pilar-rueda-jimenez>)

Y quien también es Master en Estudios internacionales para la Paz y los Derechos Humanos of the University of Notre Dame y quien también se destacó por ser asesora de la Sub Comisión de Género de los diálogos de Paz entre el Estado colombiano y la ex guerrilla de las Farc en La Habana – Cuba. (Linkedin (2019) Pilar Rueda. Recuperado de <https://co.linkedin.com/in/pilar-rueda-jim%C3%A9nez-7a616b33>) empieza aclarando que fue la ciencia de la antropología en los años treinta con la antropóloga Margaret Mead la que a través de unos estudios en dos tribus indígenas, en Polinesia, observando cómo se asociaban los roles en las comunidades a las funciones asociadas a la maternidad o la reproducción concluyó que el comportamiento no era igual en esas dos comunidades y que la maternidad, el cuidado y la reproducción humana no siempre era responsabilidad de las mujeres y no siempre era valorada de la misma manera; a partir de estos estudios ella critica el enfoque biologicista³⁶, y deduce que si en algunas culturas hay unos roles y unas valoraciones

³⁶ Refiere a que las conductas propias de hombres y mujeres están determinadas por la natura de cada uno de ellos, esto es, que cada uno de comporta y se asume en los roles masculinos y femeninos porque biológicamente así está concebido por la evolución de la naturaleza

diferentes que en otras, esto significa que tales roles son una construcción cultural y no biológica y que por lo tanto puede culturalmente transformarse. (Rueda, 2018)

Pilar, empieza con esta definición para decir que aquellos roles persisten hasta el día de hoy, señala que este es un mundo muy arbitrario en el que las mujeres siguen siendo abusadas, subordinadas y condenadas a reproducir estos roles y las que no los reproducen son profundamente cuestionadas; señala Pilar, quien también es antropóloga, que a pesar de que existe un discurso de valoración exaltado de la familia, este discurso es “carreta” porque sigue siendo muy preocupante que la violencia intrafamiliar siga en ascenso en vez de descender, problemática la cual no se atiende adecuadamente porque según Pilar, en la familia³⁷ no importa proteger ni a la mujer ni al niño o a la niña, adiciona señalando, que en el caso colombiano, es frecuente ver como a las mujeres se les niegan sus derechos con el argumento de la protección y salvaguarda de la familia, hay una suerte de afán por mantener el orden familiar pese a los índices de violencia y el peligro que existe en la familia para las mujeres, esto dice con énfasis Pilar, es un discurso muy grave. (Rueda, 2018)

De esta manera la responsable nacional de implementar el enfoque de género en la naciente Jurisdicción para la Paz, explica el devenir de esos roles, que en últimas son los que permiten que la subordinación y dominación persistan; pero es quizás la categoría o analizador correspondiente a las *relaciones de poder* donde ella esboza con mucha más generosidad cómo funciona y se expresan esas relaciones en las vidas de las mujeres:

³⁷ Pilar Rueda define a la familia como “un espacio de unidad, de interacción social de personas”

Indica Pilar Rueda (2018) en la entrevista que la perspectiva de género se instaló como una herramienta de trabajo sobre todo desde las Naciones Unidas, que pretendió las transformaciones de las relaciones de poder y la desigualdad entre hombre y mujeres, en este sentido se empezó a hablar de Gender mainstreaming³⁸, enfoque de género, perspectiva de género y todas las diferentes variables que buscaban involucrar hombres y mujeres a los procesos de cambios de roles fundamentales. Sin embargo a esto se opuso por mucho tiempo el movimiento feminista, señalaban que tal iniciativa generaba un espacio muy cómodo que no permitía dar el debate de fondo que no era solamente las relaciones desiguales sino el patriarcado como modelo de control y de desarrollo muy asociado a modelos neoliberales.

Así que Pilar Rueda (2018) critica fehacientemente que la perspectiva de género se haya vuelto un concepto cómodo que dejó de cuestionar de una manera mucho más clara las relaciones de poder de cara al Estado, porque muy a pesar de los avances en materia de derechos humanos los escenarios privados donde se fortalecen las relaciones de poder no son corregidos por el Estado, así por ejemplo, el gran aporte que le hace al mundo la convención de Belem Do Para (1994) en materia de derechos de las mujeres es romper la berrera de lo privado y le ordena a los Estados partes intervenir con lo que sucede en casa, en el mundo de lo privado, porque contrario a como se creía en el pasado lo que sucede en el ámbito de una casa, de una familia si es responsabilidad del Estado, así que la Belem Do Para abre el mundo de lo privado a la injerencia del Estado y ordena actuar para erradicar la violencia contra las mujeres; ese es el mandato de la Belem, pero indica Pilar, que tal mandato no ha trascendido porque sigue existiendo una mirada de que el mundo privado es “mío” y que “yo” lo protejo y que nadie entra, ni siquiera el Estado, y esto hay que corregirlo porque el

³⁸ “Gender mainstreaming was established as a major global strategy for the promotion of gender equality in the Beijing Platform for Action from the Fourth United Nations World Conference on Women in Beijing in 1995. The ECOSOC agreed conclusions (1997/2) established some important overall principles for gender mainstreaming” Organización de Naciones Unidad (2002) Recuperado en <http://www.un.org/womenwatch/osagi/pdf/e65237.pdf>

mundo privado es un mundo en el que las relaciones de poder se fortalecen y se reproducen con una simbología muy fuerte, entre otras, la simbología de la violencia.

En este sentido, para Pilar la forma en la que la perspectiva de género ha sido utilizada para interpretar las relaciones de poder termina asumiendo que esas relaciones son inevitables y que con educación solamente se cambia y esa premisa, explica Pilar, deja de lado o relativiza que el Estado es el responsable de limitar el abuso del poder, incluso para sí mismo, y tiene la obligación de transformar esas relaciones de poder a través de acciones concretas como la justicia y la educación, pero no es solo con educación que se logran cambios y no es solo con justicia, sino que se tienen que estar implementado las dos al tiempo. La justicia como un tema que sanciona socialmente un comportamiento y la educación que desarrolla medidas de prevención. (Rueda, 2018)

Por otro lado y en lo correspondiente al analizador de *género como construcción social* Pilar Rueda (2018) expone que es el mundo privado donde empieza la inoperancia de la justicia. Son las ideas y las creencias de las y los operadores de justicia que están desde el lado de la institucionalidad supuestamente garantizando derechos, el mayor obstáculo para los derechos de las mujeres, y esa subvaloración tiene que ver, señala Pilar, con que las mujeres siguen siendo asumidas como parte del mundo privado y como la máquina de la vida que reproduce biológicamente. En este sentido mientras las ideas y creencias se sigue valorando el mundo de lo público que es valorado solo sí ahí están los hombres y el mundo femenino sigue están subvalorado no será posibles cambios profundos; y ella lo aclara con los siguientes ejemplos:

Toda la vida en el mundo privado estuvo la cocina y la cocina fue patrimonio de las mujeres, incluso fue muy despectivo, “la guisa”, “la sirvienta” y ahora que en la cocina hay hombres chefs, es cuando la cocina se valoró y entonces ahora vemos programas como

“Master Chef”³⁹ y los tipos cocinan con unos sombreros y una ropa blanca que uno dice increíble cómo no se empuerca y las cocinas de esos restaurantes son abiertas, no están cerradas, pero las que siguen detrás de una pared encerradas lavando platos son las mujeres; y lo mismo ocurre con los salones de belleza antes eran peluqueras ahora son estilistas, entonces son más hombres cortando y peinando, pero las mujeres siguen lavando el pelo y haciendo uñas de pies y manos. Yo, de hecho el día que vea hombres haciendo pies yo creo que el mundo ya cambió. Y lo mismo pasa con los diseñadores, antes eran las modistas; a las que nos criaron cociendo ropa, sabemos que ese es un mundo que se volvió masculino, así sean homosexuales quienes lideren este espacio, igual es la figura del hombre la que predomina y valora. Lo que eso refleja es que cuando los hombres entran al mundo femenino si se valora pero la mujer sigue por debajo y haciendo actividades dentro de ese mundo que no se valoran, entonces esa subvaloración de ese mundo es el que lleva a la subvaloración de los derechos de las mujeres y en el fondo la subvaloración de la familia porque en este país hay una farsa grande y es la familia es la institución de la sociedad, la que hay que defender ¡carreta! porque es el mundo donde más están las mujeres y donde menos importa, donde el Estado no quiere intervenir y es donde pasa lo peor la violencia intrafamiliar, violencia sexual y se refuerza las relaciones de poder abusivas, porque en toda sociedad y en toda relación humana hay relaciones de poder, el punto qué media que esas relaciones no sean arbitrarias y abusivas ese es el gran ejercicio y el gran papel que el Estado tiene, él debe establecer cuáles son las reglas del comportamiento para que una relación no sea abusiva y eso es lo que intentan hacer los instrumentos de protección de derechos humanos (Rueda, 2018, pág. 4)

³⁹ Es un reality show de origen Estadunidense, en el que existe una competencia por la preparación de la mejor comida de calidad. Se caracteriza porque la mayoría de sus concursantes son hombres.

En este sentido, según Pilar, es el Estado el llamado a eliminar toda forma de discriminación contra la mujer y el llamado a garantizar los derechos de las mujeres; en este sentido al enfoque de derechos⁴⁰, cuando se es funcionario, no le importa las creencias del funcionario, lo que debe hacer el funcionario es cumplir la ley; relata Pilar, que desde su experiencia ha encontrado funcionarios que niegan el derecho a la mujer y que incluso pone en riesgo su vida al negarlo, en ello hay una responsabilidad muy grande, porque más allá de las creencias e ideas del funcionario estas no son la regla para todas las mujeres, son reglas para él, es decir, las propias. Como funcionarios tiene la obligación de garantizar los derechos a las mujeres incluso por encima de sus creencias. Por eso no hay derechos absolutos y existe la ponderación de derechos, explica Pilar. (Rueda, 2018)

Por otro lado, y de acuerdo con el analizador de los *efectos de la construcción social del género*, Rueda, decide abordar esta categoría como las posibilidades que tendría la aplicabilidad del enfoque de género para combatir esa construcción social del género; ella asegura que la justicia no tendría limitaciones con el enfoque de género, pero si advierte sobre las limitaciones que tiene la justicia para reconocer los derechos de las mujeres de los niños y niñas, las limitaciones igualmente en reconocer, de acuerdo con el enfoque de género, las relaciones desiguales de poder y las vulnerabilidades que tiene cada persona en su familia. La justicia y la sociedad asumen que la violencia intrafamiliar es un asunto cultural y no un delito y que poco se hace reprimiendo el delito porque igualmente se seguirá reproduciendo el fenómeno cultural, esa es la lógica. Y esa subvaloración es muy grave, explica Pilar, porque finalmente ese es el mensaje que el Estado le trasmite a las familias y a los niños y niñas como el deber ser. (Rueda, 2018)

⁴⁰ El enfoque de derechos, pretende que el Estado cumpla sus obligaciones en materia internacional y cumpla igualmente con los presupuestos constitucionales en lo que tiene que ver con los derechos fundamentales

Así las cosas y de acuerdo con lo explicado por Pilar Rueda, la perspectiva de género hace una invitación a re pensar y derrumbar relaciones de poder que vayan en detrimento de la mujer e incluso del hombre, porque finalmente la perspectiva de género lejos de discriminar, rechazar o tildar a algunos de los sexos, busca precisamente que los mismos determinen formas de convivencia que no signifiquen la sub valoración del otro.

Quizás el aporte más significativo de Pilar gira alrededor de su crítica al enfoque de género, porque nos explica cómo no debe ser. Y es olvidando que el principal responsable de corregir las relaciones de poder, las cuales se fortalecen en escenarios privados, es el Estado, lo lamentable sigue siendo que no son corregidos por el Estado, pese a que instrumentos internacionales suscritos por Colombia como la Convención de Belem Do Para se le orienta.

En este orden de ideas, el enfoque de género permite hacer visible unas relaciones de poder abusivas, en las que el Estado debe intervenir; y si la cuestión es intervenir debe entonces entenderse en relación con el mundo de los funcionarios públicos (que podría leerse en clave de comisarías de familia) que la obligación como cara visible del Estado es garantizar derechos y acatar la ley, lejos de sus creencias, impresiones y opiniones. Esto es clave, porque si esa fuese la impresión y comportamiento de algunos funcionarios el debate sobre la aplicación de las normas en Colombia no sería tan deprimente.

Por otro lado el comportamiento de los analizadores es diferente cuando se abordan en la entrevista las valoraciones de Sandra Zorio, ella quien tiene más de 4 años de experiencia en docencia en la Universidad Nacional de Colombia, es también investigadora en áreas de derechos humanos, género, familia, ciencias sociales y en psicoanálisis, igualmente ha trabajado en el diseño y desarrollo de políticas públicas para mujeres (Linkedin (2019) Sandra Zorio. Recuperado de <https://co.linkedin.com/in/sandra-zorio-a2a031114>) destaca que la categoría en relación con la

existencia de una subordinación y una dominación hacia la mujer, premisa básica del concepto de *enfoque de género*, tiene un origen cultural que nace en la familia y ella lo explica de la siguiente manera:

Según (Zorio, 2018), la violencia fundante de todas las violencias contra la mujer es la violencia que se gesta en el seno de la familia, es decir, es en la familia donde afloran las primeras expresiones de subordinación y dominación que se expresan en la violencia intrafamiliar. Y esta violencia nace allí porque no existen mecanismos jurídicos reales que permitan luchar por erradicar esta violencia y esto se debe a que se continúa ligando el problema de la violencia contra las mujeres a una noción de familia específica, y en este sentido se prolonga porque las normas jurídicas no se acoplan a las realidades de las personas, en concreto a la vida cotidiana de las mujeres; así por ejemplo existen relaciones sentimentales, como el noviazgo, que hoy no están incluidas en ninguna de las formas en las que se conforma una familia⁴¹, en ese sentido quedan por fuera diversas relaciones sentimentales que no estarían apegadas al modelo tradicional de familia, pero que en la realidad de las personas podrían catalogarse como familia.

Es el caso de los típicos novios en el que él deja su ropa en casa de ella o viceversa, y sostiene un vínculo amoroso, habría que analizar si ellos no son familia, pese a que no hay una vivienda determinada para los dos, pese a la inexistencia de dependencia económica, o pese a que no estén casados por la religión o civilmente. En este caso, esas relaciones que no cumplen con los requisitos tradicionales de familia, para Zorio sí los son, y los recoge dentro de la modalidad de unión marital de hecho. Para ella que no se contemplen medidas de prevención y sanción a la violencia que se gesta en espacios sentimentales que no correspondan a la definición tradicional de familia es una de las razones centrales por las cuales la normatividad no funciona como se espera que funcione.

⁴¹ Explica Zorio que la familia se describe por vínculos afines, consanguíneos, civiles, de cohabitación y dependencia económica, esta es una visión amplia de familia

En este orden de ideas Sandra asegura que mientras se siga negando las múltiples formas de unión que hoy los jóvenes desarrollan en sus vidas diarias la normatividad seguirá teniendo una gran población de mujeres absolutamente desprotegidas. Ahora bien, cuestiona Zorio, que si en el caso de que a una mujer que sostiene alguna de esas relaciones no encasillada en el concepto de familia, es agredida por su pareja ¿Cómo se catalogaría esa violencia? ¿Si legalmente no hay familia?; así que ella explica que este fenómeno es lo que ella ha identificado como violencias huérfanas, en la medida que no existe un mecanismo que contribuya a prevenir ese tipo de violencia y a sancionarlo como lo hace la ley 1257 de 2008 con mujeres que denuncian violencia intrafamiliar, así las cosas un comisario o comisaria no podría aplicar las medidas de protección a esa mujer agredida porque según la noción de familia específica que existe en la ley ella no fue agredida en un contexto familiar, valga la pena citar el artículo que así lo dispone:

“Artículo 16. El artículo 4 de la Ley 294 de 1996, modificado por el artículo 1 de la Ley 575 de 2000 quedará así:

Artículo 4°. Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir” (Ley1257, 2008)

Agrega igualmente Sandra Zorio (2018) que si el novio agrede, maltrata o violenta a la mujer, ella no tendría a dónde acudir, primero porque si todavía no hay una lesión personal que se tipifique como delito dentro del código penal no puede ir a la fiscalía; segundo, no podría a las comisarías de familia para recibir la protección que prevé la ley 1257 de 2008 porque esta solo sigue aplicándose para violencia intrafamiliar, aun siendo la ley de no violencias contra las mujeres no tiene dientes

jurídicos para proteger a las mujeres, solo las mujeres que hacen parte de una forma de familia son las que están previstas en esta ley; y si va a la estación de la policía que es su última opción tendría que iniciar un proceso común y corriente que aspirar como máximo a una caución.

Para Sandra una de las soluciones para erradicar que las dominaciones y subordinaciones que sufre la mujer en el seno de la familia además de las violencias que se ejercen allí es que se logre realizar una interpretación amplia de lo que significa la unión marital de hecho para que se pueda aplicar también a otras relaciones conyugales. Señala Zorio que ello es de vital importancia porque es esta la primera forma de relación antes del matrimonio, entonces si el Estado de Derecho no fomenta los mecanismos de atención a la violencia contra las mujeres ¿cómo pretende después a evitar que eso mismo se siga sucediendo en el matrimonio? (Zorio, 2018)

En lo atinente a la segunda categoría, que es “*relaciones de poder*”, como elemento central del concepto de perspectiva de género, Zorio aborda el tema diciendo que:

Las relaciones de poder se construyen desde la sexualidad. En el libro “Algunas consecuencias psíquicas de las diferencias sexuales anatómicas” de Sigmund Froid (Froid, 1925), analiza el comportamiento del niño ante la niña, cuando ve que ella no tiene pene, entonces muestra que la reacción es de angustia, Froid en este texto empieza a estudiar la relación burguesa entre hombre y mujer para mostrar porque la reacción del niño es de angustia porque piensa que a él le va a pasar algo y se va a quedar sin “eso” y la reacción de la niña es como de subvaloración, “yo por no tenerlo soy diferente a este” – piensa la niña. Entonces Froid lo que está haciendo es una interpretación con sus mismos pacientes donde el encuentra que las mujeres si se someten en las relaciones con los hombres, como si psicológicamente desde muy niños asumieran que ser hombre o mujer es la ausencia de tener algo denominado pene.

Si uno va al corazón de esos estudios sexuales o de esas teorías sexuales que hay en las familias, desencadenaría una relación que de entrada pone a las niñas en la falta de pene y a los niños con la presencia de pene; no tenemos una cultura sexual de diferentes pero iguales. Es decir que las relaciones de poder se construyen también desde la sexualidad.” (Zorio, 2018, pág. 5)

Un aspecto de la entrevista fue cuando Zorio ilustra respecto del cómo se reproducen las relaciones de poder asignados a hombres y mujeres estos tienen origen en el siglo XVIII y XIX y toda la represión que hubo en la familia burguesa para poder conformar ese modelo de familia sostenible al capitalismo, son modelos de matrimonio entre hombre y mujer para que se porte de tal manera que le fuese útil modelo capital; allí nacen estas relaciones de poder las cuales, además, están inscritas en el inconsciente del hombre y de la mujer y lo reproducen en acciones en las cuales ellos no tienen control. (Zorio, 2018, pág. 4)

Relata Zorio, que desde su experiencia, que las relaciones de poder se expresan cuando hay violencia, en ese sentido explica que la violencia proviene del hombre cuando la mujer no cumple con ese rol que le fue asignado; explica también Zorio que el escenario donde se reproduce la violencia intrafamiliar es complejo de abordar porque por lo general las mujeres además de estar subyugadas a esa relación de poder que la oprime también está profundamente en situación de dependencia, que bien puede ser emocional (porque no se quiere asimismo y el patriarcado le ha hecho entender que su única oportunidad de ser querida y amada es al lado de un hombre que le proporcione y satisfaga esa supuesta necesidad) o dependencia económica, sexual etcétera, así las cosas, las relaciones amorosas a las que se enfrentan las mujeres no son relaciones de igual a igual

sino relaciones en las que el hombre es mucho más poderoso que ella y es por ello que se asume con el derecho de violentarla.

Esta realidad social, tiene una explicación, y es que a la hora de conformar familias o relaciones en las que se comprometen sentimientos, tanto hombres como mujeres vienen cargados con estereotipos, los cuales se les inculcó desde que fueron niños y niñas en sus familias, que les indica cómo deben ser y comportarse en las relaciones humanas que establezcan, entonces se asume que existe una única manera de ser hombre y una única manera de ser mujer: el fuerte, protector, proveedor y ella débil, emocional, cuidadora, reproductora y es precisamente esta forma binaria de asumir la existencia de ellos lo que permite que la sociedad siga reproduciendo estas concepciones tradicionales que lo único que fomentan es la violencia. Cuando venimos con estos modelos, dice Zorio, “hay de alguna manera inconscientemente ya grabado en nosotras una sumisión de parte de las mujeres hacia los hombres y un poderío desde los hombres hacia las mujeres y si ese chip se sigue reproduciendo en las familias nunca vamos acabar con la violencia contra las mujeres”. (Zorio, 2018)

Continuando con Sandra Zorio y su explicación de cómo se asume el *género como construcción social*, ella lo liga a la responsabilidad que tiene el Estado al respecto, según ella, el Estado reproduce el modelo patriarcal de familia y para explicar esto da el siguiente ejemplo: cuando en sus instrumentos (decretos, resoluciones, circulares, documentos oficiales) el Estado solo tiene un titular del derecho, un solicitante, un jefe de hogar, el Estado asume que la familia siempre es regida por uno, y tiene una visión triangular de la familia, donde hay un jefe y no una visión más democrática donde habrían poderes que se reparten, en últimas, continua explicando Zorio, termina siendo el hombre quien interactúa con el Estado, teniendo relaciones públicas y seguimos reproduciendo el modelo del hombre a lo público y la mujer a lo privado. (Zorio, 2018)

Por último y abordando la categoría de *construcción social del género*, Sandra señala que la respectiva de género desentraña que no hay una sola manera de ser hombre o de ser mujer, y que esta perspectiva es absolutamente útil en la apuesta por la igualdad de género que socialmente se construyó en detrimento de la mujer, es categórica Sandra Zorio cuando señala que la perspectiva de género ayuda a equilibrar la balanza que por décadas ha estado en contra de las mujeres y de las niñas.

Para ir concluyendo en el comportamiento de cada una de las categorías de la unidad de análisis, es decir, el enfoque de género, a continuación se refleja cómo fueron valoradas por Claudia Mendieta, quien trabaja para la Secretaría Distrital de la Mujer en Bogotá y es la responsable de una de las casas de la igualdad, escenario que se creó para fomentar el enfoque de género en las políticas públicas del distrito y que tiene como responsabilidad aplicar el enfoque de género en las políticas públicas en la ciudad de Bogotá.

Al preguntarle sobre la *subordinación y dominación* que existe hacia la mujer explicó que esa existencia se debe a unos roles que han sido contruidos de una manera desigual, donde evidentemente las mujeres se ven muy afectadas; explica que en el caso de la institucionalidad, los hombres y mujeres que están allí para aplicar la ley y ser garantes de derechos, no la aplican porque vienen previamente con una formación cultural que les impide comprender las realidades sociales en las que las mujeres están sometidas en sus hogares, luego por lo cual, al no ser conscientes de la existencia de unas relaciones que subordinan a la mujer y de las cuales esa mujer víctima no es consiente, es poco probable que ese funcionario actúe de la manera en que se espera que lo haga; por esto mismo es fundamental que los y las funcionaras se capaciten en comprender que la violencia intrafamiliar debe suponer no solo los esfuerzos que ellos puedan hacer desde sus respectivos cargos sino que la tarea trasciende a sus hogares y espacios de relación social, si esos funcionarios no son

conscientes del devenir de la violencia intrafamiliar no será posible superar las violencias contra la mujer.

En este sentido, Claudia expone un informe de una investigación de la Consejería de Equidad de Género Presidencial (Equidad para la Mujer Presidencia de la República de Colombia, 2015), en el que se refleja que las y los servidores avalan que las violaciones sexuales tiene que ver, o están relacionadas, con la forma de vestir de las mujeres, con la hora en la que las mujeres permanecen en la calle; describe Claudia que esos imaginarios son los que impiden que la norma no se aplique y que la violencia contra la mujer se perpetúe y con ella su subordinación. Al respecto asegura que el enfoque de género les va permitir a esos servidores públicos entender que las mujeres son sujetas de derechos que hay unos derechos establecidos y que su labor bajo ninguna circunstancia es un favor que se les realiza a las mujeres. (Mendieta, 2018)

Respecto de las *relaciones de poder*, que asegura la teoría feminista es una de los conceptos claves para comprender como funciona el enfoque de género, Claudia dedica unos buenos minutos de la entrevista a descifrar como se evidencian esas relaciones de poder en la cotidianidad de las mujeres, primero señala que se pueden notar esas relaciones en las cifras de participación política de las mujeres, sugiere que la ausencia de paridad en cargos públicos, la poca presencia de mujeres en el Congreso de la República, que hasta la fecha en Bogotá no se haya tenido una alcaldesa o en el país una presidenta, refleja las pocas posibilidades que tiene la mujer en espacios de decisión y participación política, que se debe a ese papel secundario y subvalorado que la sociedad en su conjunto le sigue otorgando a la mujer, para Claudia esto no es tan visible a los ojos de muchas y muchos pero resalta que esas relaciones están “ahí” cotidianamente y que solo se pueden ver cuando se pone “las gafas” del enfoque de género. En ese sentido, ella valora que los estereotipos que se han creado como *construcción social* del género, desaparecerían si se aplica el enfoque de género porque

este aportaría mucho para sensibilizar a las y los funcionarios frente a lo que viven las mujeres, aportaría a que esos funcionarios dejaran de cuestionar la vida de las mujeres y culparlas por las violencias que sufren, el enfoque de género despoja de esos imaginarios que señalan como culpables a las mujeres por sus decisiones de vestuario, comportamiento, horario de desplazamiento en la calle, o si está o no acompañada. Desde la experiencia de Claudia, ella narra cómo ha sido testiga del trato que dan algunos funcionarios a las mujeres cuando denuncian algún tipo de violencia, ella comenta que escucha preguntas como:

- ¿Y usted que hizo para que le pegaran?
- ¿Y usted por qué lo provocó?
- ¡Pero que hacia sola a esa hora!
- ¿Está segura de querer denunciar?, ¿Qué será de sus hijos si usted se separa?
- Pero usted debería tener presente que vestirse así, es provocador para cualquier hombre.
- ¡Si es la primera vez que abusa de usted, debería perdonarlo, y procurar que su familia no se acabe por eso!

Esto es absolutamente inaceptable, señala Claudia. Los funcionarios no solo no se aseguran de poder contribuir a garantizar los derechos de esas mujeres maltratadas, sino que las re victimiza con sus cuestionamientos y señalamientos. Si los funcionarios trabajaran con una perspectiva de género, a propósito de la última categoría, muy seguramente se evitaría que desde la institucionalidad se siga

generando un ambiente de impunidad y permisividad con la violencia hacia la mujer. (Mendieta, 2018)

SOBRE LA PERTINENCIA QUE LAS COMISARÍAS DE FAMILIA APLIQUEN EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

De acuerdo con las valoraciones de las expertas, hay varias ideas que se expresan como consensos entre ellas, que son importantes de resaltar, en la medida que contribuyen a la construcción de la respuesta de investigación.

El primer consenso entre ellas tiene que ver con la fuente de las violencias contra la mujer, todas concluyen que es el contexto familiar el epicentro de la reproducción de las violencias y por ende el espacio más inseguro para las mujeres; a propósito de ello vale la pena traer a colación el ya citado Informe publicado por Medicina Legal en la violencia de pareja, de los 50.707 casos “registrados en el año 2016, el 86% fue por violencia contra la mujer con una tasa de 213,48 por 100.000 habitantes” (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses , 2016, pág. 310); igualmente que durante el 2016 ocurrieron 14.738 casos de violencia intrafamiliar ejercida por otros familiares, es decir que la cifra no refleja la violencia que se ejerció por parte de la pareja, de los cuales 9.540 ocurrieron contra mujeres, es decir el 67,69% de los casos (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses , 2016, pág. 260)

Tabla 15. Violencia entre otros familiares según grupo de edad y sexo de la víctima. Colombia, 2016

Grupo de edad	Hombre			Mujer			Total		
	Casos	%	Tasa x 100.000 hab.	Casos	%	Tasa x 100.000 hab.	Casos	%	Tasa x 100.000 hab.
(18 a 19)	309	5,94	34,88	781	8,19	92,02	1.090	7,40	62,84
(20 a 24)	820	15,78	37,23	1.754	18,39	83,39	2.574	17,47	59,78
(25 a 29)	768	14,77	37,55	1.510	15,83	76,37	2.278	15,46	56,63
(30 a 34)	665	12,79	37,41	1.215	12,74	66,47	1.880	12,76	52,14
(35 a 39)	579	11,14	36,48	1.051	11,02	62,64	1.630	11,06	49,92
(40 a 44)	538	10,35	38,37	915	9,59	60,70	1.453	9,86	49,94
(45 a 49)	544	10,47	39,65	882	9,25	58,65	1.426	9,68	49,59
(50 a 54)	505	9,72	38,86	803	8,42	56,04	1.308	8,88	47,87
(55 a 59)	470	9,04	43,27	629	6,59	51,69	1.099	7,46	47,72
Total	5.198	100	38,06	9.540	100	67,68	14.738	100	53,10

Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses/Grupo Centro de Referencia Nacional Sobre Violencia/Sistema de Información de Clínica y Odontología Forense. Tasas calculadas con base en las proyecciones de población DANE 1985-2020.

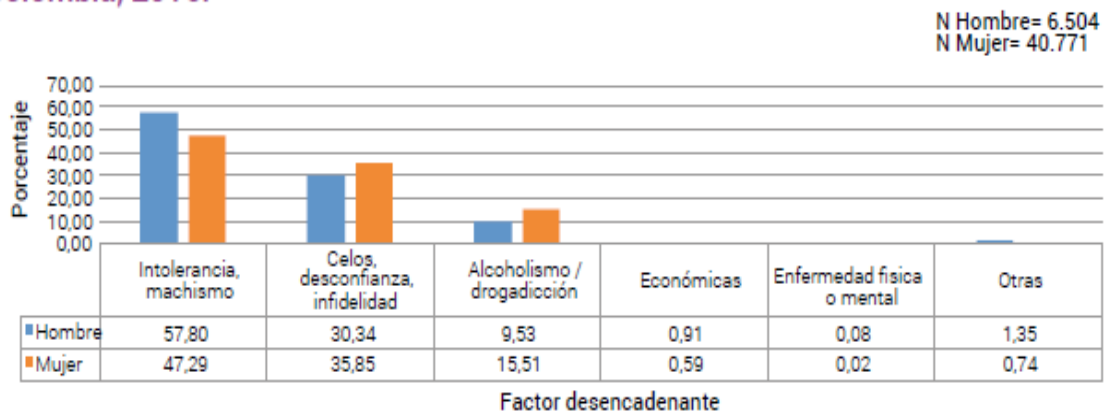
Ahora bien, cuando las expertas señalaron que el escenario más violento para las mujeres es su propio hogar, se referían a una cuestión innegable que ayuda a soportar Medicina Legal, quien reportó que el 72,92 % de los casos de violencia de pareja se presentó en la vivienda (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2016, pág. 313)

Tabla 4. Violencia de pareja, según escenario del hecho y sexo de la víctima. Colombia, 2016.

Escenario del hecho	Hombre		Mujer		Total	
	Casos	%	Casos	%	Casos	%
Vivienda	4.737	67,88	31.810	72,92	36.547	72,22
Calle (Autopista,Avenida,Dentro de La Ciudad)	1.139	16,32	6.065	13,90	7.204	14,24
Vía Pública	474	6,79	2.640	6,05	3.114	6,15

Por otro lado, al señalar las expertas que las violencias contra las mujeres que se gesta en las familias y desde la niñez como un factor cultural ligado al machismo el Instituto de Medicina Legal lo confirma, señaló que “el 57,80 % de los hombres y el 47,29 % de las mujeres manifestaron como factor desencadenante de la violencia el machismo”, véase tabla a continuación:

Figura 7. Violencia de pareja, según factor desencadenante de la agresión. Colombia, 2016.



Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses/Grupo Centro de Referencia Nacional Sobre Violencia/Sistema de Información de Clínica y Odontología Forense.

Nota: Se excluyen 3.432 casos de sin información.

Las anteriores graficas se traen a colación para sustentar las valoraciones que anteriormente brindaron las expertas, en el ánimo del que la o él lector puedan verificar las mismas. Las cifras de Medicina Legal también permiten analizar que debido al fenómeno tan grande que hoy en Colombia significa la violencia que ejerce la pareja contra la mujer, esta violencia no la acoge Medicina Legal dentro de las cifras de violencia intrafamiliar, y ello responde a lo que la Dra. Sandra Zorio explicaba, y es que el compañero o novio no se considera, para el Estado y sus instituciones, como un miembro parte de la familia, a pesar de que sí lo son, según Zorio, en ese sentido el Instituto Colombiano de Medicina Legal también refleja en su metodología de ordenar las cifras que la violencia que existe

contra las mujeres por parte de sus parejas debe ser tratada como un tipo de violencia que no tiene relación con la violencia intrafamiliar.

Por considerarlas de gran importancia se cita algunas de las conclusiones que arrojó Medicina Legal en el informe indicado:

Es dispendioso conocer la magnitud del fenómeno de la violencia intrafamiliar, y sus modalidades, por una parte, porque las estadísticas se basan en las denuncias que hacen las víctimas o terceras personas y el nivel de denuncia es extraordinariamente bajo; y por otro, porque la información capturada por las entidades receptoras de denuncias es limitada, acorde al objeto de trabajo de cada institución. Por tanto, se requiere acudir a estudios poblacionales para tener aproximación a la magnitud del problema en Colombia. También se requiere incentivar la identificación de estas violencias en otras instituciones, redes de apoyo y servicio que frecuentan las víctimas como centros educativos, hospitalarios, bancos, iglesias, trabajo, etc., y generar estrategias para reportar y almacenar la información.

Los cambios demográficos del país, que conlleva al envejecimiento poblacional, fusionado a nuevas estructuras familiares, con frecuencia multigeneracionales; la mayor incorporación de la mujer al trabajo, a quien tradicionalmente se le había delegado la responsable del cuidado de los integrantes del hogar; la disminución de la tolerancia: la incorporación de nuevas tecnologías que ha conllevado a la reducción de espacios de interacción familiar y social; así como los cambios de valores presentes en la sociedad; son factores a tener en cuenta al momento de identificar y planificar acciones encaminadas a la prevención de la violencia intrafamiliar.

Uno de las creencias que hay que superar, es que la Violencia de Género sólo forma parte de los conflictos de pareja; el maltrato a la mujer se extiende a sus hijos e hijas, impactando negativamente su desarrollo, y contribuyendo a la transmisión de violencia a sucesivas generaciones. Por tanto, debe ser prioritario para las instituciones evitar esta forma de maltrato infantil mediante programas de prevención y asistencia a las víctimas.

Se requiere visibilizar todas las modalidades de violencia al interior de la familia, en la ardua tarea de su prevención, pues la focalización solo en algunas modalidades, deja latente la permanencia de las agresiones a su interior.

El Estado requiere repensar las estrategias de prevención y atención oportuna y efectiva a las violencias en el contexto familiar; las cifras demuestran que los programas no están siendo muy efectivos. (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses , 2016, pág. 295)

En este orden de ideas, cuando se habla de una cultura que reproduce imaginarios estereotipos machistas, se quiere decir que tales estereotipos permiten que la violencia contra la mujer se normalice, que sea invisible para los ojos de muchos y una violencia sorda a oídos de otros; el cuestionamiento respecto de esos estereotipos son el comienzo para una mujer de dimensionar el mundo patriarcal en el que vive y en el que está expuesta todos los días sin importar en escenario social en el que se encuentre, bien sea en su familia, en su universidad o espacio formativo, en su trabajo, o en la calle. Al respecto la Dra. Claudia Mendieta daba ejemplos muy ilustrantes respecto de las reacciones que ha tenido que percibir, por parte de algunos funcionarios públicos, en algunas comisarías de familia, las cuales vale la pena analizar. Preguntas como: ¿Y usted que hizo para que le

pegaran? , ¿Y usted por qué lo provocó? , ¿Está segura de querer denunciar?, ¿Qué será de sus hijos si usted se separa? Son el reflejo la existencia de un *enfoque familista* que existe en las comisarías de familia; este enfoque:

Busca poner los intereses de la familia por encima de los de sus integrantes, asumiendo que con ello se logra garantizar los derechos de los miembros del núcleo familiar. Aunque en principio esta parece ser una buena orientación, el problema que genera es que termina beneficiando únicamente a quien tiene el poder de decisión en la familia, y este generalmente es un hombre (Guzman Rodríguez & Chaparro Gonzáles, 2013)

Esto es perjudicial para la mujer, porque este enfoque lo que genera es que la impunidad en casos de violencia intrafamiliar se mantenga y de al alza, este enfoque familista también sería el responsable de que algunos funcionarios, como lo señalaba también Pilar Rueda, nieguen derechos a las mujeres en razón de sus ideas y creencias, es decir, en razón de este enfoque familista, luego por lo cual, cuando un funcionario aborda a una mujer víctima de violencia intrafamiliar con estas preguntas en el fondo lo que está haciendo es re victimizarla y llenarla de miedos y complejos que para la mujer por su estado de vulnerabilidad en el que se encuentra al ser maltratada emocionalmente, recuérdese que todo acto de maltrato también genera una secuela emocional, desista de denunciar y se arrepienta de acudir a la justicia.

Al respecto el Informe “Segunda Medición sobre la Tolerancia Social e Institucional⁴² de las Violencias contra las Mujeres”, da cuenta precisamente de esos imaginarios colectivos relacionados con

⁴² “Tolerancia institucional de las violencias contra las mujeres: conjunto de actitudes, percepciones y prácticas de las/os funcionarios públicos que favorecen y perpetúan la violencia contra las mujeres, incluyendo la omisión de los deberes estatales de restitución de derechos, protección, prevención y erradicación así como la perpetración directa

Los roles de género tradicionales que le asignan a los hombres características relacionadas con el ejercicio del poder autoritario, la agresividad y la violencia. En la segunda medición se evidencia que el 41% de las servidoras y servidores públicos considera que cuando los hombres están bravos es mejor no provocarlos. Este imaginario está mucho más naturalizado en las mujeres (49%) que en los hombres (27%)... Este imaginario además que naturaliza a los hombres como violentos e incapaces de manejar sus emociones, es una manera de justificar las violencias contra las mujeres y de culpabilizar a las mujeres por la ocurrencia de la violencia (Equidad para la Mujer Presidencia de la República de Colombia, 2015)

Segunda medición sobre la tolerancia social e institucional de las violencias contra las mujeres

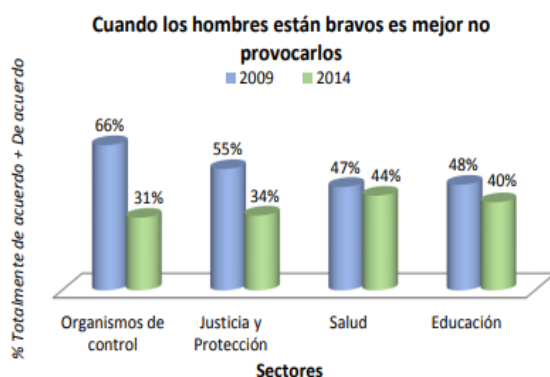


Gráfico 5: Servidoras y servidores públicos que están de acuerdo que cuando “los hombres están bravos es mejor no provocarlos”

Explica el informe que:

La permanencia de las violencias contra las mujeres está alimentada por dos mecanismos que todavía tienen mucho peso. Uno se relaciona con el hecho de pensar que es un medio efectivo

de actos de violencia por parte de actores institucionales” (Equidad para la Mujer Presidencia de la República de Colombia, 2015)

para corregir las conductas que se salgan de esos modelos culturales que establecen las formas ideales sobre cómo deben ser y comportarse las mujeres. El otro mecanismo tiene que ver con las diversas justificaciones que existen sobre las violencias, lo cual genera tres resultados perversos. El primero es que se culpabiliza a las víctimas, el segundo que se le quita la responsabilidad al agresor y, el tercero, que hace muy débil la intolerancia social, institucional y personal como un rechazo ético de cualquier forma de violencia (Equidad para la Mujer Presidencia de la República de Colombia, 2015, pág. 62)

En este sentido, imaginarios de las y los funcionarios, como que las mujeres pueden ser corregidas por sus parejas, son la muestra argumentativa de la necesidad de que los funcionarios se liberen de esos estereotipos a través de la perspectiva de género. El informe refleja esta vergonzosa situación señalando que:

El 31% de las servidoras y servidores públicos piensa que si las mujeres conservaran su lugar serían menos agredidas por sus parejas. Este imaginario se encuentra mucho más arraigado en los hombres (38%) que en las mujeres (27%), seguramente porque para los servidores encuestados la transgresión de los roles de género tradicionales por parte de las mujeres, no es aceptada y merece sanción (Equidad para la Mujer Presidencia de la República de Colombia, 2015, pág. 62)

Un ejemplo de ello es:

“Yo que me he adentrado a hacer análisis psicológico en nuestras víctimas mujeres, yo me doy cuenta que tal síndrome de la mujer maltratada no existe y la Mesa (intersectorial de prevención de violencias basadas en género de Buenaventura) justifica allí y eso está

llevando a que nuestras mujeres se desobliguen, están dejando de lado su rol y eso está generando mayor problema. Las mujeres hoy con el cuento de la 1257 entonces se van a bailar, se van a jugar el bingo y dejan a los niños sin comer y el señor ya no aguanta más, están aprovechándose de la ley” (Equidad para la Mujer Presidencia de la República de Colombia, 2015, pág. 63)

Entre los mecanismos más arraigados culturalmente y que repercute en la legitimación de las violencias contra las mujeres se encuentra la justificación por su gusto aparente de vivir en relaciones violentas. Este imaginario tiene repercusiones de diverso orden. Primero, culpabiliza a las mismas víctimas por vivir en relaciones violentas. Segundo, evidencia una débil respuesta por parte de las entidades estatales, que está lejos de ser integral y coordinada. Tercero, ubica la responsabilidad de la no garantía de la repetición del hecho violento en las mismas mujeres. En la Segunda Medición se encuentra que el 17% de las servidoras y servidores públicos está de acuerdo con que las mujeres que siguen con sus parejas después de ser golpeadas es porque les gusta. Existe una diferencia significativa por sexo que evidencia que este imaginario está mucho más arraigado en los hombres (22%) que en las mujeres (13%). (Equidad para la Mujer Presidencia de la República de Colombia, 2015)

Sector Ciudades	Organismos de control		Justicia y Protección	
	2009	2014	2009	2014
Medellín	0%	14%	6%	2%
Barranquilla	14%	0%	17%	2%
Bogotá	17%	0%	11%	14%
Cartagena	0%	0%	27%	0%
Florencia	17%	15%	6%	0%
Popayan	38%	0%	18%	25%
Villavicencio	28%	0%	11%	4%
Pasto	23%	0%	33%	4%
Tumaco	63%	0%	35%	18%
Buenaventura	33%	0%	36%	18%
TOTAL	20%	3%	18%	8%

Fuente: Informe “Segunda Medición sobre la Tolerancia Social e Institucional”

Por otro lado uno de los imaginarios que señala la Segunda Medición es “si se está de acuerdo con que las mujeres que se visten de manera provocativa se exponen a que las violen”. Arrojando como resultado que el 23% de los servidores públicos están de acuerdo con esta premisa. Las mujeres lo aprueban en un 27% y los hombres 17%.

Segunda medición sobre la tolerancia social e institucional de las violencias contra las mujeres



Gráfico 11: Servidoras y servidores públicos que están de acuerdo que las mujeres que se visten de manera provocativa se exponen a que las violen desagregado por sector

Por otro lado, afirmaciones realizadas por funcionarios públicos como: ¡Pero que hacia sola a esa hora!; pero usted debería tener presente que vestirse así, es provocador para cualquier hombre; ¡Si es la primera vez que abusa de usted, debería perdonarlo, y procurar que su familia no se acabe por eso! Son el reflejo de una idea que esta encriptada en las mentes de hombres y de mujeres que responde a la construcción social del género, es decir la forma en la que debería ser y comportarse las mujeres; en este caso se le cuestiona a la mujer por estar sola en la calle, por el vestuario que decide llevar puesto, y hasta se le cuestiona por denunciar abusos sexuales; estos cuestionamientos se ven a diario porque se considera que la mujer es un objeto, que no es susceptible de derechos, un ser dócil y débil; esa es la idea cultural que se ha vendido por generaciones y que se reproduce esencialmente en las familias desde la niñez.

Ahora bien, al ser una construcción cultural puede y deber ser modificada, el llamado a atender estos cambios es el Estado Social de Derecho y por supuesto cada uno y cada una de nosotras, como lo mencionaba, Rueda, sin mujeres empoderadas el cambio no será nunca.

LA IMPORTANCIA DEL ENFOQUE DE DERECHOS PARA EL ENFOQUE DE GÉNERO

Otro aspecto fundamental fue que las tres expertas recomendaron además de la implementación del enfoque de género tener presente el enfoque de derechos. Este concepto de enfoque de derechos es “conocido originalmente como “Rights based approach. Surgió desde la década de los noventa y se impulsó con fuerza en la Cumbre de Copenhague sobre Desarrollo Social en 1995, allí tomo la distinción de “reivindicación de derechos”.

La Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho al Desarrollo de 1986 fue un hito inicial muy importante en este tema. La Resolución 41/133 del 4 de diciembre del mismo año, que detallaba un plan para poner en práctica el derecho al desarrollo, generó conflictos por la carga ideológica que parecía contener. Por lo cual los países industrializados se negaron a aceptarlo porque lo vieron como una imposición de un solo lado para la solución de los problemas referentes a la deuda, eliminación de barreras comerciales, promoción de la estabilidad monetaria y desarrollo científico y cooperación técnica. No fue hasta la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena en 1993 que el principio de indivisibilidad, interdependencia y naturaleza no jerárquica de los derechos se empezó a expandir, aun cuando en Latinoamérica, el enfoque de derechos en el desarrollo se mantuvo más marcado por los entonces denominados derechos de primera generación.

Fueron las agencias de cooperación para el desarrollo las que pusieron de relieve –en los años noventa– dicho enfoque, tanto en sus prácticas como en sus relaciones con los Estados y la sociedad civil, en particular, en los países en desarrollo a los que prestan ayuda. Grandes ONG⁴³ como Amnistía Internacional y las principales agencias de cooperación para el desarrollo como el DFID⁴⁴ incorporaron dicho discurso con más fuerza, recién hacia inicios de los 2005.

Los derechos económicos y sociales poco a poco fueron retomando su importancia, aunque ciertamente poniéndose mayor énfasis en su exigibilidad, recién hacia fines de los noventa e inicios del 2000. Es en el marco de esta discusión que surge el denominado enfoque de derechos, que lejos de ser más de lo mismo (reivindicación de derechos, teoría constitucional

⁴³ Organización No Gubernamental

⁴⁴ Department for International Development

o derecho internacional de los derechos humanos), se constituye más bien como un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que –desde el punto de vista normativo– está basado en las normas internacionales de derechos humanos y –desde el punto de vista operacional– está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos. (Alza Barco, 2006, pág. 50)

Ahora bien el enfoque de derechos entendido como instrumento metodológico se usa el discurso de la teoría constitucional e internacional de los derechos humanos, pero que a su vez incorpora una dimensión política en el análisis: el de la decisión pública adoptada a través de las políticas públicas del Estado, quien se hace principal responsable de la vigencia de los derechos y pone al ciudadano al centro de toda decisión. (Alza Barco, 2006, pág. 54)

En este orden de ideas las expertas hacen un llamado a tener en cuenta también este enfoque, como quiera que según Rueda, el enfoque o la perspectiva de género si bien contribuye a superar algunos de los problemas de la inoperancia de la justicia respecto del acceso para las mujeres, no soluciona todos los problemas, asunto que sí puede complementar en enfoque de derechos, porque adelantaría la política pública necesaria para que los derechos humanos de las mujeres estén en las agendas legislativas, además de ello porque el enfoque de derechos al obligar la implementación de políticas públicas con énfasis en derechos humanos en general para toda la comunidad, en este sentido, no se debe entender que el enfoque de derechos puede ser un instrumento exclusivo de utilidad para las reivindicaciones de las mujeres, todo lo contrario el enfoque de derechos y el enfoque de género pretenden tumbar las brechas de desigualdad que existen entre sexos, económicas, racial etcétera.

Otro de los grandes resultados que dejaron esas entrevistas fue la caracterización del enfoque de género, es decir los aspectos positivos que tendrían en la vida de las mujeres y de los hombres en su conjunto la aplicabilidad del enfoque de género. Cada una de ellas dimensionó lo que sería los aportes más importantes que tendría en enfoque de género aplicado en las comisarías de familia⁴⁵, pretendiendo que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar puedan acceder a la justicia, pero también dimensionado que la aplicabilidad del enfoque de género debería estar en el centro de toda la institucionalidad. Las expertas explicaron que el enfoque de género, como categoría de análisis permitiría que el Estado social de derecho pueda avanzar en sus compromisos internacionales en relación con el cumplimiento a su deber de la erradicar de toda forma de violencias contra las mujeres, porque el enfoque de género aliviaría muchas de las problemáticas que abordan las mujeres ante el sistema de justicia colombiano, solo para mencionar algunas estas: la ubicación distante, esto es, la ubicación geográficamente lejos de las mujeres que necesitan acceder, contribuiría a superar la ausencia de paridad en las instituciones públicas y legislar para que las organizaciones privadas adelanten esfuerzos en ese sentido, le permitiría al Estado reducir el gasto público de acompañamiento y reparación psicosocial de las mujeres que fueron afectadas, además le permitiría cambiar la política criminal que consiste en reprimir el delito pero no prevenirlo.

Por otro lado, el enfoque de género permitiría que las y los funcionarios de las comisarías de familia (en el caso concreto) puedan aplicar la ley de manera tal que cualquier mujer que desee denunciar alguna forma de violencia logre acceder de manera adecuada y en cumplimiento de los estándares internacionales a la justicia. Esto podría ser posible porque el enfoque de género brinda a las personas la posibilidad de entender las realidades complejas que acompañan las violencias contra las mujeres. Explica que las mujeres no nacen sumisas, ni a la merced de otro, explica que las

⁴⁵ Ver anexo de transcripción de entrevistas

mujeres conservan en igualdad de derechos y libertades que los hombres, explica también que el trabajo y capacidades de las mujeres deben ser igualmente valorados y que por tales circunstancias ninguna especie de suerte natural brinda poder sobre sus cuerpos y mentes.

El enfoque de género podría ser una herramienta poderosísima que destruye conceptos y mitos alrededor de ellas, porque este enseña tanto a hombres como mujeres son seres en dignidad.

Si las personas empezamos por entender estos postulados del enfoque de género, probablemente tendríamos una sociedad respetuosa de los derechos humanos, sin más consideraciones que el respeto mutuo que implica ser hombres y mujeres libres. De esta manera el enfoque de género, quizás no solucione el problema de no acceder a la justicia para las mujeres víctimas de violencias basadas en género, pero quizás si contribuiría a los funcionarios a comprender que ninguna violencia puede excusarse, tolerarse o justificarse y que en tal consideración su deber es aplicar la ley establecida en el Estado Social de Derecho,

Por otro lado si existen medidas para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar es probable que el índice de violencia disminuya drásticamente, ahora bien, la forma en la que previene la violencia necesariamente tendría que tomar aspectos como la educación y campañas para fomentar en las personas un cambio en su cultura machista y agresiva, por una cultura ciudadana que estimule el dialogo, la tolerancia pero sobre todo que dedique esfuerzos a erradicar la cultura machista.

También es pertinente mencionar que la sensibilización es otro de los aspectos fundamentales que aporta el enfoque de género; cuando se comprende que ha existido por siglos una subvaloración de la mujer y del mundo de lo femenino, como lo explicaba Rueda, la indiferencia tiende a desaparecer. Con ello lo que se pretende explicar es que la sensibilización es un factor ausente en la vida de algunos funcionarios que desatienden o no cumplen con sus deberes legales y

constitucionales ocasionando que la mujer víctima de violencia intrafamiliar no pueda acceder a la justicia, y en este orden de ideas, el enfoque de género otorga a los funcionarios de las comisarías de familia una sensibilización de la cultura patriarcal, que afecta a las mujeres en su cotidianidad, pero que también les afecta a ellos, porque les priva de expresarse y los adoctrina para que adopten ciertos comportamientos acorde con el modelo. Aunque al respecto, Rueda explica, que la sensibilización no es una consecuencia que siempre pase cuando se aplica el enfoque o perspectiva de género, debido a una zona de confort en la que los hombres permanecen y han tenido a lo largo de la historia que les brinda ciertas comodidades, facilismos y privilegios que las mujeres no tienen, en ese sentido, cuando el modelo patriarcal y capitalista, agrega Zorio, brinda esto, difícilmente se querrá ceder en ellos para reconocerles a las mujeres el rol que tienen. Para ejemplificar la denominada zona de confort, a continuación se enumeran algunos privilegios de los cuales históricamente siempre ha gozado el hombre en perjuicio de las mujeres:

Privar a las mujeres del conocimiento, los saberes, el arte y la cultura. Situación típica de la Europa feudal y de sus posteriores siglos, al respecto Cristina Segura, en su estudio de la evolución de la educación para las mujeres señala:

La educación de las mujeres tiene como objeto prepararlas para que cumplan la función para la que la sociedad patriarcal las destina. Por ello la educación femenina consiste en que aprendan un comportamiento y unas destrezas. Las mujeres deben ser silenciosas, obedientes, modosas y laboriosas, junto a ello deben aprender todas las técnicas necesarias para atender a su familia y para tener abastecidas sus casas. La lectura y la escritura no eran necesarias para las mujeres y, por ello, fueron muy pocas las que accedieron a estos conocimientos. El Humanismo favoreció que algunas mujeres de la burguesía y la nobleza recibieran instrucción

y aprendieran a leer, a escribir y elaboraran una obra escrita original” (Graíño, 2007) “La Educación de las Mujeres en el Transito de la Edad Media a la Modernidad (Tesis de grado, Universidad Complutense de Madrid) Recuperado de [https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/73017/1/La educacion de las mujeres en el transi.pdf](https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/73017/1/La_educacion_de_las_mujeres_en_el_transi.pdf)

En el espectro laboral y salarial la brecha entre hombres y mujeres sigue siendo exageradamente amplia; según el DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) en el primer trimestre de 2018, en el total nacional, la tasa de desempleo para las mujeres fue 14,0%, en relación con los hombres que fue de 8,2% (DANE, 2018)

Por otro lado “en el caso de las asalariadas, aunque tienen más años de educación, perciben menores ingresos: ganan 7 por ciento menos al mes que sus pares hombres. En el grupo de trabajadores independientes, la brecha en ingresos es mucho mayor: las mujeres reciben al mes una entrada económica 35,8 por ciento inferior a la de los hombres”. Economía y Negocios (8 de marzo 2018) Estudio muestra que las asalariadas tienen más educación que sus pares masculinos” El Tiempo. Disponible en “<http://www.eltiempo.com/economia/sectores/cierre-de-la-brecha-salarial-entre-hombres-y-mujeres-en-colombia-190766>”

El control y administración de los bienes sigue siendo un asunto de hombres. El censo agropecuario que realizó el DANE (DANE, 2016) ofreció una “oportunidad de producir estadísticas de género sumamente valiosas para la toma de decisiones y el diseño de políticas que ayuden a cerrar brechas. El DANE... realizó un esfuerzo para integrar la perspectiva de género en el diseño de los cuestionarios, incluyendo preguntas desagregadas por sexo acerca de la toma de decisiones en la

unidad productiva, el trabajo agrícola y el acceso a maquinaria, crédito y asistencia técnica. Siguiendo las recomendaciones de la FAO⁴⁶ el último censo registra a todas las personas que participan en la toma de decisiones productivas dentro del hogar. Esto representa un avance ya que hasta ahora se censaba a un único productor por explotación, asumiendo que se trataba del hombre, lo cual ocultaba el rol productivo de las mujeres.

El censo arroja algunos indicadores que confirman las brechas de género en el sector agropecuario. Según los resultados... el 26% de las explotaciones manejadas por personas naturales está a cargo de mujeres, el 61,4% a cargo de hombres y el restante 12,6% es manejado de forma mixta.

Pero las explotaciones a cargo de mujeres son más pequeñas –predominan las de menos de 5 hectáreas – y con menor acceso a maquinaria, crédito y asistencia técnica” (OXFAM, 2017)

Continuando con la descripción de las pertinencias de enfoque de género, no se puede dejar de mencionar, que la revictimización que sufren las mujeres a costa (Mendieta, 2018) en las comisarías de familia son prevenibles si es aplicado la perspectiva de género. Al respecto la Corte Constitucional ha resaltado que:

Cuando las mujeres víctimas de violencia acuden a las autoridades públicas para el amparo de sus derechos, en repetidas ocasiones se produce una revictimización por parte de los operadores jurídicos, toda vez que la respuesta que espera por parte de estas autoridades no es satisfactoria y además, llegan a confirmar patrones de desigualdad, discriminación y violencia en contra de esta población. Tales circunstancias se presentan, al menos, de dos formas. La

⁴⁶ Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación

primera por la naturalización de la violencia contra la mujer, obviando la aplicación de enfoques de género en la lectura y solución de los casos y, la segunda, por la reproducción de estereotipos (Corte Constitucional. Sentencia T 590717. MP. Alberto Rojas Ríos)

Ahora, si se sostiene que esta perspectiva hace de los hombres y de las mujeres personas conscientes de sus realidades desiguales, no tendrían por qué abordar a las mujeres víctimas desde el desprecio y el cuestionamiento, sino desde la solidaridad, el altruismo; las funciones del servidor público no se concretan solo porque se le ordena, no hay que perder de vista que también son seres humanos con creencias e ideas (Rueda, 2018) en las que el Estado de Derecho debe trabajar para remover aquellas que no le permitan concretar y garantizar los derechos fundamentales de las y los asociados.

En este orden de ideas el funcionario público quien es el reflejo del Estado Social de Derecho debe actuar con las cualidades morales y éticas que la sociedad espera de él, un servicio público merece el cuidado celo y diligencia más oportuno, como quiera que sus acciones reflejan no solo su actividad propia sino también refleja una actividad institucional representativa del Estado, la sociedad en general espera de ellos un comportamiento digno y transparente porque se le está confiando no solamente recursos públicos, sino la salvaguarda de derechos fundamentales y eso tiene que ver, no solo con que no juzgue, señale o cuestione a la mujer víctima de violencia intrafamiliar o de cualquier otra violencia, sino que también tiene que ver con la eficiencia y eficacia con la que tramita el asunto, pasa igualmente por brindar una atención integral con el seguimiento al caso que se le asigne; así que cuando se plantea que el enfoque o al perspectiva de género contribuirá a superar las deficiencias y negligencias que existen en las y los funcionarios en las comisarías de familia se quiere con ello decir que se contribuirá a la debida diligencia con la que deben actuar en todo momento y lugar las y los

funcionarios públicos . Al respecto se estima menester citar algunas consideraciones que han tenido las altas cortes colombianas:

La aspiración general está dirigida a evitar el menoscabo del interés de todos los ciudadanos por conseguir una administración y servidores públicos probos, que cumplan sus funciones y no utilicen las instancias estatales para beneficio propio; en fin, se protege la sociedad también castigando conductas que atentan contra ella, cuando servidores públicos prevalidos de sus cargos quebrantan la pureza de la Administración pública en general, vulneran la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones y consiguen finalmente desviar los objetivos centrales que debe perseguir el ejercicio de la función pública en un Estado social y democrático de derecho, asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo, mediante la exaltación de la dignidad humana y la consolidación del bien común. (Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Sentencia 32672. MP. Julio Enrique Socha Salamanca)

Otra sentencia de la Corte Constitucional señala que:

La obligación de **diligencia debida** es un robustecimiento de los derechos de las víctimas (directas e indirectas), al acceso a la administración de justicia, al debido proceso, y a la reparación de la vulneración reconocidos en sin número de documentos internacionales (...)

La obligación de debida diligencia, como en varias ocasiones lo ha señalado la Corte tiene origen en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer convención de Bélem do Pará, especialmente en su artículo 7 literal b, en el que se lee: Los Estados Partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y en llevar a cabo lo siguiente: **actuar con la**

debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (Corte Constitucional. Sentencia SU659-15 MP. Alberto Rojas Ríos)

En una sentencia celebre de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se condenó a la República Federativa de Brasil, por la violencia perpetrada por Marco Antônio Heredia Viveiros contra la que era su esposa María da Penha Maia Fernandes. El agresor durante varios años la violentó en el marco de la relación; el episodio más grave la tuvo que ver con una tentativa de homicidio que dejó a la víctima en un estado paralítico. En la demanda se llamó la atención de la tolerancia del Estado por no haber tomado las medidas necesarias y suficientes para procesar al agresor

La impunidad que ha gozado y aún goza el agresor y ex esposo de la señora Fernandes es contraria a la obligación internacional voluntariamente adquirida por parte del Estado al ratificar la Convención de Belém do Pará. La falta de juzgamiento y condena del responsable en estas circunstancias constituye un acto de tolerancia por parte del Estado de la violencia que María da Penha sufrió, y esa omisión de los tribunales de justicia brasileños agrava las consecuencias directas de las agresiones por su ex-marido sufridas por la señora María da Penha Maia Fernandes. Es más, como ha sido demostrado previamente, esa tolerancia por los órganos del Estado no es exclusiva de este caso, sino una pauta sistemática. Es una tolerancia de todo el sistema, que no hace sino perpetuar las raíces y factores psicológicos, sociales e históricos que mantienen y alimentan la violencia contra la mujer.

56.Dado que esta violación contra María da Penha forma parte de un patrón general de negligencia y falta de efectividad del Estado para procesar y condenar a los agresores, considera la Comisión que no sólo se viola la obligación de procesar y condenar, sino también la de prevenir estas prácticas degradantes. **Esa ineffectividad judicial general y**

discriminatoria crea el ambiente que facilita la violencia doméstica, al no existir evidencias socialmente percibidas de la voluntad y efectividad del Estado como representante de la sociedad, para sancionar esos actos. (Corte Interamericana de Derechos Humanos (16 de abril de 2011) Caso 12051. Maria Da Penha Maia Fernandes vs. Brasil.) (Negrillas fuera de texto)

Así pues, lo argumentado anteriormente y en un ejercicio ilustrativo, indicado en cada ítem alguna referencia estadística que le permita al lector tener un contexto de las razones por la cuales la implementación del enfoque o perspectiva de género es necesaria y casi que una urgencia en las comisarías de familia para el ejercicio pleno de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar acceder a la justicia. Se llama igualmente la atención del lector con las citas de varias sentencias con la intención de que estas brinden un concepto más generoso de la importancia de la intervención del Estado en la violencia doméstica y en lo clave que resulta que las instituciones del Estado actúen de manera oportuna.

Y de acuerdo con la pregunta de investigación ¿Por qué es pertinente que las comisarías de familia apliquen el enfoque de género en las medidas de protección establecidas en la ley 1257 de 2008 como efectivo acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar? Se considera que se ha respondido a esta pregunta en un sentido general, sin embargo es menester brindar al lector algunos argumentos más, esta vez del orden específico, es decir, los argumentos sobre la pertinencia de aplicar el enfoque o perspectiva de género en cada una de las medidas de protección en relación al acceso de la justicia señaladas en la ley 1257 de 2008.

La ley 1257 de 2008 contempla en su artículo 17, 18 medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. En el numeral A, establece que:

A. “Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima, cuando su presencia constituye una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia” (Ley1257, 2008)

Que esta medida pueda materializarse tiene que ver con que en las comisarías de familia que consideren tener dificultades para hacer eficaces las medidas de protección para las mujeres agredidas puedan superen el enfoque familista, que se despojen de la creencia de que un hogar no es posible sin un hombre o que la mujer depende de la existencia, acompañamiento del hombre, requiere las comisarías de familia que se supere la idea histórica y culturalmente construida que la mujer debe tolerar cualquier abuso o violencia en su contra en favor de la preservación de la unidad familiar.

En relación con las medidas B y C:

B) “Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima, cuando a juicio del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que aquel perturbe, intimidé, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima o con los menores, cuya custodia provisional le haya sido adjudicada.

C). Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y personas discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar” (Ley1257, 2008)

Tendrían una mayor aplicabilidad en las comisarías de familia si a través del enfoque o perspectiva de género se comprende que las agresiones hacia las mujeres hacen parte de todo un ciclo de violencias que se detienen si no se ahorran todos los esfuerzos necesarios para erradicarlos de raíz, y estas dos medidas son el reflejo de esa búsqueda. Como se vio anteriormente la vivienda no es solo el lugar común donde las mujeres son agredidas, como lo informó el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses los espacios públicos son también un escenario de violencia.

Responde la medida del numeral B, a la frecuencia con que los hombres agreden a sus parejas en sus lugares públicos (17,15%), o habitación (79,21%) (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2016, pág. 221) Y en relación con el numeral C responde como bien lo señala el informe Segunda Medición Del Estudio Sobre Tolerancia Social E Institucional De Las Violencias Contra Las Mujeres de la Presidencia de la República al chantaje en el que se ven inmersas las mujeres cuando su pareja o el padre de los menores amenaza con quitárselos; la amenaza se acompaña de agresiones psicológicas como tildar a la pareja, o madre de loca, irresponsable, o incapaz para tener el cuidado y protección de los menores, igualmente se utiliza para que la mujer accede a seguir en convivencia con el agresor so pretexto de quedarse sin sus hijos.

Esta situación tendrían una mayor aplicabilidad en las comisarías de familia si a través del enfoque o perspectiva de género Esta situación compleja se podría evitar no solo por el funcionario que se encuentra en la comisaría de familia en el sentido de evitar la reproducción de más violencias contra la mujer que no solo le dejan secuelas a ella sino también a los niños y niñas, sino también para esas mujeres que desconociendo sus derechos y los derechos de sus hijos y que por miedo y hasta por vergüenza a la opinión social acceden al chantaje, permiten la amenaza y silencian la

violencia. El enfoque o perspectiva de género como herramienta de justiciabilidad para las comisarías de familia funciona en este sentido pero también cuando se le explica a las mujeres y niñas sus potenciales, capacidades y derechos, he ahí la potencialidad de la herramienta educativa y formativa del enfoque de género. Como explicaba, Pilar Rueda, el asunto es cultural y en esa medida es transformable.

En el numeral D y E:

D) “Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios a costa del agresor.

E) Si fuere necesario, se ordenará al agresor el pago de los gastos de orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima” (Ley 1257, 2008)

En el aparte “a costa del agresor” sigue observándose como el Estado sigue desconociendo su deber de contribuir a la eliminación de todas las formas de violencias contras mujeres, porque erradicar las violencias requiere – entre otros- tratamientos reeducativos y terapéuticos, tratamientos que debería garantizar el Estado y no la víctima o el agresor. Tal consideración debería estar clara si se tuviera presente el enfoque de género

En relación al apartado E y de acuerdo con Mesa por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, Ley 1257 de 2008 (2017) es frecuente encontrar un número significativo de casos de violencia intrafamiliar en estratos bajos,⁴⁷ lo que podría considerar que las obligaciones

⁴⁷ (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2016)

económicas que le pueda imponer la Ley 1257 al agresor queden en letra muerta y en el peor de los casos sin el acceso integral que requiere la víctima de acuerdo a la agresión que sufrió.

F y G, son quizás las medidas de protección que más son aplicadas en las comisarías de familia en los casos de violencia intrafamiliar porque son de corte policivo lo que implica de cierta manera facilidad en su aplicabilidad:

F) Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición la autoridad competente ordenará una protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo, si lo tuviere

G) Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima el acompañamiento a esta para su reingreso al lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la obligación de salir para proteger su seguridad (Ley 1257, 2008)

Sin embargo, y como se mencionó en el I capítulo, para las organizaciones de derechos humanos no basta con medidas policivas “si esta no va acompañada de medidas de protección en salud (atención psicológica y física frente a las secuelas de las violencias), en educación (prevención de la desescolarización, acceso a oferta educativa), en trabajo (acceso a ofertas laborales como condición para garantizar la independencia económica de las mujeres), o cualquiera otra medida necesaria para el cumplimiento de los objetivos de la ley” de no violencias contra las mujeres” (Mesa por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, Ley 1257 de 2008., pág. 48)

Por otro lado:

H) “Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas si los hubiere, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades, quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;

I) Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas, en caso de que estas sean indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio, la suspensión deberá ser motivada;

J) Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla;

K) Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades quienes podrán ratificar esta medida o modificarla

L) Prohibir, al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a registro, si tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente. Para este efecto, oficiará a las autoridades competentes. Esta medida será decretada por Autoridad Judicial” (Ley 1257,2008)

Son medidas que necesariamente deberían aplicarse como integralidad de cualquier otra medida, porque de nada sirve aplicar la sanción del numeral A) si de igual manera hay un régimen de

visitas que hay que acatar, u ordenar la medida del numeral B) si igualmente la víctima debe acudir a su agresor para la entrega de la pensión alimentaria. Así que lo recomendable es que estas medidas siempre sean aplicadas cuando se ordene alguna de los numerales anteriormente mencionados o cualquier otra si es que lo que se pretende es alejar a la víctima de su agresor.

De esta manera, aplicar el enfoque de género podría considerarse casi como un elemento de urgencia que quizás podría ayudar a que las medidas previamente citadas se apliquen de manera integral. La pertinencia del enfoque de género en las medidas de protección de la Ley 1258 de 2008 puede evitar igualmente la re victimización que algunas mujeres sufren en algunas comisarías de familia cuando denuncian algún tipo de violencia basada en género (Mendieta, 2018)

Así que se reitera que para los funcionarios en las comisarías que podrían tener fallas para la aplicación de las medidas de protección contempladas en la Ley 1257 y que tal circunstancia podría desencadenar una afectación a los derechos de las mujeres en el sentido de impedir su adecuado acceso a la justicia, el enfoque de género, como se vio a lo largo del capítulo, es una herramienta – dentro de muchas- que seguramente contribuiría a que la labor difícil pero dedicada en las comisarías de familia este acorde con los derechos humanos de las mujeres, contribuyendo para ellas a tener una vida libre de violencias.

III CAPITULO

Al momento de contrastar la pertinencia que tendría el enfoque o perspectiva de género en las comisarías de familia, con el marco legal vigente en relación con la Ley 1257 de 2008, se encuentra que la norma necesita contemplar varios aspectos, que dejó por fuera, para asegurar que el enfoque de género se estuviese utilizando como una herramienta de garantía para el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en las comisarías de familia. Para explicar detalladamente lo anterior, se abordará el ejercicio de contraste entre la pertinencia del enfoque de género y la Ley 1257. Véase:

Una de las deficiencias que la Ley 1257 presenta es que en las comisarías de familia “es común encontrar que no se identifican con la Ley 1257 y mucho menos apropia en su trabajo cotidiano el modelo integral de la misma. Es más habitual encontrar comisarios o comisarias que se consideren vinculados o concernidos por el Código de Infancia y Adolescencia, y en esa medida su actuación, disposición del trabajo, equipo de profesionales, etc., están más orientados a la legislación de infancia y adolescencia o de familia, pero no a la legislación especial para enfrentar la violencia contra las mujeres.” (Cooperación Sisma Mujer, 2016, pág. 63). Lo cual está en contravía de la misma 1257, que en su artículo 8, literal b, señala:

Artículo 8°. Derechos de las víctimas de Violencia:

b) Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica legal con carácter gratuito, **inmediato y especializado** desde el momento en que el hecho constitutivo de violencia se ponga en conocimiento de la autoridad. Se podrá ordenar que el agresor asuma los costos de esta atención y asistencia.

Corresponde al Estado garantizar este derecho realizando las acciones correspondientes frente al agresor y en todo caso garantizará la prestación de este servicio a través de la defensoría pública” (Negrillas fuera de texto)

Este aspecto, pone en el centro del análisis uno de las principales enunciados del enfoque de género, que es la sub-valoración de la mujer o el mundo femenino. Si en algunas comisarías de familia no podría estar contemplándose en el trabajo cotidiano la aplicabilidad de la ley que prevé eliminar todas las formas de violencia, sino que presuntamente podrían prevalecer la aplicación del código de infancia y adolescencia tal y como lo señala a través de su experiencia la Corporación Sisma Mujer, sería porque se podría estar desconociendo su carácter de obligatoriedad, es decir una especie de desobediencia por la ley colombiana que debe ser aplicada, pero de ello se hablará más adelante.

Si en las comisarías de familia acogieran la perspectiva de género, se reconocería que cada integrante de la familia es objeto de una vulnerabilidad diferente, y que no es apropiado tramitar las violencias que sufren las mujeres en un contexto familiar o social con la normativa que extiende sus garantías a la infancia y a la adolescencia, porque las causas de la violencia son distintas al igual que la manera en cómo se expresan, lo que requiere un abordaje diferente.

Para las mujeres se ha creado la ley 1257 de 2008 y se han suscrito diferentes tratados internacionales, precisamente porque el Estado reconoce que el fenómeno de la violencia basada en género es un asunto que merece de la atención y de todos los esfuerzos institucionales y sociales para

ser superado, por ello mismo las altas cortes de Colombia han reiterado infinidad de veces que las mujeres son un grupo poblacional vulnerable, al cual hay que destinar acciones afirmativas que pongan un freno definitivo a la cultura machista que azota al país.

En este orden de ideas cuando se contrasta que en las comisarías de familia es común encontrar que no se identifican con la Ley 1257 y mucho menos apropian en su trabajo cotidiano el modelo integral de la misma, (Cooperación Sisma Mujer, 2016, pág. 63). con el enfoque de género, no solo se puede develar las razones por las cuales tal aspecto funciona así, sino que también el enfoque de género ofrece la posibilidad de superarlo, al explicar que el mundo de lo femenino es un asunto público que debe ser atendido con la mayor prioridad y atención.

Por otro lado,

La competencia de las comisarías de familia reducida a órdenes de protección en el ámbito policivo, sin incorporar el conjunto más amplio de las medidas que esas autoridades están llamadas a ordenar en materia de salud, trabajo y educación como parte del modelo integral (Cooperación Sisma Mujer, 2016, pág. 63)

Violenta lo que la norma ha denominado como interpretación integral:

Artículo 6°. Principios. La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con los siguientes principios:

4. Integralidad. La atención a las mujeres víctimas de violencia comprenderá información, prevención, orientación, protección, sanción, reparación y estabilización

Como se explicó con anterioridad, el enfoque de género explica y devela la existencia de una subordinación histórica de las mujeres, subordinación la cual tiene diferentes matices, es decir, subordinación en el contexto familiar, sentimental, laboral etcétera, esta subordinación debe tratarse con múltiples herramientas (integralidad) que permitan erradicar esa causa permanente en la historia de violencias contra las mujeres; en ese sentido, si el enfoque de género devela la necesidad de comprender la existencia de esa subordinación multidimensional y pretende que en las diferentes circunstancias sociales se analice así, entonces sería lógico afirmar que la aplicación integral de las medidas de protección previstas en la ley serán de mejor asimilación para las y los funcionarios de las comisarías de familia, lo que facilitaría que su aplicación sea de la manera en que las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, que es el caso que nos ocupa, puedan ser beneficiarias y receptoras de lo que el ordenamiento jurídico establece, lo que permitiría que mujeres accedan de mejor manera a la justicia. En ese orden de ideas, la consecuencia natural de estas deficiencias en la Ley 1257 de 2008 es que existe un entendimiento restringido y poco garantista para los casos de incumplimiento y para el seguimiento de las medidas de protección (Cooperación Sisma Mujer, 2016, pág. 63)

Igualmente una de los aspectos preocupantes de la ley 1257 es el re nombrado enfoque familista. “Las mujeres continúan siendo sometidas a prácticas institucionales en algunas comisarías alineadas con la visión patriarcal de subordinación de la mujer a un orden familiar que debe ser preservado y protegido” (Cooperación Sisma Mujer, 2016) y ello choca con varios postulados de la norma:

Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito

público como en el privado, el ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización (Ley1257, 2008)

- Artículo 6°. Principios.

La interpretación y aplicación de esta ley se hará de conformidad con los siguientes principios: 3. Principio de Corresponsabilidad. La sociedad y la Familia son responsables de respetar los derechos de las mujeres y de contribuir a la eliminación de la violencia contra ellas. El Estado es responsable de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres (Ley1257, 2008)

Artículo 7°. Derechos de las Mujeres. Además de otros derechos reconocidos en la ley o en tratados y convenios internacionales debidamente ratificados, las mujeres tienen derecho a una vida digna, a la integridad física, sexual y psicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles y degradantes, a la igualdad real y efectiva, a no ser sometidas a forma alguna de discriminación, a la libertad y autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la salud, a la salud sexual y reproductiva y a la seguridad personal (Ley1257, 2008)

Entre otros. Luego por lo cual, el enfoque familista que se practica en algunas comisarías de familia, es en sí mismo una forma de re victimizar a las mujeres que se llenan de valor para denunciar, sometiéndolas al régimen de creencias personales de los funcionarios que trabajan allí en las comisarías de familia; niegan la posibilidad de que la norma se haga efectiva porque se

sobreponen los estereotipos culturales machistas de los funcionarios en perjuicio de la vida misma de la víctima. Debe tenerse en cuenta que cuando una mujer es agredida y denuncia lo hace con la convicción de encontrar ayuda en las instituciones responsables y representativas del Estado Social de Derecho, lo hace en su profunda convicción de encontrar funcionarios sabedores del tema que le puedan orientar, aliviar y brindar las medidas que sean necesarias para frenar la violencia que de no frenarse podría desencadenar hasta en su propia muerte, y si ello es así la y el funcionario no tendrían por qué aislar a la mujer de ejercer sus derechos fundamentales que la Carta Maga le reconoce a ella ya todos los asociados, so pretexto querer resguardar la unidad familiar y promover un ambiente de impunidad respecto de las violencias que sufren las mujeres en su contexto familiar.

Y es que precisamente hay que aclarar que la Ley 1257 no es una norma haya nacido en el ordenamiento jurídico colombiano para preservar la unidad familiar aun así exista violencia en su interior, no, esta norma la creó el Congreso Colombiano en la idea de resguardar, proteger, y ayudar a la mujer de ese contexto familiar perjudicial para ella y como se mencionó con anterioridad, perjudicial hasta para los niños y niñas que se ven sin más salida que crecer en un ambiente hostil, carente del amor y de la paz que necesita su crianza y desarrollo emocional.

De manera que, el enfoque familista es uno de los aspectos que más daño le puede ocasionar a la aplicabilidad misma de la norma, pero también a las mujeres porque las re victimiza, estimula la pérdida de confianza en la institucionalidad (que de por sí ya es bien débil) y propicia o alienta un ambiente de impunidad, como quera que envía un mensaje a la sociedad colombiana de inactividad administrativa y judicial respecto de los casos de violencia basada en género.

Así las cosas, se ha de precisar que el enfoque o perspectiva de género en la medida que rompe con los estereotipos (porque los visibiliza, los pone en evidencia) contruidos culturalmente por la sociedad, rompe entonces con la visión que permite la perpetuación del enfoque familista en las comisarías de familia, porque dotará a las y los funcionarios de la concientización necesaria para entender que bajo ninguna circunstancia el derecho de un ser humano puede ser mediado por las creencias, ideas o estereotipos fijados por un modelo patriarcal, igualmente el enfoque de género hará saber a quienes no que las mujeres al ser un sujeto de la población en condición de vulnerabilidad, deben ser atendidas con las medidas que se necesiten para contrarrestar tal fenómeno.

Otro aspecto clave que la norma que no previó fue la violencia que puede ser ejercida por las ex parejas. Ello tiene que ver con lo que la experta Sandra Zorio explicaba, y es el concepto unidimensional que se tiene de *familia*, y es que la ley no contempló que los noviazgos o las relaciones que se construyen únicamente alrededor del sexo, son también formas actuales en las que los seres humanos deciden relacionarse y en la cuales también puede existir violencia; estas relaciones no son previstas por la Ley 1257, dejando a un buen grupo de mujeres absolutamente desprotegidas como lo señalaba Sandra. ¿Pero entonces si la violencia que puede mediar en estas relaciones no es catalogada como desencadenada en un contexto familiar, lo que significa que tampoco puede ser llamada violencia intrafamiliar, como entonces puede llamarse esta violencia? La Corte Suprema de Justicia la ha catalogado como lesiones personales, la aborda como un fenómeno de violencia no basada en género sino como un comportamiento social inapropiado penalmente hablando y por ello sancionable a través del tipo penal. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal (7 de junio de 2017) Sentencia 48047. [MP. Luis Antonio Hernández Barbosa]

Así las cosas, cuando el noviazgo, por ejemplo, se termina, y el hombre en su creencia de poder obligar a la mujer a continuar una relación sentimental con él, o creyendo que la mujer es de su propiedad y se obsesiona con ella, o creyendo que tiene alguna superioridad respecto de ella y decide agredirla físicamente, , esta situación es violencia basada en género, y a pesar de que no se ejerce dentro del contexto familiar, por ya haber terminado la relación, debe ser del conocimiento de la Ley 1257 de 2008 que como en su artículo primero expone: su objetivo es garantizar a las mujeres una vida libre de violencias (Ley1257, 2008).

Esta ausencia de reconocimiento, se debe a una interpretación equivocada de la norma y a un concepto de familia o de unidad familiar que no está acorde con las nuevas y dinámicas formas que las personas se relacionan hoy, como sostener relaciones sexuales libres, sin la intermediación de una institución que la defina, como compromiso noviazgo, o matrimonio, formas diversas de expresión del amor como el poliamor⁴⁸, en las que también hay formas de violencia basada en género. Esto tiene que ver precisamente con que es “una definición de violencia intrafamiliar que no se ajusta a la definición de violencia contra la mujer prevista en la ley y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y es incompatible con la legislación penal vigente (Cooperación Sisma Mujer, 2016, pág. 63) y por supuesto que esta ausencia de reconocimiento se debe a la ausencia del enfoque de género, que debería estar presente en las comisarías de familia y en general en todas las instituciones del Estado.

⁴⁸ “El poliamor es la tendencia, preferencia o hábito de relacionarse amorosamente con más de una persona a la vez y en un contexto en el que todas las personas involucradas son conscientes de esta situación. El poliamor, por tanto, no tiene a la pareja como unidad fundamental en la que las personas intercambian conductas afectivas e íntimas” Psicología y mente (2019) El Poliamor. Disponible en <https://psicologiaymente.com/pareja/poliamor-relaciones-poliamorosas>

SOBRE LAS NECESIDADES DEL LA LEY 1257 DE 2008, COMO ASPECTO INNOVADOR & PROPOSITIVO.

De acuerdo con el contraste anterior, a continuación se exponen algunas sugerencias respecto de lo que le haría falta a la Ley 1257 de 2008 para que el enfoque de género esté presente al momento en el que las comisarías de familia deban aplicar las medidas de protección para salvaguarda de las mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar; luego de ello, y en acápite aparte, se argumentará el porqué de la conveniencia de estas sugerencias de la mano de las valoraciones y explicaciones de las expertas.

Las sugerencias están clasificadas en 4 componentes: (i) Formación; (ii) Instrumentos guía; (iii) Evaluación; (iv) Medidas complementarias. Valga aclarar que cada una de las siguientes sugerencias se retoma con base en las claves del marco teórico. Las medidas de Formación son varias, la primera de ellas es que la norma debe tener como mandato para las comisarías adelantar espacios de formación y capacitación en temas de *mujer, equidad y género*.

De manera que los imaginarios contruidos en los funcionarios o servidores públicos, respecto de lo que en realidad significa el enfoque de género deben ser desmantelados, ofrecer el concepto académico, lo que simbólicamente ofrece el enfoque de género como categoría de análisis pero también de praxis es muy importante para que en las comisarías de familia se acoja la norma de mejor manera, se implemente con la rigurosidad que demanda.

Ahora bien, dentro del componente de Formación, también se sugiere generar espacios para la sensibilización de las y los funcionarios en las comisarías de familia, de tal suerte que la violencia

intrafamiliar no se normalice para ellos. En la medida en que los y las funcionarias están expuestos todos los días a escenarios en los que deben atender situaciones de violencia que son complejas, tienden a tramitar el caso como un proceso más, se deja de lado la historia humana detrás del papeleo y de las indicaciones administrativas que debe seguir la víctima; en este sentido la idea sería que en las comisarías de familia se asimile la violencia intrafamiliar como un cáncer para la sociedad colombiana, que se comprenda que las mujeres que llegan a las comisarías en busca de ayuda son personas en alta situación de vulnerabilidad y que lo que se haga por ella en la comisaría dependerá su vida, integridad y también la de sus hijos si es que los tuviere.

La sensibilización en los y las funcionarios en las comisarías de familia es uno de los retos más importantes para que el enfoque de género exista a la hora de ordenar las medidas de protección para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Al respecto *“La Guía Metodológica para la Sensibilización en Género: Una herramienta didáctica para la capacitación en la administración pública*, que se implementa en México y la cual se desarrolla en tres líneas temáticas:

- (i) La primera es perspectiva de género, que se organiza en torno a tres temas. El primero es una revisión de la categoría de género y sus alcances analíticos, diferenciando tanto el proceso de adjudicación del género en el plano personal como su construcción social, mediante el concurso de diversas instituciones y procesos sociales. El segundo, explicita qué se entiende por perspectiva de género, poniendo especial énfasis en los aspectos básicos de su aplicación en las políticas públicas. El tercero consiste en una revisión de los prejuicios y resistencias en torno a este enfoque, al tiempo que propone vías de participación para el cambio institucional que supone la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer del Estado. El volumen Derechos humanos de las mujeres destaca la importancia del tema y de la legislación que protege estos derechos,

finalizando con una somera revisión del proceso histórico que ha seguido la construcción de los derechos en nuestro país. El capítulo concluye con una reflexión sobre el empoderamiento de las mujeres como una vía para garantizar el ejercicio y protección de sus derechos humanos. Finalmente, el volumen La violencia contra las mujeres: un obstáculo crítico para la igualdad de género, ofrece una visión general de la complejidad del problema como objeto de política pública, las diferentes construcciones conceptuales de la violencia contra las mujeres y la valiosa participación de las organizaciones de la sociedad civil (Instituto Nacional de las Mujeres, 2008, págs. 7,8)

Este Instituto que fue creado entre los años 1987 y 1992 por el Estado Mexicano explica que la sensibilización:

Gira en torno a la importancia de comprender qué es el género y por qué se habla de una perspectiva que trastoca los equilibrios de poder entre hombres y mujeres, y conocer los lineamientos que señala la doctrina internacional de los derechos humanos respecto a las responsabilidades del Estado para proteger y garantizar el pleno de ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, quienes sufren en mayor medida las consecuencias de su invisibilización. El tema de la violencia de género constituye un campo de singular importancia para la sensibilización conforme permite reconocerla como un síntoma de la desigualdad entre mujeres y hombres y como un área estratégica para la intervención del Estado (Instituto Nacional de las Mujeres, 2008, pág. 7)

En este sentido por ello la sensibilización debe ser uno de los aspectos que necesita ordenar la misma Ley 1257 de 2008 para materializar en enfoque de género en las medidas de protección consagradas en el artículo 17 de la norma.

En este punto de las sugerencias, se debe aclarar que la ley 1257 de 2008 en su artículo 9 numeral 2, contempló: Ejecutará programas de formación para los servidores públicos que garanticen la adecuada prevención, protección y atención a las mujeres.

Sin embargo, la norma no contempló la posibilidad de formar a los funcionarios en clave de perspectiva de género, que es lo que se sugiere en este capítulo, igualmente no contempló la formación en sensibilización para las y los funcionarios. En ese sentido es absolutamente diferente que la norma propenda por ejecutar programas de formación que como resultado garanticen a las mujeres una buena atención, prevenir las violencias y protegerlas, a que la norma propenda por ejecutar programas formativos para que los funcionarios comprendan en que consiste el *enfoque de género* y para que se *sensibilicen*. Y lo harían porque probablemente al abordar el enfoque de género podrán ser (lo que no lo son) conscientes de una cotidianidad violenta que viven las mujeres,

Continuando con las sugerencias, pero esta vez con el componente de Instrumentos, allí se sugiere contemplar en el mandato legal elaborar para las comisarías de familia protocolos de atención con perspectiva de género para las mujeres víctimas de violencia basada en género, y en concreto de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que es el acaso que se ocupa.

Este tipo de medidas ya han sido adelantadas suficientemente en México, allí existe el *Protocolo para la atención de usuarias y víctimas en los Centros de Justicia para las Mujeres en*

México, que se crea de acuerdo con la promulgación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que se expidió “como una forma de implementar acciones para combatir la violencia contra las mujeres; en esta ley se contiene la obligación de crear modelos de atención para garantizar a las mujeres su seguridad y el goce de sus derechos humanos” (Centro de Justicia para las Mujeres, 2012, pág. 10) sin embargo la creación de modelos de atención como lo ordenó la norma en el 2007 (años de su expedición) solo fue posible hasta el año 2012 con el protocolo mencionado.

De acuerdo con el Centro de Justicia para las Mujeres, deberían tenerse en cuenta 10 principios claves dentro de todo protocolo de atención para mujeres, estos son:

- “La atención debe ser expedita
- El trato ser empático
- La atención y actuación se hará de conformidad con las leyes
- La atención y actuación se fundamentará en el respeto a los derechos humanos
- La atención y actuación se deberá regir por el principio de debida diligencia
- La atención y actuación estará basada en el principio pro persona
- La atención será deontológica
- La actuación se basará en la privacidad y la confidencialidad del caso
- La atención será individualizada, gratuita y efectiva”

En este orden de ideas la premisa de atención con perspectiva de género no es solamente dimensionar las relaciones de poder entre hombre y mujeres como causa de las diversas violencias contra la mujer, sino que también comprende como lo explica el Centro de Justicia para Mujeres un respeto por la dignidad de la persona a la que se le atiende y la que espera obtener soluciones que frenen su situación de vulnerabilidad; el protocolo de atención integral para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar debe responder al respeto por los derechos humanos de las mujeres, por el respeto de su derecho a no conciliar con el agresor de acuerdo con la ley colombiana y comprende igualmente el despojo de prejuicios machistas que tienen las y los funcionarios para atender a las mujeres, para que frases como:

- ¿Y usted que hizo para que le pegaran?
- ¿Y usted por qué lo provocó?
- ¡Pero que hacia sola a esa hora!
- ¿Está segura de querer denunciar?, ¿Qué será de sus hijos si usted se separa?

Pero usted debería tener presente que vestirse así, es provocador para cualquier hombre.

- ¡Si es la primera vez que abusa de usted, debería perdonarlo, y procurar que su familia no se acabe por eso! (Mendieta, 2018)

No se vuelvan a escuchar en las comisarías de familia y para estas mismas frases no vuelvan a re victimizar a las mujeres.

Otra de las sugerencias respecto de qué es lo que necesita o le hace falta a la ley 1257 de 2008 es la orden normativa de crear manuales de capacitación para la aplicación de los tratados

internacionales de los derechos de la mujer. El desarrollo de esta idea de crear estos manuales ha sido desarrollada por Marcela Virginia Rodríguez quien es un referente de feminismo en la Argentina, al respecto Paola Bergallo y Aluminé Moreno en el libro *Hacia Políticas Judiciales de Género* la describen como la figura ineludible para pensar la dinámica de políticas judiciales de género en la Argentina, pues es una pionera feminista multifacética que implementó iniciativas en distintos campos: político, académico, enseñanza del Derecho, movimientos feministas nacional y regional, atención de víctimas de violencia de género, litigio y organización de equipos de trabajo con colegas. Es una de las abogadas que ha patrocinado acciones judiciales ante la violación del principio de igualdad real y no discriminación entre los géneros. (Bergallo, Paola; Moreno, Aluminé, 2017, pág. 72)

Estos manuales además de exponer los diferentes tratados internacionales que ha suscrito Colombia en defensa y protección de los derechos de las mujeres, sería una herramienta muy práctica, sencilla y útil para que los funcionarios trasverzalicen las disposiciones contenidas en los tratados en las decisiones de ordenar las medidas de protección contempladas en la ley 1257 de 2008. Estos manuales son también una materialización del cumplimiento del *principio de control de convencionalidad*.

Este control de convencionalidad, con dicha denominación, aparece por primera vez en la jurisprudencia contenciosa de la Corte IDH en el caso Almonacid Arellano vs. Chile. Con anterioridad, el juez Sergio García Ramírez, en sus votos de los casos Myrna Mack y Tibi, había realizado una aproximación conceptual al control de convencionalidad que se realiza en la sede interamericana y en el ámbito interno de los Estados, pero en Almonacid Arellano la Corte precisa

sus principales elementos. Caso Almonacid Arellano y otros Vs. Chile. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006.

La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una especie de control de convencionalidad entre las normas jurídicas internas que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Interamericana, intérprete última de la Convención Americana. En el mismo sentido: Caso La Cantuta Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de noviembre de 2006, párr.1732. (NdelE: Destacado no está en el texto original) (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2012).

Al respecto la ley 1257 de 2008 en su artículo 9, numeral 3 contempló:

3. Implementará en los ámbitos mencionados las recomendaciones de los organismos internacionales, en materia de Derechos Humanos de las mujeres

Sea menester aclarar que, la norma esta ordenando implementar las recomendaciones de organismos internacionales en relación con los derechos de las mujeres, pero no está ordenando redactar un manual que sea útil como herramienta practica para las y los funcionarios de las

comisarías de familia, en el sentido de capacitarles en la aplicación concreta de las disposiciones normativas internacionales que contemplan los diferentes derechos de las mujeres y las cuales son de obligatorio cumplimiento por todas las instituciones del Estado colombiano.

Por otro lado, las sugerencias en relación con el componente (iv) Evaluación, consiste en adelantar dos medidas, la primera en relación con la orden normativa de adelantar evaluaciones periódicas de los y las funcionarias de las comisarías de familia que serían los responsables que atender y garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.

Esta evaluación debe comprender varios aspectos, entre ellos la crítica y la autocrítica de los funcionarios, como un ejercicio democrático, participativo y colectivo que permita un espacio entre los funcionarios para que con la sinceridad del caso se dialogue colectivamente las fallas y aciertos que han tenido en el desarrollo de determinado lapso de tiempo; pero también debe comprender la evaluación la valoración de un funcionario (a) experto en el tema de mujer equidad y género que será de carácter permanente en las comisarías, para que valore si los funcionarios están acorde en el cumplimiento de los postulados de la norma jurídica y acorde con los desarrollo internacionales que son de carácter vinculante y obligatorios para Colombia.

Igualmente este componente de Evaluación, sugiere que la norma debe expresamente contemplar medidas de carácter sancionatorio, si se identifica que algún funcionario de acuerdo con la evaluación ha impedido la eficaz y eficiente aplicación de la norma, es decir, la ley 1257 de 2008; la norma debería contemplar un mandato en el que se exhorte a las comisarías de familia para que de acuerdo con su reglamento interno se hagan las adecuaciones necesarias para que se considere como una falta grave no aplicar el enfoque de género a la hora de ordenar las medidas de protección de

contempladas en la 1257. Igualmente se sugiere que la norma debería incorporar un agravante dentro del código único disciplinario para aquel funcionario que negó el derecho a una mujer en condición de víctima de violencia intrafamiliar.

Por último, dentro del componente de Medidas Complementarias, la ley 1257 debería haber previsto un sistema estadístico nacional que permita recoger todas las denuncias que hacen las mujeres por las diferentes violencias que sufren y recoger las medidas de protección que se le ordenó en cada caso. La ausencia de este sistema ha sido varias veces denunciado por las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, en especial la organización Sisma Mujer quien señaló:

Se suma a lo anterior que, como este Ministerio lo admitiera en 2014,⁴⁹ no existe un sistema de registro nacional unificado que permita contar con información medible, cuantitativa ni cualitativa, sobre las medidas de protección impartidas por cada comisaría de familia. Solamente algunas administraciones distritales han implementado una base de datos propia. De manera que la dispersión de información y la ausencia de control y seguimiento real sobre la actuación de las comisarías, los casos que estas atienden y las medidas de protección que imparten, es la situación invariable en todo el tiempo de vigencia de la Ley 1257. Es de resaltar, en tal escenario, la omisión de cumplimiento por parte del Ministerio de Defensa (de la obligación de diseñar el registro nacional de información sobre medidas de protección y apoyos policivos (Cooperación Sisma Mujer, 2016, págs. 63,64)

⁴⁹ En la “respuesta remitida a la Corporación Sisma Mujer con ocasión de la correlativa solicitud de información” (Cooperación Sisma Mujer, 2016)

La sugerencia de implementar este sistema, en sí mismo no es un desarrollo para el enfoque de género, pero sí contribuiría a dimensionar la problemática de las violencias contra las mujeres y por ello está dentro del componente complementario, al igual que la siguiente medida: disponer de personal especializado, que deberá estar de manera permanente en las comisarías de familia, no solo para hacer una labor de guía y apoyo para los funcionarios públicos, sino porque deberá ser la persona responsable de adelantar las evaluaciones periódicas a los servidores. Esta persona propenderá porque en las comisarías de familia se despojen las actitudes machistas y los estereotipos de la cultura patriarcal, en cabeza de ésta persona deberá recaer la responsabilidad de generar recomendaciones personalizadas para los funcionarios a cuenta de que estos los tengan en cuenta, ello se enmarca en un ejercicio de reconocimiento de las falencias individuales y colectivas y que en últimas impiden que las mujeres puedan ejercer una vida libre de violencias.

Ahora bien, esta última sugerencia no sería más que el cumplimiento del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), creado en el 2004 y el cual “consistente en una metodología de evaluación multilateral sistemática y permanente, fundamentada en un foro de intercambio y cooperación técnica entre los Estados Parte de la Convención y un Comité de Expertas/os”. Este mecanismo es un sistema de evaluación y asesoramiento que se orienta a promover la implementación de la Convención por parte de los países signatarios. Gran parte de las recomendaciones de las expertas se refieren al acceso a la justicia y a los servicios especializados de atención a las mujeres que han sido afectadas por diversos modos de violencia. De esta forma, se aconseja a los Estados Parte arbitrar medios para garantizar la atención integral de las mujeres víctimas; disponer personal especializado y protocolos de atención; garantizar la accesibilidad de acciones y servicios a través de patrocinio jurídico gratuito y medidas de protección efectivas; disponer medidas para efectivizar y garantizar los derechos reconocidos por ley. (Comisión

Interamericana de Mujeres. Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará MESECVI, 2015, *Segundo Informe de Seguimiento a la Implementación de las Recomendaciones del Comité de Expertas del MESECVI*)

El sistema interamericano de derechos humanos también fue haciendo aportes importantes que influyeron en la creación de nuevos dispositivos encargados de promover un enfoque de género en los sistemas de justicia.⁴⁹ La creación de la Relatoría de la Mujer en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) fue un primer paso relevante en este sentido.” (Bergallo, Paola; Moreno, Aluminé, 2017, págs. 54,55).

ARGUMENTACIÓN LÓGICA DE LA CONVENIENCIA DE APLICAR EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LAS COMISARÍAS DE FAMILIA & CORROBORACIÓN CUALITATIVA

La corroboración cualitativa tiene que ver con exponer los argumentos de las expertas entrevistadas, que soportan con las sugerencias para la ley 1257 de 2008, expuestas anteriormente. Al respecto de las medidas complementarias Pilar Rueda en su entrevista señala precisamente la necesidad de contemplar las sanciones para funcionarios públicos que se niegan a garantizar los derechos de las mujeres. Ella argumenta esta medida como una medida que frene lo que ella tilda como la posible consecución de la muerte de la mujer si se le niega el acceso a la justicia a través de las medidas de protección por cuenta de las ideas y creencias, ella literalmente recalca que: “hay que desarrollar procesos de capacitación y formación pero creo que hacen falta procesos de sanciones disciplinarias, así como se investiga el peculado, así debería ser para el funcionario que se niega un

derecho a la mujer y que incluso pone en riesgo su vida, en ello hay una responsabilidad muy grande más allá de las creencias e ideas del funcionario, las ideas y creencias de los funcionarios no son la regla para todas las mujeres, son las propias. Como funcionarios tiene la obligación de garantizar los derechos a las mujeres incluso por encima de mis creencias. Por eso no hay derechos absolutos y existe la ponderación de derechos... Es el mundo privado donde empieza lo que a mi modo de ver explica más que el enfoque de género la inoperancia de la justicia y es que las y los operadores de justicia son personas que tienen ideas y creencias y el mayor obstáculo para los derechos de las mujeres son las ideas y creencias de todo el mundo las de ella, las de su familia, hijos también las de quien están desde el lado de la institucionalidad supuestamente garantizando derechos y esa subvaloración tiene que ver con que las mujeres siguen siendo asumidas como parte del mundo privado y como la máquina de la vida que reproduce biológicamente” (Rueda, 2018).

El tema de la sensibilización es abordado por la experta Claudia Mendieta (2018) quien para explicar lo que significa que los funcionarios de las comisarías de familia no estén sensibilizados con el tema, puso de presente el informe de la Alta Consejería para la Mujer de la Presidencia de la República, estudio en cual se develaban los imaginarios machistas y las tolerancias que existen en el mundo de las comisarías de familia, para demostrar que esos imaginarios y que esas tolerancias a las violencias son altamente perjudiciales para las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia⁵⁰.

Este informe, el cual fue abordado y puesto al descubierto con estadísticas y cifras para la y el lector en el segundo capítulo, es la herramienta científica más precisa para demostrar que la formación en sensibilización no es un discurso retorico para llenar de argumentos innecesarios la pertinencia del enfoque de género en las comisarías de familia y en concreto en las órdenes para

⁵⁰ Ver anexo de transcripciones de la entrevista

implementar las medidas de protección para mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, no, es en verdad una herramienta transformadora poderosísima que toca las fibras más profundas del ser humano, lo hace consiente de su entorno, lo hace crítico y critica de su realidad y le invita a transfórmala profundamente.

Y el tema de formación es señalado por la entrevistada Sandra Zorio, aunque ella lo aborda de una manera mucho más amplia, ella expone que esa formación debe realizarse no solo a los funcionarios de las comisarías, sino también a las usuarias del sistema de justicia en las que se les pueda explicar sus derechos, sus capacidades, y ayudarles a empoderarlas, igualmente destaca la importancia de desarrollar todo un trabajo en terreno, sobre los imaginarios contruidos socialmente para derrumbarlos. (Zorio, 2018, pág. 4)

Por último y para ir concluyendo, en relación con argumentar lógicamente la conveniencia del enfoque de género en las comisarías de familia, ello podría simplificarse a una frase: es conveniente porque les permitirá garantizar el acceso a la justicia.

Y es que el acceso a la justicia va mucho más allá de garantizar a las personas la posibilidad de acudir mediante un recurso ante los órganos encargados de aplicar normas jurídicas. Implica que el cumplimiento de la ley, a través de la actividad del Estado, sea eficiente y genere seguridad jurídica. Lo anterior se manifiesta en el derecho que tiene toda persona, independientemente de su condición económica, social, política, de género o de cualquier otra índole, de acudir ante las autoridades competentes —ministeriales, judiciales o administrativas— para obtener la protección de sus derechos. (Centro de Justicia para las Mujeres, 2012, pág. 21)

El acceso a la justicia tiene tres aspectos: “el acceso propiamente dicho, es decir, llegar al sistema judicial. En segundo lugar, la posibilidad de lograr un buen servicio de justicia, es decir, que se asegure no sólo el acceder al sistema, sino que éste brinde un pronunciamiento judicial justo en un tiempo prudencial. El último aspecto se refiere al conocimiento de los derechos de las personas y de los medios para ejercerlos y reconocerlos” (Centro de Justicia para las Mujeres, 2012, pág. 21)

En este sentido a las comisarías de familia, y al sistema judicial en general, les convendría implementar en enfoque de género porque cumplirían con la razón de ser de un Estado Social y Democrático de Derecho, y porque les permitiría ser más eficaces para prevenir las violencias y en concreto la violencia intrafamiliar contra las mujeres, además de ello “al cimentar la equidad como un componente básico de las relaciones sociales, se consolida la democracia y se crean condiciones reales de buen ejercicio de la ciudadanía. Algunos motivos derivados de esa razón principal son los siguientes

- Permite dar visibilidad a la problemática derivada de la desigualdad entre los géneros y denunciar las consecuencias de la cultura dominante, edificada sobre la marginación y exclusión de la mitad de los habitantes de cualquier sociedad.
- Al sacar del aislamiento la temática y colocarla en el centro de las discusiones, permite generar políticas públicas específicas, además de modificar los patrones culturales, sociales y políticos existentes.
- En este proceso de concienciación se hace más eficiente el uso de recursos públicos, la realización de campañas y la función pública en general, por lo que involucra nuevos actores.
- Fomenta mejores relaciones en todos los ámbitos de convivencia humana: familiar, escolar, laboral, comunitario, ciudadano etcétera.

- Fortalece la democracia porque crea y amplía canales de interlocución con la sociedad civil
- Construye ciudadanía al consolidar una cultura de apropiación y ejercicio de derechos humanos por parte de la totalidad de la población y no solo de hombres. En síntesis... la perspectiva de género es una estrategia para mejorar la calidad de vida de todas las personas en todas las esferas del quehacer cotidiano” (Serret Bravo, 2008).

El mundo de violencias que sufren las mujeres, lo sufren en silencio, pero a la vez a gritos ensordecedores porque es una realidad que todos conocen, pero que todos ocultan; es un mundo al que le gusta vivir en las mazmorras de la impunidad, es un mundo que le corta las alas de libertad a las niñas y a las mujeres. La violencia intrafamiliar que se gesta contra la mujer por consideración de una superioridad casi que divina, que se gesta en medio de la ignorancia absoluta, y de la barbaridad, no puede ser más que el reflejo de la degradación del individuo que extiende sus ansias de esclavitud a través de la fuerza.

Las mujeres que a diario deben sufrir los golpes porque deciden no acatar los roles que la sociedad patriarcal les impuso, son las mujeres que el Estado colombiano esta llamado atender y salvaguardar, no hacerlo, implica una tolerancia con la violencia contra la mujer, implica un aliento para seguir promoviendo la violencia contra ellas e implica la caminata hacia un Estado fallido. Pero si el Estado a través de las comisarías de familia no responde como debe ante el fenómeno social que representa la violencia intrafamiliar, ¿Qué les espera a las mujeres?

Las calles, la unión, la sororidad, la continuidad de una lucha incansable por los derechos de las mujeres, por ocupar un lugar en dignidad en la tierra, a la par de los hombres; nos espera un

camino largo y difícil por concretar nuestras reivindicaciones y lo haremos en memoria de todas las que ofrendaron su vida por ello, lo haremos por nuestras madres, hermanas, hijas y compañeras.

“Solo después de que las mujeres empiezan a sentirse en esta tierra como en su casa, se ve aparecer una Rosa Luxemburgo, una Madame Curie. Ellas demuestran deslumbrantemente que no es la inferioridad de las mujeres lo que ha determinado su insignificancia”– Simone de Beauvoir.

CONCLUSIONES

Las comisarías de familia son la institución estatal responsable (entre otras) para recibir a las mujeres que la sufren, atenderlas y protegerlas. Al respecto el Estado colombiano emitió la Ley 1257 de 2008 con el objetivo de garantizar a las mujeres una vida libre de violencias, en esta ley se señalaron 18 medidas taxativas de protección para la mujer víctima de violencia intrafamiliar y una medida innominada que brinda la posibilidad al servidor público de ordenar la medida que estime pertinente para la salvaguarda de la vida e integralidad de esa mujer. Sin embargo, estas medidas que están contempladas en el artículo 17 de la ley 1257 de 2008 no son aplicadas de manera integral por las comisarías de familia vulnerando así el derecho fundamental de acceso a la justicia.

El derecho de acceder a la justicia, es un derecho universalmente protegido, Colombia lo contempla como un derecho fundamental y ha suscrito diversos instrumentos internacionales que propenden por la garantía de este derecho. Se destaca la Convención Belem Do Pará, que marcó un hito histórico en la lucha por las reivindicaciones de las mujeres, que fue romper con el ideario de que la violencia intrafamiliar contra la mujer es un asunto privado en el que el Estado no debe intervenir, la Belem Do Pará rompe con ello ordenando a los Estados partes tomar todas las medidas necesarias para prevenir y sancionar este tipo de violencia.

En este sentido, en algunas comisarías de familia es posible que no se pueda acceder de manera adecuada al derecho fundamental al acceso a la justicia a las mujeres que son víctimas de la violencia intrafamiliar al no aplicar la norma como se esperara, debido a varios factores, entre los que se destaca la presencia de un enfoque familista, la no interiorización de la norma, y por supuesto la

existencia de una cultura machista llena de estereotipos que impiden que la norma se materialice y por ende que la mujer no pueda acceder a la justicia.

Así las cosas una manera –entre muchas otras- de contribuir a la superación de este problema podría ser la aplicación de la perspectiva de género. Perspectiva de género o enfoque de género es una categoría de análisis y de praxis que devela desde las miradas de los géneros las relaciones de poder que se construyen en perjuicio y detrimento de las mujeres. Estas relaciones de poder tienen efectos en todos los ámbitos de la cultura social: en el trabajo, la familia, la política, en las organizaciones, el arte, la ciencia, la sexualidad, la historia, la academia y en general en la cotidianidad de la vida misma. La perspectiva de género devela la existencia de una subordinación y dominación que ha sido permanente en la historia de la humanidad contra la mujer, estas relaciones de subordinación y poder se han expresado a lo largo de la historia bajo diversas justificaciones, la más reciente evolucionó con el sistema capitalista, con la necesidad de construir un modelo de familia sostenible al capital, determinando así culturalmente los roles que cada sexo tendría: el hombre el fuerte, proveedor, protector, y capaz; la mujer, débil, sumisa, moldeable, e incapaz.

El resultado de tales roles o comportamientos, fortalecieron la denominada cultura patriarcal, que dotó al hombre de cierto poderío para determinar el destino de las mujeres a través de la violencia. Esta violencia se transformó a su vez en múltiples y variadas expresiones de violencia, (violencia psicológica, emocional, económica, simbólica, patrimonial) todas y cada una de ellas se gesta en el núcleo de la familia y se exteriorizan en los diversos campos de relacionamiento social de los seres humanos; la violencia que se exterioriza en el contexto familiar es la que hoy por hoy se denomina violencia intrafamiliar.

Así las cosas, la pertinencia de aplicar el enfoque de género en las comisarías de familia y en concreto en las medidas de protección es una cuestión urgente, que debe implementarse como

garantía para el efectivo acceso a la justicia para las mujeres, además porque el enfoque o perspectiva de género como herramienta de empoderamiento para las mujeres, hace de ellas mujeres conscientes de las practicas machistas que las rodea todos los días, al ser conscientes de ello, serán mujeres no sumisas, mujeres sin miedo a denunciar o sin miedo a sus parejas, fejes, amigos etcétera, serán mujeres fuertes y seguras de sí mismas para exigir y reivindicar sus derechos.

En este orden de ideas, la investigación sugiere que a la ley 1257 de 2008 le hacen falta varios aspectos normativos para que el enfoque o perspectiva de género de concrete, entre esos aspectos se destacan los iv componentes, que son: (i) Formación, (ii) Instrumentos guía, (iii) Evaluación y (iv) Medidas complementarias. Dentro del componente de formación se señalan los espacios de formación en *mujer, equidad y género*; y la formación en *sensibilización*. En el componente de instrumentos guía se destacan la creación de *protocolos de atención y manuales de capacitación para la aplicación de tratados internacionales de los derechos de las mujeres*; en el componente de evaluación se sugiere mecanismos de *evaluación para los funcionarios* en el sentido de evaluar si están o no aplicando el enfoque de género y se contemplan *medidas disciplinarias para los funcionarios* que nieguen las medidas de protección a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.

REFERENCIAS

Constitución Política. (1991). 36 edición. Legis.

Decreto 1477, Decrero por el cual sse adopta el programa nacioal de casas de justica (44113 1 de agosto de 2000).

Sentencia T 283 (Corte Constitucional 16 de mayo de 2013).

Alza Barco, C. (2006). *El Enfoque Baasado en Derechos ¿Qué es y como se aplica a las políticas públicas?* Lima, Perú: Pontificia Universidad Catolica del Perú.

Araujo, N. F. (2010). *El Acceso a la Justicia como elemento Indispensable del ejercicio de la Ciudadanía Femenina*.

Bergallo, Paola; Moreno, Aluminé;. (2017). *Hacia Políticas Judiciales de Género*. (P. J. Aires, Ed.) Buenos Aires. Argentina: Jusbaire.

Birgin , H., & Gherardi, N. (2008). *La Garantía de Acceso a la Justicia: Aportes Empíricos y Conceptuales*. México: Género, Derecho y Justicia.

Calle, J. (2000). *Acceso a la Justicia: elementos para incorporar un enfoque integral de política pública*. Barcelona, España.

Calle, J. (2009). *Acceso a la Justicia: elementos para incorporar un enfoque integral de política pública*. Perú.

Cappelletti , M., & Garth, B. (1983). *Acceso a la Justicia*. Buenos Aires.

Casal, J. M., Roche, C. L., Ritcher, J., & Chacón Hansón, A. (2005). *Derechos Humanos, Equidad y Acceso a la Justicia*. Caracas, Venezuela: Editorial Texto.

Centro de Justicia para las Mujeres. (2012). *Protocolo para la atención de usuarias y víctimas en los Centros de Justicia para las Mujeres en México*. México: Centro de Justicia para las Mujeres.

Comisión Colombiana de Juristas. (1997). Constitución Política de Colombia. En M. Barreto, & L. Sarmiento, *De los derechos, las garantías y los deberes* (pág. 449). Bogotá: Ricardo Alonso.

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. (2013). *Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de Colombia*. Colombia: Naciones Unidas.

Cooperación Sisma Mujer. (2016). *Ley 1257 Ocho años de obstáculos en la protección integral para las mujeres víctimas de violencias. Informe de seguimiento a la Ley 1257 de 2008*. Bogotá.: Ediciones Antropos Ltda.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2012). *Control de Convencionalidad* . San José de Costa Rica.

Cruz Loaiza, M. A. (2017). Acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano. *Trabajo de Grado*. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.

- DANE. (2016). *Censo Agropecuario*. Colombia.
- DANE. (2018). *Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH-*. Colombia, Bogotá.
- Equidad para la Mujer Presidencia de la República de Colombia. (2015). *Segunda Medición del Estudio Sobre Tolerancia Social e Institucional de las Violencias contra las Mujeres*. Bogotá: Presidencia de la República de Colombia.
- Facio, A., & Fries, L. (1999). *Género y Derecho*. Santiago de Chile: Morada.
- Froid, S. (1925). *Einige psychische Folgen des anatomischen*. Berlin, Alemania: Int. Z. Psychoanal, 11, n° 4, págs. 401-10.
- Gamba, S. (2008). *¿Qué es la perspectiva de género y los estudios de género?* Mujeres es Red.
- Garb, N. (2015). *La importancia del Comité de la CEDAW para las mujeres del espacio euromediterráneo*. Bruselas: Quaderns de la Mediterrània.
- Género, Corporación Humanas Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de. (2016). *Las medidas de protección a mujeres víctimas de violencia: Análisis de la ley 1257 de*. Bogotá.
- Graíño, C. S. (2007). *La Educación de las Mujeres en el Transito de la Edad Media a la Modernidad*. España, Madrid: Universidad de Salamanca.
- Guzmán Rodríguez, D. E. (2011). Justicia transicional y género: un acercamiento desde las mujeres. *Trabajo de Grado*. Universidad Nacional de Colombia.
- Guzman Rodríguez, D. E., & Chaparro Gonzáles, N. (2013). *Restitución de Tierras y Enfoque de Género*. Bogotá: Antropos.
- Guzmán Rodríguez, D. E., & Prieto Dávila, S. C. (2013). *Acceso a la justicia: Mujeres, conflicto armado y justicia*. Bogotá: Dejusticia.
- Incháustegui Romero, T. (1999). *La institucionalización del enfoque de género en las políticas públicas*. Ciudad de México: La Ventana.
- Instituto Nacional de las Mujeres. (2008). *Guía metodológica para la sensibilización en género: Una herramienta didáctica para la capacitación*. México: Instituto Nacional de las Mujeres INMUJERES.
- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2016). *Forensis datos para la vida*. Bogotá.
- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2016). *Forensis datos para la vida*.
- Lerner, G. (1986). *The Creation of Patriarchy*. New York: Oxford University Press.
- Ley1257. (4 de diciembre de 2008). Congreso de Colombia. *"Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones"*. DO: 47193.
- Mendieta, C. (21 de abril de 2018). Entrevista. (P. Murillo, Entrevistador)

- Mesa por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias, Ley 1257 de 2008. (2013). *II Informe de seguimiento a la Ley 1257 de 2008*. Bogotá: Antropos Ltda.
- Mesa por la Ley 1257. (2012). *Informe de la mesa sobre la implementación de la Ley 1257 y su estado actual de cumplimiento*. Bogotá.
- Mesa por la Ley 1257 de 2008. (2013). *Ley 1257, cinco años después. II Informe de Seguimiento a la Ley 1257*. Bogotá: Antropos Ltda.
- Oficina Regional para América Central del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. . (2017). *Modelo de Protocolo para la Investigación*. .
- ONU. (1979). *Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer*. Ginebra: ONU.
- ONU. (1979). *Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer*.
- ONU. (2005). *Manual de Políticas Públicas para el Acceso a la Justicia*. Buenos Aires, Argentina : ONU.
- OXFAM. (2017). *Radiografía de la Desigualdad*. . Colombia, Bogotá: Oxfam.
- Pérez Garzón, J. S. (2011). *Historia del Feminismo*. México: Catarata.
- Pinzón, L. (2013). Acceso a la justicia en Colombia. Condiciones de posibilidad y criterios de gestión. *Trabajo de Grado*. Universidad Nacional de Colombia .
- Ripoll, J. L. (2014). *Introducción: El origen de la Constitución*.
- Rueda, P. (25 de abril de 2018). Entrevista. (P. Murillo, Entrevistador)
- Salvatierra, I. H. (2009). *¿Es la Violencia de Género y el Acceso a la Justicia un Asunto de Derechos Humanos?*
- Serret Bravo, E. (2008). *Qué es para qué es la Perspectiva de Género*. México.
- Sisma Mujer. (14 de junio de 2018). *Sisma Mujer*. Obtenido de <https://www.sismamujer.org/>
- Stoller, R. (1968). *Sex and Gender*. New York: Sciencw House.
- Thorne, B., Kramarae, C., & Henley, N. (1983). *Language Gender and Society*. Newbury House .
- Universidad Nacional Autónoma de México . (2011). *El derecho de acceso ala justicia en el derecho internacional de los derechos humanos y su perspectiva internacional vs inmigrante en situacion irregular*. Ciudad de México: UNAM.
- Zorio, S. (23 de abril de 2018). Entrevista. (P. Murillo, Entrevistador)

